



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Discriminación, violencia y justicia de género

Análisis a la luz del caso de El Salado

Astrid Orjuela Ruiz

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Humanas, Escuela de Estudios de Género
Bogotá, Colombia
2012

Discriminación, violencia y justicia de género

Astrid Orjuela Ruiz

Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de:
Magister en Estudios de Género

Directora:

Luz Gabriela Arango

Codirectora:

Julissa Mantilla

Línea de Investigación:

“Globalización, Desigualdades Sociales y Políticas Públicas”

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias Humanas, Escuela de Estudios de Género

Bogotá, Colombia

2012

Agradecimientos

Este trabajo fue posible gracias al aporte de varias personas. En primer lugar, quiero agradecer a Luz Gabriela Arango y a Julissa Mantilla por la dirección de este escrito y, en especial, por haberme ayudado a poner en diálogo el derecho y los estudios de género. Sus orientaciones fueron determinantes para lograr este texto.

Un agradecimiento especial merecen Diana, Argenida, María, Juana y sus familias. A través de ellas conocí de primera mano el caso de El Salado y reafirmé mis convicciones sobre la necesidad de hacer justicia desde una perspectiva diferenciada a las víctimas de la violencia sociopolítica en Colombia.

Ana María Díaz, Diego Abonia y Elcida Molina, merecen un reconocimiento especial. A Ana María le debo gran parte de mi interés por los derechos de las mujeres. Junto a Diego y Elcida conocí y entendí muchas de las implicaciones del caso de El Salado y dote de significado este trabajo.

Finalmente, quiero agradecer a mis padres por su apoyo incondicional y a Carlos por su amor y complicidad en todos mis proyectos y por su lectura juiciosa y comentarios de cada una de las versiones de este escrito.

Resumen

El presente trabajo pretende aportar una definición de violencia y justicia de género que articule una perspectiva jurídica y los estudios de género desde las ciencias sociales. A partir de estos elementos se señala que la violencia de género se construye a partir de los símbolos que representan lo masculino y lo femenino en un plano jerárquico y que otorgan significados superiores y universales a lo asociado a lo masculino y como manifestación de la discriminación de lo que se representa como femenino. Se presenta también una definición de justicia de género que la ubica como aquella que tiene la pretensión normativa de remediar en forma cualificada y concreta los efectos perjudiciales de actos de violencia de género, con el fin de transformar las relaciones desiguales de poder y los símbolos que representan lo masculino y lo femenino en un plano jerárquico y universalista. Estas definiciones, se ubican en el presente trabajo, en el contexto colombiano, a partir del análisis de un caso de graves violaciones a los derechos humanos marcado por hechos constitutivos de violencia de género.

Palabras clave: Violencia de género, justicia de género, discriminación, El Salado.

Abstract

This thesis attempts to provide a definition about Violence and Gender Justice which articulates a Legal Perspective with Gender Studies from Social Sciences. Furthermore, it affirms that Gender Violence is built by means of the symbols that represent Masculinity and Femininity, in a hierarchical perspective which attributes universal and superior meaning to Masculinity. It expresses discrimination against Femininity. This thesis also

offers a definition of Gender Justice as the normative pretention of remedying qualifiedly and concretely the harmful effects of Gender Violence acts, in order to transform power's unequal relationships and symbols which represent Masculinity and Femininity in a Hierarchical and Universalist perspective. These definitions are located in the Colombian context, starting with the analysis of a case of serious Human Rights Violations which involves Gender Violence.

Keywords: Gender violence, gender justice, discrimination, El Salado.

Contenido

	<u>Pág.</u>
Resumen	2
Introducción	6
1. Los puntos de partida	¡Error! Marcador no definido.
1.1 ¿Qué entiendo por género?.....	9
1.2 El estudio de asuntos jurídicos desde las ciencias sociales	13
1.2.1 Los derechos humanos como reproducción de relaciones desiguales de poder	14
1.2.2 El derecho como foco de la crítica feminista	18
1.2.3 El derecho como herramienta de cambio	20
1.3 Metodología del trabajo	21
2. El caso de El Salado	24
3. ¿Qué entiendo por violencia de género?	29
1.4 La violencia de género en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos	30
1.4.1 De la prohibición de discriminación al concepto de violencia contra las mujeres: Principales instrumentos internacionales de derechos humanos y sobre derechos de las mujeres	31
1.4.2 De la prohibición de discriminación al concepto de violencia contra las mujeres: relaciones entre categorías.....	41
1.4.3 Fortalezas y vacíos de la definición de violencia contra las mujeres en el DIDH44	44
1.4.4 La violencia contra las mujeres como violación a los derechos humanos	46
1.5 La Violencia sexual en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario	47
1.6 Proponiendo una definición de violencia de género	53
1.7 ¿Cómo clasificar la violencia de género?.....	56
1.7.1 Usos y efectos de la violencia	56
1.7.2 Manifestaciones de la violencia en el marco del conflicto armado.....	62
1.8 A modo de conclusión.....	66
4. ¿Qué entiendo por justicia de género?	68
1.9 Proponiendo una definición de justicia de género	68
1.9.1 La justicia desde una perspectiva jurídica: el derecho a la justicia en el marco normativo colombiano	69
1.9.2 La justicia desde una perspectiva teórica	72
1.9.3 Articulando la redistribución y el reconocimiento	76
1.9.4 Articulando las perspectivas jurídicas y teóricas: materializando la justicia de género	80
1.10 Trasformación: reconocimiento de las víctimas de violencia de género como sujetos de derechos	97
6. Conclusiones	102

7. Anexos	104
Anexo A. Caracterización del corregimiento de El Salado.....	104
Anexo B. Caracterización del conflicto armado en el corregimiento de El Salado	107
Anexo C. La primera masacre: 1997.....	109
Anexo D. La segunda masacre: 2000.....	111
- El contexto general de violaciones a los derechos humanos ocurridas en la masacre de 2000.....	112
Anexo E. Fotografías, tablas y mapas	121
Foto 1.....	121
Foto 2.....	121
Foto 3.....	121
Foto 4.....	122
Foto 5.....	122
Fotos 6 y 7.	123
Tabla 1.....	123
Tabla 3.....	124
Mapa 1.....	124
8. Bibliografía	126
8.1 Jurisprudencia	126
8.2 Instrumentos Internacionales	127
1.1 8.3 Libros, capítulos de libros y documentos.....	128

Introducción

En la actualidad, numerosos estudios jurídicos se refieren al género, a la violencia de género y a la justicia de género. Sin embargo, muchos de ellos no ofrecen una definición contundente de cada una de estas categorías. En ocasiones, el derecho internacional de los derechos humanos asimila el género a la categoría “mujeres”¹ y muchas veces, cuando jueces y tribunales se refieren a la violencia y la justicia de género, lo hacen en alusión a la violencia contra y la justicia para las mujeres, lo que los ubica en un marco interpretativo limitado.

Por lo anterior, partiendo del análisis de las categorías sexo y género desde las ciencias sociales, esto es, más allá de las definiciones e interpretaciones jurídicas, pretendo aproximarme a una definición de la violencia y la justicia de género, que trascienda la categoría “mujer” y que sea útil para el análisis jurídico y las exigencias de las víctimas de violencia y discriminación de género. Ahora bien, aunque el análisis que pretendo hacer no asocia las categorías género y mujeres como equivalentes, me referiré a la violencia de género cometida contra mujeres y a las exigencias en materia de justicia de género de las mujeres víctimas.

Para ello, me valgo del análisis de un grave caso de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario ocurrido en Colombia en el año 2000: La masacre de El Salado, caso caracterizado por graves hechos de violencia de género, en los términos en que entiendo esta categoría.

A partir del análisis de este caso, pretendo construir una definición de la categoría “violencia de género” que considere los instrumentos jurídicos relacionados i) con la prohibición de discriminación, en general; ii) con la prohibición de discriminación y violencia contra las mujeres, en particular; y iii) con la sanción de la violencia sexual. Con

¹ Sobre la incorporación de la perspectiva de género en el Sistema de Naciones Unidas ver: Informe del Secretario General, Período de sesiones sustantivo de 2011, Ginebra, 4 a 29 de julio de 2011, Cuestiones de coordinación, de programas y otras cuestiones, Incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas y los programas del sistema de las Naciones Unidas, documento: E/2011/114 (Secretario General de las Naciones Unidas, 2011).

esta definición y la constatación de que en el caso de El Salado existieron hechos constitutivos de violencia de género, que clasifiqué según sus efectos y manifestaciones, construí una definición de la categoría “justicia de género” y señalé qué se necesitaría desde una perspectiva teórica y práctica para alcanzarla.

Con lo anterior, pretendo dotar de un contenido más completo y complejo, construido mediante el estudio del género desde las ciencias sociales y desde los derechos humanos, categorías y prácticas jurídicas que pueden ser útiles para lograr igualdad en un contexto de violencia e injusticia social como el colombiano. Parto de la idea de que los derechos humanos ofrecen herramientas para el logro de cambios estructurales en la sociedad en materia de justicia de género.

Para realizar este análisis, reivindicó mi posición de abogada, defensora de derechos humanos y de derechos de las mujeres y la importancia del papel del derecho, en general, y de los derechos humanos, en particular, en las exigencias de justicia de género. Reivindicó también que el ejercicio del derecho no es neutral y que los operadores jurídicos deberían asumir una posición en favor de la igualdad material entre todos y todas.

Además, debo advertir que este trabajo está marcado por mi experiencia como abogada de cuatro mujeres víctimas sobrevivientes de la masacre de El Salado y sus familias, quienes exigían el derecho a una atención en salud diferenciada en razón del género y de su experiencia como víctimas de la violencia socio-política, ejercicio de exigibilidad de derechos que fue exitoso desde el punto de vista jurídico, aunque no de igual manera en materia de cambios sustanciales en la vida de estas mujeres². A ellas y a sus familias les

² Como abogada de la Comisión Colombiana de Juristas elaboré la acción de tutela que dio lugar a la sentencia T-045 de 2010, cuya ponencia estuvo a cargo de la magistrada María Victoria Calle. Esta acción de tutela solicitaba la garantía del derecho a la salud desde una perspectiva integral, de cuatro mujeres víctimas sobrevivientes de la masacre de El Salado. La tutela fue negada en primera instancia. La Corte Constitucional seleccionó esta tutela para su revisión, revocó la sentencia de primera instancia y emitió una serie de órdenes puntuales y complejas, entre las primeras, ordenó garantizar el derecho a la salud de las tutelantes, sus familias y comunidad. Dentro de las complejas, ordenó al Ministerio de la Protección Social que “diseñe e implemente los protocolos, programas y políticas necesarias de atención en salud que respondan a las necesidades particulares de las víctimas del conflicto armado, sus familias y comunidades, especialmente en lo referido a la recuperación de los impactos psicosociales, producidos por su exposición a eventos traumáticos desencadenados por la violencia sociopolítica en el país (...)” (T - 045, 2010). A la fecha la sentencia de la Corte no ha sido cumplida a cabalidad.

debo el convencimiento de que mi ejercicio profesional debe estar siempre en favor de las víctimas.

Finalmente, con el análisis del caso de El Salado, pretendo contribuir de manera modesta a hacer memoria, en un país que se esfuerza por olvidar a las mujeres que han sido víctimas de discriminación y violencia por quienes pretenden instaurar modelos homogéneos de economía, cultura y vida cotidiana. En homenaje a ellas y a las víctimas sobrevivientes que lideran las exigencias de justicia, se inscribe este texto.

1. Los puntos de partida

Este escrito parte del estudio del género y del estudio de los derechos humanos desde las ciencias sociales y pretende identificar, desde una perspectiva teórica, los mínimos que se requieren para hacer justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos, marcados por el ejercicio de violencia de género. Este análisis se ubica en la intersección entre el derecho y los estudios de género y pretende realizarse desde una perspectiva crítica de las instituciones jurídicas, que a la vez reconoce en la práctica del derecho herramientas para alcanzar logros en materia de justicia de género.

1.1 ¿Qué entiendo por género?

“¿Qué es una mujer domesticada? Una hembra de la especie. Una explicación es tan buena como la otra. Una mujer es una mujer. Sólo se convierte en doméstica, esposa, mercancía, conejito de Playboy, prostituta o dictáfono humano en determinadas relaciones. Fuera de esas relaciones no es la ayudante del hombre igual que el oro en sí no es dinero” (Rubin, 2000:36).

Antes de analizar los asuntos relacionados con la justicia de género para las víctimas de la masacre de El Salado, considero necesario explicitar qué entiendo por género y en que forma utilizo esta categoría a lo largo de este escrito.

Para ello comenzaré por aclarar, siguiendo a Joan Scott, que no entiendo la categoría género como sinónimo de mujeres³. Entiendo el género, como la forma en que se

³ “En su acepción reciente más simple, ‘género’ es sinónimo de ‘mujeres’. En los últimos años, cierto número de libros y artículos cuya materia es la historia de las mujeres sustituyeron en sus títulos ‘mujeres’ por ‘género’. En algunos casos, esta acepción, aunque se refiera vagamente a ciertos conceptos analíticos se relaciona realmente con la acogida política del tema. En esas ocasiones, el empleo de ‘género’ trata de subrayar la seriedad académica de una obra, porque ‘género’ suena más neutral y objetivo que ‘mujeres’. ‘Género’ parece ajustarse a la terminología científica de las ciencias sociales y se desmarca así de la (supuestamente estridente) política del feminismo. En esta acepción, ‘género’ no comporta una declaración necesaria de desigualdad o de poder, ni nombra al bando (hasta entonces invisible) oprimido”(Scott, 2000:270).

construyen culturalmente las diferencias sexuales y se tejen relaciones sociales y simbólicas de poder, a las cuales el derecho no es inmune, y frente a las cuales no debería ser un espectador pasivo o un legitimador.

Entender el género como una construcción cultural, implica superar los binarismos basados en la diferenciación entre macho y hembra con base en características físicas y biológicas seleccionadas, que oponen lo femenino a lo masculino “por lo general, no en un plan de igualdad, sino en un orden jerárquico” (Conway, Bourque, & Scott, 2000).

La idea de que el género es una construcción cultural no es novedosa. En 1935 Margaret Mead planteó que el género era cultural y no biológico. Sin embargo, los estudios que privilegiaban lo biológico predominaban. Así, las ideas planteadas por Mead fueron relegadas y las posiciones teóricas que entendían las diferencias entre los hombres y las mujeres como resultado exclusivo de las diferencias biológicas, resultaron predominantes en el estudio de las ciencias sociales (Conway, Bourque, & Scott, 2000: 21 - 22).

El predominio del determinismo biológico marcó las construcciones teóricas relacionadas con el género, y se manifestó en “la tendencia universal a asociar lo masculino con la cultura, y a considerar que lo femenino se encuentra más cercano a la naturaleza” (Ortner & Whitehead, 2000: 139). Por otro lado, también se asoció a las mujeres con los temas privados y a los hombres con lo público y universal⁴.

Superando las posiciones basadas en el binarismo biológico, estudiosas feministas, algunas de ellas partiendo de las consideraciones de Margaret Mead, plantearon la idea de que el género no está determinado biológicamente, sino que se trata de una construcción cultural, que por ello, no se asume en un momento de la vida, sino que constituye un proceso⁵.

⁴“Las asociaciones simbólicas relativas al género han variado mucho, han tendido a contraponer el individualismo a las relaciones mutuas, lo instrumental o artificial a lo naturalmente procreativo, la razón a la intuición, la ciencia a la naturaleza, la creación de nuevos bienes a la prestación de servicios, la explotación a la conservación, lo clásico a lo romántico, las características humanas universales a la especificidad biológica, lo político a lo doméstico, y lo público a lo privado. Lo interesante de estas oposiciones binarias es que nos permiten ver procesos sociales y culturales mucho más complejos, en los que las diferencias entre mujeres y hombres no son ni aparentes ni están claramente definidas” (Conway, Bourque, & Scott, 2000: 32).

⁵ De acuerdo con Judith Butler, “no es posible asumir el género en un instante, sino que se trata de un acto sutil y estratégico, laborioso y en su mayor parte encubierto. Llegar a ser género es un proceso, impulsivo, aunque cuidadoso,

Ahora bien, así como el género es una construcción cultural, también es posible señalar que el sexo se elabora culturalmente, pues aunque “sin duda alguna existen diferencias que son binarias, materiales y distintas, y no nos hallamos atrapados por la ideología política cuando asentimos a este hecho” (Butler, 2000: 315), las diferencias biológicas no son suficientes para determinar los comportamientos de las personas. De tal suerte que el género y el sexo, así como lo que se considera masculino o femenino, no son reflejos exactos de los datos biológicos, sino elaboraciones, producto de relaciones sociales y culturales (Ortner & Whitehead, 2000: 128) y el cuerpo humano es una situación, un nexo entre una realidad biológica, formas culturales y elecciones⁶.

Habiendo establecido que entiendo el sexo y el género como construcciones culturales y al cuerpo como una situación, cabe destacar la definición que aporta Gayle Rubin del sistema sexo/género como un concepto neutro en el cual la opresión no es una característica de la definición, sino producto de las relaciones humanas. De acuerdo con Rubin, este concepto se refiere a la forma en que “la sociedad trasforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas” (Rubin, 2000: 37 y 46). En este mismo sentido Joan Scott define la categoría género como “un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y [] una forma primaria de relaciones significantes de poder” (Scott, 2000: 289 - 290). De acuerdo con Scott, el género, como elemento constitutivo de las relaciones sociales, incluye cuatro elementos:

- i. Los símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones de lo masculino y lo femenino;

de interpretar una realidad cultural cargada de sanciones, tabúes y prescripciones. La elección de vivir determinado tipo de cuerpo, vivir o vestir el propio cuerpo de determinada manera, implica un mundo de estilos corpóreos ya establecidos. Elegir un género es interpretar las normas de género recibidas de un modo tal que las reproduce y organiza de nuevo. Siendo menos de un acto de creación radical, el género es un proyecto tácito para renovar una historia cultural en los términos corpóreos de uno” (Butler, 2000:309).

⁶ Judith Butler señala que el cuerpo es “un nexo peculiar de cultura y elección, y ‘existir’ el propio cuerpo se convierte en una forma personal de asumir y reinterpretar las normas de género recibidas”. En este sentido, “la noción de cuerpo natural y, desde luego, de un ‘sexo’ natural se hace cada vez más sospechosa. Los límites del género, la gama de posibilidades de una interpretación vivida de una anatomía sexualmente diferenciada, parece menos restringida por la anatomía que por el peso de las instituciones culturales que convencionalmente han interpretado esa anatomía” (Butler, 2000:312 - 313).

- ii. Los conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de estos símbolos culturalmente disponibles;
- iii. Las instituciones políticas y las referencias a las instituciones y organizaciones sociales; y
- iv. La identidad subjetiva.

Conforme a lo anterior, el sexo y el género no son categorías biológicas en las que esté subsumida o incluida la opresión o la discriminación, o que la supongan. Se trata de espacios en disputa donde las relaciones de poder y las construcciones culturales han dado lugar a la consideración de lo masculino y sus significantes como superiores y a asociaciones simbólicas de lo masculino como universal, público y político⁷. Asociaciones que contraponen lo masculino y lo femenino en una relación de sujeto - objeto⁸.

Ahora bien, las relaciones de sexo y género, por ser construidas culturalmente, varían históricamente y dan lugar a configuraciones específicas de regímenes de género que interactúan con el conjunto de las relaciones sociales, de tal suerte que las formas como se configura la discriminación y la opresión varían dependiendo del momento histórico y del lugar que se ocupa en el mundo.

Adicionalmente las relaciones de sexo y género se intersectan a su vez con las relaciones de clase, etnia y raza, en el marco de construcciones culturales jerarquizantes y excluyentes⁹. Si bien estas últimas tienen algunas diferencias respecto de aquellas basadas

⁷ “Desde el surgimiento del pensamiento liberal clásico, y tal vez desde los tiempos de Platón, nuestro pensamiento se ha estructurado en torno de series complejas de dualismos o pares opuestos: racional/irracional, activo/pasivo, pensamiento/sentimiento, razón/emoción, cultura/naturaleza, poder/sensibilidad, objetivo/subjetivo, abstracto/ concreto, universal/particular. Estos pares duales dividen las cosas en esferas contrastantes o polos opuestos. Tres características de este sistema de dualismos resultan importantes para la discusión que sigue. Primero, los dualismos están sexualizados. Una mitad de cada dualismo se considera masculina y la otra mitad, femenina. Segundo, los términos de los dualismos no son iguales sino que constituyen una jerarquía. En cada par, el término identificado como “masculino” es privilegiado como superior, mientras que el otro es considerado como negativo, corrupto o inferior. Y tercero, el derecho se identifica con el lado “masculino” de los dualismos” (Olsen, 1990:1).

⁸ Ver supra nota No. 4.

⁹ Un reflejo de esta situación se evidencia en el hecho de que aunque “en América Latina, la población indígena llega a 40 millones (...) [y] la población afrodescendiente es de 150 millones”, en los países con mayor concentración de esta población “persisten profundas desigualdades y una distancia marcada e inaceptable en los indicadores de acceso a bienes y servicios. Negros e indígenas son los que más sufren esta desigualdad, pero sobre todo las mujeres negras e indígenas. Son las más pobres entre los pobres” (Ribeiro, 2008:132).

en el sexo y el género¹⁰, las construcciones culturales a su alrededor se entrecruzan, dando lugar a opresiones con doble o triple motivo¹¹, esto es, discriminaciones basadas en la raza, la clase, la etnia, el sexo y el género que recaen sobre una misma persona.

1.2 El estudio de asuntos jurídicos desde las ciencias sociales

El segundo punto de partida de este escrito es el estudio de los derechos humanos en su componente jurídico¹², desde las ciencias sociales. Este análisis parte de tres premisas, la primera, que “el derecho, entendido como el conjunto de instituciones formales que regulan la vida en sociedad, no podía dejar de ser uno de los principales focos de la crítica feminista”, la segunda, que el derecho es “una de las más importantes herramientas dentro de la lucha de las mujeres [y en general, de los grupos históricamente discriminados y marginados] por alcanzar el lugar que desean tener dentro de la sociedad” (Jaramillo, 2000: 27) y la tercera, que el hecho de vivir en una sociedad regulada por instituciones jurídicas, es decir, caracterizadas esencialmente por la coerción, hace que el examen al ejercicio de hacer justicia a las víctimas de violencia de género pase inevitablemente por el análisis crítico del diseño y funcionamiento de algunas cuestiones legales. Estas premisas hacen relevante para esta tesis el estudio de asuntos jurídicos desde las ciencias sociales.

¹⁰ Pese a algunas diferencias, la discriminación basada en la raza, la clase y el género tiene también similitudes. Así, por ejemplo, de acuerdo con Mara Viveros, tanto el racismo como el sexismo propenden por naturalizar la diferencia y la desigualdad de varias maneras. “La primera, ambos acuden al argumento de la naturaleza para justificar y reproducir las relaciones de poder fundadas sobre las diferencias fenotípicas. La segunda, ambos asocian estrechamente la realidad “corporal” y la realidad social, anclando su significado en el cuerpo, locus privilegiado de inscripción del carácter simbólico y social de las culturas. La tercera, el sexismo, como el racismo representan a las mujeres y a los otros como grupos naturales, predispuestos a la sumisión. De la misma manera que a las mujeres se les atribuye un estatus de objetos sexuales, a los otros se los reifica como objetos raciales o étnicos (Viveros, 2009:66).

¹¹ Al respecto y sobre el caso colombiano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 2006 titulado “Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia”, señaló que: La situación de las mujeres indígenas y afrocolombianas es particularmente crítica al ser víctimas de múltiples formas de discriminación por causa de su raza, etnia y por el hecho de ser mujeres, situación que se agrava dentro del ámbito del conflicto armado. Enfrentan dos estratos de discriminación desde que nacen: el primero por pertenecer a su grupo racial y étnico y el segundo por su sexo (CIDH, 2006:102).

¹² Para efectos de este trabajo entiendo el derecho como las normas positivas “que prescriben o autorizan una conducta determinada y afirman que en tales condiciones tal individuo debe conducirse conforme a una norma dada” (Kelsen, 2006, pág. 21). Sin embargo, alejándome de teorías clásicas del derecho, entiendo también que dichas normas responden a arreglos de género, raza y clase, esto es, no son abstractas, de modo que su aplicación responde a intereses en juego. Con esto, afirmo que el presupuesto según el cual el derecho es racional, objetivo y universal es falso y que estas asociaciones, responden a un concepto masculino de derecho (Olsen, 1990:3).

1.2.1 Los derechos humanos como reproducción de relaciones desiguales de poder

El derecho y la práctica jurídica no han sido ajenos a los binarismos jerarquizantes, que ubican a lo masculino como universal y como superior a lo femenino. Esto se debe en gran medida a que “cualesquiera que sean las funciones y disfunciones a cuyo servicio está el derecho, a menudo reproduce normas, actividades y relaciones que existen con independencia del derecho” (Ewick & Silbey, 2001:273). Es decir, en la práctica jurídica se suelen reproducir los esquemas culturales y estos se presentan como normas generales y abstractas que rigen la vida en sociedad. Ahora bien, el carácter coercitivo del derecho puede contribuir sustancialmente a que esos patrones culturales perduren en el tiempo de una manera distinta a la que lo harían en ausencia de esa protección jurídica.

En este punto es relevante retomar la definición propuesta por Joan Scott, de acuerdo con la cual el género es “un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos”, que incluye *conceptos normativos* que manifiestan interpretaciones de los significados de los símbolos culturalmente disponibles, que a su vez evocan representaciones de lo masculino y lo femenino (Scott, 2000).

Joan Scott señala que los conceptos normativos “manifiestan las interpretaciones de los significados de los símbolos en un intento de limitar y contener sus posibilidades metafóricas” y se reflejan en “doctrinas religiosas, educativas, científicas, **legales** y políticas, que afirman categóricamente y unívocamente el significado de varón y mujer, masculino y femenino”. En el marco de estos conceptos normativos, de acuerdo con Scott (2000), la posición dominante se expresa como la única posible y la historia se escribe como si las posiciones normativas fuesen el resultado de un amplio consenso social.

Estudiar los derechos humanos desde las ciencias sociales y en especial desde una perspectiva de género implica señalar que los conceptos normativos no son el resultado de un amplio acuerdo social, sino que ocultan relaciones de poder y opresión que presentan el binarismo sexual y la superioridad y universalidad de lo masculino como presupuestos de

las relaciones sociales. Implica además reconocer que el derecho es construido por las relaciones de género vigentes en la sociedad de que se trate. De tal suerte que los conceptos normativos permiten establecer, por una parte, la diferenciación entre los dos sexos, reproduciendo y consagrando jurídicamente el binarismo sexual, y por otra, definen lo que se entiende por cada género, lo que tiene importantes implicaciones, considerando que las normas jurídicas tienen un gran poder simbólico y performativo en las sociedades modernas, en general y en una sociedad como la colombiana en la que, pese a todo, el Estado tiene capacidad relativa para ejercer el uso jurídicamente autorizado de la fuerza.

Ahora bien, los denominados “derechos humanos”, a pesar de que pueden ser interpretados como avances relativos, han reproducido los conceptos normativos vigentes en cada momento histórico, esto es, esquemas culturales de ejercicio arbitrario y desigual del poder¹³. Para demostrar lo anterior cabe destacar dos hitos. El primero, las revoluciones burguesas, que permiten hablar por primera vez de los derechos del hombre y el ciudadano, y el segundo, la declaración de derechos humanos¹⁴.

Las revoluciones burguesas o liberales pretendían enfrentarse a regímenes injustos, en los que las diferencias de clase estaban marcadas por el nacimiento y el linaje y “la vida se vivía como un destino y no como una trayectoria por construir, y el lugar que se ocupaba al nacer sólo excepcionalmente era susceptible de ser transformado” (Wills Obregón, 2007: 35). Frente a ello se planteó que el orden social debía ser el resultado de acuerdos entre hombres libres e iguales. Sin embargo, los acuerdos se harían entre los hombres burgueses de la época. Mientras tanto, a las mujeres se les negó el derecho a elegir y ser elegidas, a administrar sus propiedades, a asistir a las universidades y “se les imputó una esencia trascendente que las presentaba como criaturas cercanas a la naturaleza, emocionales,

¹³ Siguiendo a Hilary Charlesworth, reconozco que “los análisis de los fundamentos y del alcance del derecho internacional de los derechos humanos frecuentemente caen en un lenguaje heroico o místico: es casi como si esta rama del derecho internacional fuera demasiado valiosa y demasiado frágil para resistir ser criticada. [Sin embargo,] el desarrollo de los derechos humanos internacionales de la mujer desafía esta renuncia a examinar los fundamentos de los derechos humanos” (Charlesworth, 1997:56).

¹⁴ “Vale la pena anotar, para comenzar, que con excepción de la Convención sobre los derechos del niño, todos los instrumentos ‘generales’ de derechos humanos se refieren únicamente a los hombres. La importancia del lenguaje en la construcción y reafirmación de la subordinación de la mujer ha sido profusamente analizada por investigadores feministas y el vocabulario consistentemente masculino del derecho de los derechos humanos opera tanto directa como sutilmente para excluir a las mujeres. De manera más básica, todo el derecho internacional de los derechos humanos depende y refuerza la distinción entre el mundo público y privado, distinción que produce ensordecimiento, y con frecuencia un silenciamiento, de las voces de las mujeres” (Charlesworth, 1997:65).

intuitivas, arrastradas por sus pasiones, ancladas al pensamiento concreto y con una inclinación natal hacia el cuidado de los otros” (Wills Obregón 2007: 34).

Así, las cláusulas de igualdad, libertad y fraternidad predicadas en la Revolución Francesa, reprodujeron los esquemas de dominación patriarcal de la época, de tal suerte que los derechos del hombre y el ciudadano, fueron desde su inicio tan excluyentes como la sociedad a la que se impusieron y los sujetos con derechos fueron los “varones blancos, mayores de edad, propietarios y con capacidad de pagar impuestos” (Wills Obregón, 2007: 34). De esta forma las revoluciones liberales contribuyeron a la subordinación de las mujeres y a su asignación al ámbito privado.

Las aspiraciones burguesas de espacios de autorregulación, excluidos del poder del Estado, se tradujeron en la exclusión de las mujeres de la vida pública y su asignación a la vida privada, donde la primera era el espacio de las grandes realizaciones y la segunda el espacio de los sentimientos y las tareas domésticas que “más que verse como labores, fueron vistas como extensiones de la naturaleza femenina” (Wills Obregón, 2007:40). Adicionalmente, en la esfera privada se aplicaba la “ley del padre” siendo el hombre quien dirimía los conflictos y establecía reglas y sanciones¹⁵.

Algunos hombres y mujeres no se conformaron con esta situación. En este sentido son reconocidos los aportes de Olympe de Gouges que escribió la “Declaración de derechos de la mujer y la ciudadana”, y de John Stuart Mill en su libro “El sometimiento de las Mujeres”, entre las contribuciones a una igualdad y libertad para todas las personas. También es reconocida como un ejemplo histórico la resignificación del lenguaje de la revolución por parte de las mujeres de la época quienes “adoptaron los mismos términos

¹⁵ Estas ideas que ubican a las mujeres en el ámbito privado y sometidas a la “ley del padre” se mantienen aún hoy en el imaginario de personas y comunidades. El Grupo de Trabajo de Memoria Histórica se refiere así a esta situación: “Las narraciones que escuchamos en los talleres describen claramente las jerarquías que ubican a los miembros de una familia, ya sea en lugares de poder y mando, o por el contrario, de obediencia y subordinación. Esta escala, que va de mayor a menor poder, se organiza en cuanto a género y generación. ‘El hombre de la Costa está acostumbrado a que él es el que manda, y él es el que todo y uno como sumiso [...] porque el hombre costeño es machista [...] Machista, es que él es el que manda y si uno no hace caso, le pega como el papá con un hijo [...] aquí los hombres acostumbran a pegarle a la mujer como si ellas fueran sus hijas’. Así, en este tipo de orden las mujeres son asimiladas a los menores de edad que deben ser educados, reprendidos y vigilados a través de repertorios que incluyen la violencia física” (GTMH, 2011).

denostativos con los cuales los revolucionarios interpelaban al Antiguo Régimen” y hablaban de “maridos ‘aristócratas en sus hogares’, de que los varones se reservaban ‘privilegios’, justamente en una sociedad donde ‘la aristocracia’ y ‘el privilegio’ son términos con una carga estigmatizadora y denostativa enorme” (Amoros, 2008:19 -20).

El segundo ejemplo que sirve para evidenciar cómo los derechos humanos han reproducido esquemas culturales de dominación y opresión, es la Declaración de derechos humanos. Luego de la firma del Tratado de Versalles que puso fin a la primera guerra mundial se creó la “Sociedad de Naciones”, organismo internacional que pretendía poner en marcha las bases para la reorganización de las relaciones internacionales después de la guerra. Esta organización de naciones no tuvo éxito como lo prueba la tragedia de la segunda guerra mundial.

Como respuesta a la atrocidad y ante el fracaso de la Sociedad de Naciones, el 24 de octubre de 1945 fue fundada en San Francisco (California), la Organización de Naciones Unidas. Tres años después, la Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos¹⁶, la cual, como la declaración de derechos del hombre y el ciudadano proclamada en la Revolución Francesa, no se ocupa de los derechos de las mujeres, reproduciendo el esquema social en el que se aprobó¹⁷. Si bien, la exclusión explícita de los derechos de las mujeres no ha sido óbice para que exista garantía de ellos, su falta de inclusión demuestra que el derecho, aún en sus ámbitos más garantistas, puede reproducir las relaciones de poder existentes en la sociedad.

Es así como, los grandes hitos en materia de derechos de las personas, contribuyeron a perpetuar relaciones desiguales de poder, de modo que aún hoy “existen muchas cosas en

¹⁶ Para la elaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos se creó una Comisión encargada de diseñar un borrador. La única mujer de la Comisión fue Eleanor Roosevelt, primera dama de los Estados Unidos.

¹⁷ Siguiendo a María Luisa Femenias es importante plantear que “el reconocimiento formal de derechos – como sabemos – no es suficiente, pero constituye un punto de partida que sienta las bases para superar la incommensurabilidad de las diferencias, constituyéndose en un instrumento indispensable de los DDHH. En ese sentido, las leyes readaptan sus formas y sus contenidos a los intereses y a las necesidades de la realidad social, política y económica de una sociedad dada” (Femenias, 2007:20).

la confección y la práctica de la ley que, más o menos intencionalmente, funcionan de forma opresiva para las mujeres” (Jónasdóttir, 1993:260).

1.2.2 El derecho como foco de la crítica feminista

Como señalé anteriormente, así como el derecho es [y debe ser] una herramienta de cambio, no podía dejar de ser un foco de la crítica feminista. De acuerdo con Isabel Cristina Jaramillo, dentro de la crítica feminista al derecho puede distinguirse: i) La crítica a los presupuestos del derecho y sus nociones fundamentales; y ii) La crítica a las instituciones jurídicas existentes (Jaramillo, 2000).

Antes de ahondar en los tipos de crítica feminista al derecho, cabe anotar que esta, de manera general, reconoce que el derecho, a través de los conceptos normativos puede reproducir las relaciones desiguales de poder existentes en la sociedad y cuestiona el carácter neutral que se le pretende atribuir. Esta perspectiva parte de los postulados presentados por los *Critical Legal Studies* – CLS (Estudios críticos del derecho)¹⁸, que debaten tres de los más importantes fundamentos del pensamiento jurídico: “la centralidad del derecho, la neutralidad y la racionalidad del proceso legal y la autoridad de la academia legal. En contraposición a estos principios, postulan la marginalidad del derecho, la influencia de intereses particulares tras la fachada de neutralidad y la debilidad de la academia jurídica” (García Villegas, 2001:4 - 5).

Estos cuestionamientos permiten afirmar, desde una perspectiva crítica del derecho, que los grupos dominantes aprovechan el supuesto carácter indeterminado y neutral de las normas, para reproducir vínculos sociales inmersos en relaciones de poder desiguales,

¹⁸ Los CLS “es un movimiento caracterizado por una fuerte marca interdisciplinaria, debido a la inclusión no sólo de la teoría sociológica sino también, y de manera especial, de la teoría social, la filosofía y la ciencia política, además por una gran diversidad tanto temática como conceptual. Quizás esta diversidad y la falta de cohesión doctrinaria sean la causa de que el movimiento haya perdido vitalidad desde los inicios de la década de 1990 y que la perspectiva crítica se haya segmentado en una serie de estudios dispersos entre los cuales sobresalen aquellos agrupados bajo los siguientes rótulos: ‘estudios feministas’, ‘estudios raciales’ y ‘estudios latinos’ [del derecho]” (García Villegas, 2001:9 - 10)

como las que a menudo han servido para justificar la discriminación por razones de raza, clase, etnia y género¹⁹.

Ahora bien, respecto de la crítica a los presupuestos del derecho y a sus nociones fundamentales, esta perspectiva señala que el derecho se ha construido desde un punto de vista masculino, y que por ello refleja y protege sus necesidades e intereses y que incluso, cuando pretende proteger necesidades e intereses de las mujeres, lo hace desde una perspectiva masculina. Lo anterior se puede ejemplificar con la tipificación de la violencia sexual, como delito contra el pudor, o la concepción de la violencia sexual como botín de guerra, asuntos a los que me referiré más adelante (Jaramillo, 2000).

Este tipo de cuestionamientos ha servido a algunas teóricas feministas para afirmar que “el Estado es masculino en el sentido feminista” (MacKinnon, 2006: 203), pues reproduce y legitima intereses basados en relaciones de poder desiguales donde los hombres son los ganadores del juego político (MacKinnon, 2006:204).

Respecto de las instituciones sometidas a la crítica feminista, podemos encontrar aquellas que excluyen a las mujeres como destinatarias de determinados derechos (derecho al voto, potestad marital, restricciones de acceso a la educación), la penalización del aborto, el derecho a la representación y participación política, la desigualdad salarial, los derechos sexuales y reproductivos, el trabajo de cuidado, entre otras. En algunos de estos casos, las luchas de activistas y abogadas feministas han logrado cambios estructurales (Jaramillo, 2000).

Ahora bien, en este escrito, parto de la idea de que el derecho reproduce los conceptos normativos que distinguen lo masculino de lo femenino en un plano jerárquico, sin

¹⁹ “En oposición a la idea de que el derecho es o puede ser neutral y, por ende, es una herramienta apropiada para el cambio social, las feministas críticas han argumentado que, en sus representaciones doctrinales y judiciales, el derecho produce y reproduce la jerarquía de género. Las estrategias principales para revelar la operación del género en estos discursos han sido tres. La primera ha consistido en mostrar que las doctrinas existentes son indeterminadas y por lo tanto que las decisiones sobre la base de esas doctrinas tienen un irreductible elemento político. La segunda ha sido hacer evidente las maneras en que las dicotomías público/privado y privado/social se usan para justificar alternativamente el poder de los hombres y las obligaciones de las mujeres como objetos sexuales, madres o rehenes. La tercera ha sido mostrar cómo específicamente las doctrinas sobre el aborto, la pornografía, la prostitución, la violación y el matrimonio despolitizan estos temas al convertirlos en asuntos de moralidad y no de opresión” (García Villegas, Jaramillo Sierra & Restrepo Saldarriaga, 2006:41).

embargo, ello no quiere decir que por reproducir la idea de sociedad predominante, no pueda ser también un campo de lucha por medio del cual sea posible obtener algunos avances jurídicos con implicaciones políticas importantes, justo por sus problemas de indeterminación.

1.2.3 El derecho como herramienta de cambio

Pese a que el Estado y el derecho podrían calificarse como masculinos en términos de Catherine MacKinnon por reproducir las relaciones desiguales de poder en las que los hombres han sido históricamente los ganadores, el derecho también puede (y debe) ser agenciado como herramienta efectiva de cambio. En este punto, la pretensión de universalidad del derecho, que puede ser duramente criticada, ha permitido que diversos grupos oprimidos se apoyen en ella para reclamar su inclusión en el juego político.

Algunos cambios en los presupuestos del derecho y en las instituciones jurídicas han sido asumidos como banderas por las feministas, desde las diferentes corrientes en que se ubican. Así, por ejemplo, las feministas liberales, han luchado por la inclusión de las mujeres en cargos públicos y las políticas de acción afirmativa. Ahora bien, en algunos casos, los logros de las luchas feministas (así como los de otros grupos excluidos y discriminados) han sido ineficaces, aunque en otros han contribuido para transformar realidades y pensamientos.

En este punto es importante considerar que el cambio en las reglas no produce por sí mismo resultados redistributivos o de reconocimiento en términos de justicia “porque el sistema está construido de tal manera que estos cambios pueden ser filtrados para que no se apliquen” (Galanter, 2001: 101), el tema es entonces pensar en el aporte de quienes participamos en la práctica jurídica, contribuyendo a ejercicios más justos del derecho que deben estar acompañados de reformas estructurales del Estado y de las ideas predominantes en la sociedad²⁰.

²⁰ “La contribución del abogado al cambio social redistributivo [y a la justicia basada en el reconocimiento] depende, entonces, de la organización y la cultura de la profesión jurídica. Hemos conjeturado que el cambio sustantivo de reglas

En este escenario de ejercicio de la profesión jurídica se inscribe el presente escrito, esto es, desde una perspectiva que concibe el derecho como espacio de lucha en el que abogados y abogadas, jueces y juezas y fiscales pueden y deben cuestionar los conceptos normativos, las normas jurídicas y sus efectos, e incidir para que esta lucha no se traduzca en la legitimación del ejercicio arbitrario e injusto del poder. Por ello, el derecho es también un espacio que otorga posibilidades de agencia para las mujeres.

Bajo los anteriores supuestos pretendo establecer un concepto de violencia y justicia de género, que tome en consideración las formas como operó la violencia de género en el caso de la masacre ocurrida en el año 2010 en el corregimiento de El Salado, las formas como se ha administrado justicia hasta la fecha y las posibilidades de lograr justicia de género, en un ejercicio por nutrir la práctica del derecho de herramientas de cambio hacia la justicia, partiendo de la base de que el derecho y el discurso de los derechos humanos, pese a reproducir relaciones desiguales de poder, si se somete a una revisión crítica, ofrece herramientas para el logro de cambios estructurales en la sociedad, en particular en materia de justicia de género.

1.3 Metodología del trabajo

Para realizar esta investigación partí de mi lugar como abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, organización que litiga el caso de la masacre de El Salado. Como abogada de la CCJ acompañé el caso de cuatro mujeres que interpusieron una acción de tutela solicitando la garantía de su derecho a la salud desde una perspectiva integral, razón por la cual realicé una visita al corregimiento de El Salado, tres talleres con las mujeres y sus familias y uno con funcionarios del sector salud encargados de la atención a las tutelantes y sus familias. En estos talleres recolecté información relevante para este escrito.

producidas por los tribunales es poco probable que constituya, por sí mismo, un elemento determinante en la generación de beneficios tangibles para la redistribución [y el reconocimiento]. El problema es, entonces, si la organización de la profesión, les permite a los abogados desarrollar y utilizar habilidades en estos otros niveles. En cuanto más se consideren los abogados a sí mismos exclusivamente como abogados de tribunal, menor será sus disposición a emprender nuevas tareas, a establecer alianzas duraderas con sus clientes y a operar en foros diferentes de los tribunales, y, por ende, menos servirán de agentes del cambio redistributivo” (Galanter, 2001: 102).

Gracias a mi rol dentro de la CCJ, pude ser una observadora interna y externa, interna, porque conocí de primera mano el caso en su dimensión constitucional, a la comunidad y a una parte importante de las víctimas sobrevivientes y externa, porque no fui parte del proceso penal y sus implicaciones prácticas. Sin embargo, durante mi paso por la CCJ estuve cerca de este proceso.

La investigación partió del estudio de un caso tipo, suficientemente documentado: La Masacre de El Salado²¹. Siguiendo a Lina Céspedes cabe anotar que el caso tipo y “la unidad de análisis masacre no fue una entidad totalizadora, sino un evento que permitió identificar un momento y un espacio a partir del cual se realizó el trabajo investigativo. De esta manera, la masacre como hecho violento fue un punto nodal a partir del cual una serie de hechos ilícitos dispersos en el tiempo adquirieron” (Céspedes, 2011: 72).

El trabajo se realizó mediante una revisión documental de fuentes secundarias escritas, de modo que el enfoque fue cualitativo. Las fuentes de análisis principales fueron los textos académicos, la normatividad relacionada, los informes de organizaciones de derechos humanos y las decisiones judiciales relacionadas con el caso (bien sea directa o temáticamente). Dichas fuentes las analicé desde un enfoque crítico de las instituciones jurídicas, a partir de lo que entiendo por sexo y género.

En particular, la revisión de textos normativos, la hice desde un enfoque de dogmática jurídica. Para ello, me propuse analizar las normas relevantes para conocerlas y establecer que se necesitaría para mejorarlas. Este análisis pretendió también ordenar las normas sobre el tema para describirlas como conjunto, problematizando las conclusiones que se derivan de un análisis preliminar de los textos.

²¹ De acuerdo con el GTMH, un caso emblemático es aquel que ha dejado huella en la historia colectiva, más allá de la familia, la generación o la etnia, y de las diferencias en el color político, las creencias religiosas, las opciones sexuales y las condiciones de clase que separan y distinguen a un grupo de personas que comparten un mismo espacio geográfico. No obstante estas divisiones y distinciones, todos y cada uno de sus habitantes pueden rememorar el evento. Así lo fue con la masacre de El Salado o la de Bahía Portete (GTMH, 2011: 60).

2. El caso de El Salado

El corregimiento de El Salado, ubicado en el Carmen de Bolívar (Bolívar), fue centro en el año 2000 de uno de los más crueles hechos de violencia de los que se tenga noticia en la historia reciente de Colombia. A continuación me referiré a los hechos ocurridos en la masacre ocurrida en el año 2000²² que, a partir de un análisis preliminar, constituyen violencia de género. Estos hechos se inscriben en el marco de un “repertorio de violencia” en términos del Grupo de Trabajo de Memoria Histórica (en adelante GTMH), mucho más grande²³. A partir de esta presentación pretendo definir en el apartado siguiente qué entiendo por violencia de género.

Quienes se han ocupado de estudiar los hechos ocurridos en El Salado en el año 2000, coinciden en afirmar que la violencia en clave de género, fue especialmente relevante. El GTMH destaca al respecto que “esta masacre tiene una particular relevancia desde una perspectiva de género por el muy alto número de mujeres victimizadas (8) en comparación con la mayoría (83,3%) de hechos violentos mixtos de esta naturaleza en los que se contabilizan una o dos mujeres como víctimas fatales”. Adicionalmente, en el marco de esta masacre “las violaciones y agresiones sexuales tuvieron como víctimas exclusivas a las mujeres” (GTMH, 2009:70).

Esto se explica, en gran medida, en la asociación, en función de los roles tradicionales de género, que hicieron los victimarios entre las mujeres y el “enemigo”, es decir, como una

²² Me refiero a la masacre de El Salado, partiendo de la idea de que eventos violentos como este “no se dan en el vacío, no son un simple presente continuo, ajeno a un análisis de un antes y un después”. Tal como señala CODHES en su informe sobre las masacres ocurridas en La Gabarra y El Alto Naya, la masacre de El Salado “se encuadra en un repertorio de violencia mucho más amplio y cumple un objetivo que excede la temporalidad de su ocurrencia. Por esta razón, es importante tener claridad de las dinámicas generales y específicas del conflicto para la época de los ataques a la población civil [.]. No sobra aclarar que, muchas veces, la pregunta por el contexto pasa por la cuestión más amplia por la naturaleza del conflicto armado; sin embargo, esa indagación excede el objeto de nuestro estudio” (Céspedes-Baez, 2011:32)

²³ En los anexos número 1 al 4, se describen con mayor profundidad algunos aspectos socio-demográficos del municipio, su ubicación en el marco del conflicto armado colombiano y la primera masacre ocurrida en 1997. Esta información resulta relevante, pues permite establecer cómo funcionaba la economía y como se entendían los saladeros, en tanto ciudadanos, antes de la masacre. También se reseña de manera más amplia el “repertorio de violencia” contenido en la masacre de 2000.

extensión de los hombres quienes eran sus supuestas parejas o hijos. Se conoce que la búsqueda emprendida por los paramilitares en el pueblo estaba dirigida a los supuestos guerrilleros, los colaboradores de la guerrilla y las madres, esposas y novias de los miembros de estos grupos, a quienes “castigaron” públicamente en razón de sus supuestos vínculos privados²⁴.

De acuerdo con las elaboraciones del GTMH, estos hechos de violencia sexual pueden categorizarse como estratégicos para el victimario, pues “responden a planes de conquista o disputa territorial o repertorios de dominio que las organizaciones armadas orquestan para consolidar su autoridad”²⁵.

Dentro de los hechos de violencia cometidos contra las mujeres de forma diferenciada, cabe destacar que cuando paramilitares ubicaron a los pobladores en la cancha del pueblo²⁶ dividieron el grupo en mujeres, hombres y niños, las primeras fueron ubicadas en las escaleras de la iglesia, los hombres a un lado de la cancha de fútbol frente a las mujeres y las mujeres con niños fueron llevadas a la casa de Margoth Fernández Ochoa, ubicada frente a la cancha. La forma como cada uno de estos grupos fue victimizado fue diferente.

²⁴ “La mayoría de las mujeres ejecutadas en la plaza pública, de manera similar a los hombres, fueron golpeadas, amarradas con cuerdas y apuñaladas, pero hubo un énfasis en la sexualidad cuando los paramilitares se refirieron a ellas, pues sus insultos y sus gritos se centraron en la vida íntima que compartían con los “enemigos”. La primera mujer víctima fue Neivis Arrieta, acusada por los paramilitares de ser la novia de un comandante guerrillero. En este caso particular, como mujer fue atacada y vulnerada sexualmente de forma brutal para humillar y deshonrar al enemigo “hombre” utilizando un recurso sexual, y también como una manera ejemplarizante de castigar a las demás por sus vínculos afectivos con la guerrilla. “El “empalamiento” que practicaron los victimarios con ella, compañera del “enemigo”, es ilustrativo de la prolongación del campo de batalla en el cuerpo sexuado, y allí el enemigo puede ser también derrotado. El empalamiento es también una posesión “duradera” porque no se altera sino cuando los paramilitares deciden irse, ya que prohibieron a los sobrevivientes recoger y dar sepultura a sus víctimas” (GTMH, 2009: 70).

²⁵ El GTMH señala que la violencia sexual en el marco del conflicto armado puede ser i. Estratégica; ii. Acontecida en eventos estratégicos; y iii. Oportunista. “Unas y otras se distinguen por las circunstancias en las que se cometen. [Sin embargo], tanto las violaciones estratégicas o acontecidas en eventos estratégicos como las oportunistas se alimentan de convenciones culturales en las que las mujeres son objeto de desprecio y de dominación violenta, y ambas se inscriben en el marco de la guerra. (...) La violación, cuando es estratégica, se transforma en sí misma en un mensaje que se inscribe en ese campo comunicacional de la guerra. A través de ella, quien la comete busca humillar, descorazonar, desorientar, derrotar, castigar, vengarse de los hombres, las familias, las comunidades, las mujeres o las organizaciones señalados de ser aliados del bando contrario. La violación como mensaje para el campo enemigo queda inscrita en el cuerpo vejado de las mujeres o de los hombres víctimas de estos actos”. Cabe aclarar que esta clasificación se refiere a la intencionalidad del agresor, los efectos sobre la vida de las víctimas, sus familias y comunidades, no necesariamente varían, según se trate de una u otra clasificación (GTMH, 2011:215-216).

²⁶ Ver Anexos 1 al 4.

En la cancha, después de realizar macabros sorteos para seleccionar a sus víctimas dentro del grupo de los hombres, los paramilitares se ensañaron con las mujeres “quienes ya habían sido asediadas con insultos e interrogatorios sobre sus vínculos afectivos y logísticos con la guerrilla, preguntándoles quiénes eran las novias de los comandantes (haciendo énfasis en “Camacho” y “Boris”) y quiénes cocinaban para la guerrilla” (Grupo de Memoria Histórica 2009)²⁷. Ante la vista de sus familiares y amigos, seleccionaron a Neivis Arrieta y la interrogaron sobre sus vínculos afectivos con el comandante guerrillero, alias “Camacho”. Al no obtener respuesta, acercaron a uno de los “caratapada”²⁸ quien afirmó que ella era la novia. De acuerdo con el GTMH “Neivis Arrieta era compañera de un hermano de Oscar Antonio Meza Torres en el momento de los hechos; pero no de alias ‘Camacho’” (GTMH, 2009)²⁹.

Luego asesinaron a Francisca Cabrera de Paternina de 40 años. A Francisca la golpearon en el vientre y recibió varias puñaladas (GTMH, 2009), posteriormente a Margoth Fernández Ochoa de 47 años, ella forcejeó con los paramilitares y fue asesinada con la bayoneta del fusil (GTMH, 2009). En la casa de Margoth era donde los paramilitares habían ubicado a las mujeres con niños.

En la lista siguió Rosmira Torres, quien se desempeñaba como madre comunitaria, a ella, “la torturaron con cuerdas, estrangulándola (...). Después de soltarla le infligieron dos puñaladas y luego le dispararon. Fue asesinada en la calle que separa la cancha de la

²⁷ Respecto de este punto cobra importancia y se puede trasladar al análisis de este caso, lo señalado en el informe “El día que se dañó la tranquilidad” sobre las masacres de La Gabarra y El Alto Naya: “Efectivamente, el conflicto colombiano ha estado cruzado por actos de habla y de narración que han permitido construir al otro como el enemigo y que han facilitado los actos violentos en contra de poblaciones enteras. Esta estrategia no ha sido exclusiva de un solo actor armado, sino que ha sido una constante de cada uno de los grupos legales e ilegales que toman parte en el conflicto (...). [L]os paramilitares sidos, durante y después de la incursión las tacharon a ellas, o a otras personas cercanas y conocidas, de “guerrilleras”, “colaboradoras”, incluso “amantes de guerrilleros”. Asimismo, las versiones libres, declaraciones prensa de los desmovilizados y entrevistas hechas con los principales jefes paramilitares están llenas de este tipo de referencias con el fin de explicar por qué razones atacaron. En esta línea, los actos de etiquetamiento e injuria están íntimamente ligados a la “jerga” del conflicto y permiten una apología de la eliminación del otro, de lo que se deriva el carácter esencial de interrogarse por los discursos que subyacen y sostienen actos de la magnitud de masacres, los cuales no se limitan al ejercicio de la violencia física, sino que pasan por el territorio del lenguaje y su poder racionalizador” (Céspedes-Baez, 2011:33)

²⁸ “Los “caratapadas” son personas conocidas por la comunidad que acompañan a los victimarios, algunos de los cuales se cubren parcial o totalmente sus rostros con capuchas, sombreros, pañoletas, o simplemente bajan la cabeza para procurar no ser reconocidos” (GTMH, 2009).

²⁹ “[Neivis] fue llevada por los victimarios a un árbol contiguo a la cancha de microfútbol, donde la desnucaron y luego la empalaron, introduciéndole un palo por la vagina. Los sobrevivientes y los victimarios coinciden en que una de las víctimas estaba embarazada, pero no se ponen de acuerdo si era Neivis Arrieta o Nayibe Osorio Montes” (GTMH, 2009).

Iglesia”. Finalmente mataron a Nayibe Osorio Montes de dos disparos en la cabeza. A su madre, que estaba con ella no la mataron, “los sobrevivientes testigos indicaron que uno de los paramilitares ordenó no matarla diciendo que estaba embarazada. Y ella después lo confirmó” (GTMH, 2009).

Además de los asesinatos de mujeres hubo varios hechos de violencia sexual. Del primero del que se tiene noticia la víctima fue una joven de 18 años, que fue retenida en su casa y llevada a los montes, también fue víctima de violencia sexual una niña, cuyo estado de salud después de los hechos parecía indicar una violación masiva (GTMH, 2009)³⁰. Los hechos de violencia sexual ocurridos en el corregimiento, no sólo se asociaron a los vínculos directos de las víctimas con la guerrilla, sino a una suerte de vínculo genérico con el “enemigo” (GTHM, 2009:71).

Además, hay un hecho que ha sido recurrentemente narrado, pero que parece ocultarse por las demás atrocidades cometidas, este es la servidumbre forzada a la que fueron sometidas algunas de las mujeres del pueblo, quienes fueron obligadas a cocinar para sus victimarios³¹.

Estos hechos, que parecen ocultarse en las ejecuciones, torturas y en la violencia sexual, tienen grandes implicaciones en clave de género, pues fueron las mujeres las obligadas primero a ocuparse de los niños en la casa de Margoth Fernández y luego, las elegidas para atender a quienes estaban asesinando y torturando a sus familiares, vecinos y amigos. La vergüenza que sienten las mujeres por haber sido obligadas a atender a los paramilitares y

³⁰ “[...] A mi me dejan casi al lado del baño, cuando de pronto llega la enfermera paramilitar llamada María y dice ¡bingo!, me apunta con una pistola, me lleva a un cerro donde hay como 10 paramilitares, me lleva el brazo derecho hacia atrás y me dicen que van a quemar el pueblo y que cuánto me paga la guerrilla para que les colaborara...la vieja esa me levanta a cachetadas y me dice zorra, perra, que ahora si voy a saber lo que es bueno, que si antes no había ido al fin del mundo, que cuántas veces había hecho el amor, la llaman por radio que han herido al mono, que le cortaron la mano, que baje con el equipo y me dejan ahí con los paramilitares esos [...] llega la enfermera María, le pedí agua y me dijo que no me iba a dar, que si quería me comiera un cardón o cactus, me empezó a tocar, a manosear, me dice que me quite la ropa, pero que lo haga despacio, que vamos a ver un show o algo así, que me empezara a mover de la manera que ellos me dijeran [...] me pasaron los cardones por el cuerpo, la vieja esa María comenzó a manosearme los senos, después vi un Carlos, me jaló el cabello para atrás, me besaba todo el cuerpo, me tocaba, esa vieja María se reía, mientras ella se reía Carlos me tocaba [...] después de eso me violó delante de ellos [...] después de eso María me pegaba en la cola con una machetilla que ella llevaba y me siguió maltratando [...]” (GTMH, 2009)

³¹ Algunas mujeres fueron obligadas a cocinar, lo que representa una doble humillación para ellas, pues no sólo deben proveer el alimento a quienes están matando a su pueblo, sino que además deben “servir” a sus verdugos (GTMH, 2009:72).

la idea de que esto no constituye un delito, han hecho que no se haya documentado de la misma forma que otros de los hechos ocurridos.

Ahora bien, es necesario señalar que en el marco de las dinámicas de la guerra en Colombia, no sólo los grupos paramilitares han pretendido “sancionar” mediante la violencia las relaciones, reales o supuestas, de las mujeres con el bando contrario. Es un patrón común que los actores armados en Colombia ejerzan este tipo de conductas. Así, por ejemplo, la guerrilla de las FARC suele declarar objetivo militar a las mujeres que se relacionan con soldados y policías o “castigar” dichas relaciones con actos de violencia sexual³²(Amnistía Internacional, 2004: 7), por su parte la Fuerza Pública considera como “enemigos” a las víctimas que entran en contacto con grupos guerrilleros de manera involuntaria (Amnistía Internacional, 2004: 36). Esta situación fue reconocida por la Corte Constitucional en el Auto 092 sobre el seguimiento al estado de cosas inconstitucional en relación con el desplazamiento forzado³³.

³² “En un municipio del departamento de Huila, a mediados de 2002 una muchacha fue violada por presuntos miembros de las FARC, que habían hecho llegar advertencias a las jóvenes que tenían relaciones o contacto con miembros del ejército. En el municipio de Saravena (departamento de Arauca), el Frente 45 del las FARC distribuyó volantes declarando objetivo militar a las mujeres que visitaran batallones del ejército y comisaría de policía. El texto decía: Nos dirigimos a las señoras y señoritas que frecuentan las instalaciones militares, llámense ejército o policía, porque serán consideradas objetivo militar”. (Amnistía Internacional, 2004:25)

³³ Al respecto, la Corte señaló en el Auto 092 que “ha sido informada con amplio detalle sobre la comisión de (...) contra mujeres a quienes se señala de sostener relaciones afectivas, de amistad o familiares con alguno de los miembros de los grupos armados ilegales que operan en el país o de la Fuerza Pública, independientemente de que tales relaciones sean reales o presuntas, o hayan sido deliberadas, accidentales o de parentesco. En este mismo sentido se han presentado denuncias sobre “órdenes” generales impartidas por los grupos armados ilegales que operan en distintas regiones del país, en el sentido de prohibir que las mujeres de sus áreas de influencia se relacionen personalmente con miembros de la Fuerza Pública o del grupo armado ilegal enemigo (...). También se ha informado a la Corte que en algunos casos, miembros de la Fuerza Pública señalan a mujeres o adolescentes de ser esposas, familiares, novias o amigas de miembros de la guerrilla o de paramilitares, cometiendo actos de violencia contra ellas en tanto retaliación por sus afinidades personales (Auto 092, 2008).

3. ¿Qué entiendo por violencia de género?

Los hechos ocurridos en el caso de la masacre de El Salado constituyen a simple vista graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, marcadas por la ocurrencia de violencia contra las mujeres. De acuerdo con el GTMH, estos hechos se caracterizan además por la ocurrencia de violencia de género, porque proporcionalmente y respecto de otras masacres ocurridas en el país, el número de mujeres víctimas mortales es considerablemente alto.

Sin embargo, partiendo de los conceptos de sexo y género presentados, el solo hecho de que las víctimas mujeres de esta masacre sean, en términos proporcionales, más que las de otros hechos de violencia ocurridas en Colombia, refleja que en el caso de El Salado la violencia contra las mujeres fue más grave que en otros, pero es insuficiente para dar cuenta de la forma como se ejerció violencia de género.

Por lo anterior, en el presente capítulo, partiendo de la premisa según la cual el sexo y el género son espacios en disputa, donde las relaciones de poder y las construcciones culturales han dado lugar a la consideración de lo masculino y sus significantes como superiores o universales, pretendo señalar por qué, desde el derecho internacional de los derechos humanos y desde una perspectiva teórica, es posible afirmar que en la masacre de El Salado ocurrieron hechos constitutivos de violencia de género. Esto, como presupuesto fundamental para determinar cuáles son las necesidades y posibilidades en materia de justicia de género de las víctimas de esta masacre.

Parto de la idea, retomando a Joan Scott, de que la violencia de género se construye a partir de los símbolos que representan lo masculino y lo femenino en un plano jerárquico y que otorgan significados de superioridad y universalidad a lo asociado a lo masculino, y pretendo concluir con una definición de violencia de género, que retome los conceptos de sexo y género desde las ciencias sociales y los relacione con los instrumentos jurídicos

relevantes en la materia, esto, para aproximarme a la forma cómo se ejerció la violencia de género en el caso de El Salado.

Tomo como referencia dos puntos, uno normativo y uno teórico, presupuestos que no son excluyentes y cuya intersección puede contribuir a una mejor comprensión del concepto. En primer lugar presentaré las aproximaciones que desde los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos se han hecho (en la mayoría de los casos del término violencia contra la mujer y no violencia de género). Posteriormente me referiré a las clasificaciones de la violencia de género propuestas por Margaret Walker, María Mercedes Gómez y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por resultar relevantes para el análisis del caso de El Salado al referirse a los usos, manifestaciones y efectos de la violencia de género; en este punto relacionaré las clasificaciones propuestas con los hechos ocurridos en El Salado.

1.4 La violencia de género en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) no ofrece una definición de violencia de género. Los instrumentos más generales sobre derechos humanos sólo contienen cláusulas de no discriminación mientras los instrumentos relacionados directamente con el tema definen la “violencia contra la mujer” y se abstienen de referirse al género como categoría de análisis o, entienden la violencia contra la mujer³⁴ como sinónimo de la violencia de género.

La anterior situación tiene por lo menos dos implicaciones importantes de las que me ocuparé en este apartado. La primera, que el concepto de violencia contra las mujeres ha sido construido a partir de la prohibición de discriminación, construcción que ofrece

³⁴ Frente a esta concepción cabe una de las principales críticas al feminismo liberal y es que no es adecuado hablar de la mujer en singular, por cuanto las luchas por la igualdad real y efectiva de las mujeres varían dependiendo de los contextos de opresión y dominación en los que están inmersas. La idea de que existe una mujer prototípica, es decir “la mujer”, desconoce desde el lenguaje los múltiples tipos de discriminación a los que se enfrentan las mujeres según su posición en el mundo. Por lo anterior, utilizaré el término violencia contra las mujeres, por considerarlo mucho más comprensivo, pese a que los textos del DIDH se refieran a la violencia contra la mujer.

diversas oportunidades de exigibilidad de los derechos. La segunda, que no existe plena conciencia de las diferencias conceptuales entre las categorías sexo y género pues el DIDH las agrupa en una, asociando normativamente los atributos masculinos y femeninos y el sexo biológico de las personas. Para presentar de manera más completa las anteriores implicaciones, empezaré por aproximarme a una definición de violencia de género a partir de algunas normas del DIDH, en especial aquellas que contienen cláusulas de no discriminación, y acudiré asimismo a definiciones de violencia contra la mujer y de violencia sexual.

1.4.1 De la prohibición de discriminación al concepto de violencia contra las mujeres: Principales instrumentos internacionales de derechos humanos y sobre derechos de las mujeres

Cuatro instrumentos principales se ocupan de la violencia contra las mujeres en el DIDH, estos son: i) la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (en adelante Cedaw, por sus siglas en inglés), ii) la Recomendación General No. 19 adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la Cedaw), iii) la Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer y iv) la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o “Convención de Belém do Pará”, las tres primeras hacen parte del sistema universal de protección de derechos humanos y la última, del sistema interamericano. Además, en cada uno de los sistemas, diferentes instrumentos incluyen cláusulas generales encaminadas a lograr la igualdad entre hombres y mujeres (cláusulas de no discriminación). A continuación me referiré a ellos:

a. Declaración Universal de Derechos Humanos

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Contiene los primeros acuerdos sobre derechos humanos de la ONU y en dos artículos ubica la cláusula de no

discriminación: en el artículo primero, según el cual todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos; y en el artículo segundo, que establece que todas las personas tienen los mismos derechos y libertades proclamados en la Declaración sin distinción de “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

La importancia de la Declaración radica en que es uno de los primeros conjuntos sistematizados de derechos, elaborados en respuesta a las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial y en que ha sido reconocida como una norma de carácter consuetudinario, de tal suerte que los derechos en ella consagrados son inderogables y que, pese a ser un documento declarativo, sus disposiciones resultan exigibles y tienen alcance y vinculación universal. Al respecto, cabe destacar que, para que a una norma se le reconozca el carácter consuetudinario, es necesaria la práctica de sus postulados por los Estados y la *opinio juris*, esto es, el convencimiento de que esa práctica, constituye una obligación legal³⁵.

b. Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966. Junto con la Declaración de Derechos Humanos constituyen lo que se ha denominado la Carta Internacional de Derechos Humanos.

La cláusula de no discriminación del PIDCP está contenida en los artículos 2º, 3º, 4º y 26 que señalan: i) que los Estados parte respetarán y garantizarán a los individuos en sus territorios los derechos reconocidos en el Pacto sin “distinción alguna de raza, color, sexo,

³⁵ “Los derechos y libertades fundamentales establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos se han convertido en costumbre internacional por cuenta de la práctica estatal y de la *opinio juris*. Aunque se adopte la aproximación más estricta para determinar los elementos que constituyen la costumbre internacional, esto es, la doctrina clásica de la convergencia de una práctica amplia, continua y reiterada, y de la *opinio juris*, las disposiciones contenidas en la Declaración Universal se ciñen a los estándares de esa doctrina” (Traducción libre) (Galindo Pohl, 1987).

idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”; ii) que los Estados parte garantizarán a hombres y mujeres la igualdad en el goce de los derechos enunciados; iii) que los Estados, en situaciones excepcionales pueden adoptar medidas que restrinjan el goce de los derechos reconocidos en el Pacto, siempre que no impliquen “discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social”, y iv) que todas las personas somos iguales ante la ley.

La exigencia práctica de la cláusula de no discriminación del PIDCP ha sido posible gracias a las decisiones del Comité de Derechos Humanos, órgano creado por el primer protocolo Facultativo al PIDCP que contempla un mecanismo de comunicaciones sobre el desconocimiento de las disposiciones del Pacto. El Comité, por ejemplo, en su decisión sobre la Comunicación No. 202 de 1986 (Caso Graciela Alto Vs. Perú), reconoció la existencia de una práctica discriminatoria contra las mujeres, amparada por la legislación peruana y pidió al Estado la adopción de las medidas necesarias para remediarla³⁶.

Por otra parte, en la decisión sobre la Comunicación No. 1361 de 2005 (Caso X Vs. Colombia), el Comité señaló que al señor X le fue violado el derecho a la igualdad ante la ley, contenido en el artículo 26 del PIDCP, por no habersele concedido el pago de una pensión de sobreviviente de su pareja del mismo sexo, lo cual no ocurriría si se tratara de una pareja heterosexual³⁷.

Respecto del PIDESC, su cláusula de no discriminación está contenida en sus artículos 2º, 3º y 4º y establece: i) que los Estados parte se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos contenidos en el PIDESC “sin discriminación alguna por motivos de raza, color,

³⁶ En su decisión, el Comité señala: “[De] los hechos expuestos a su consideración se desprende que en el caso de la autora la aplicación del artículo 168 del Código Civil peruano ha entrañado denegarle su igualdad ante los tribunales y constituye discriminación por motivo de sexo (...). [Por cuanto] de conformidad con el artículo 168 del Código Civil peruano, cuando una mujer está casada sólo el marido está facultado para representar la propiedad matrimonial ante los tribunales” (Caso Graciela Alto Vs. Perú, 1988)

³⁷ El Comité del Pacto señaló en aquella oportunidad: “El Comité observa que el autor no fue reconocido como compañero permanente del Sr. Y., a los efectos de recibir prestaciones de pensión, debido a que las decisiones de los tribunales, basadas en la ley 54 de 1990, consideraron que el derecho a recibir prestaciones de pensión se circunscribía a quienes forman parte de una unión marital de hecho heterosexual. El Comité recuerda su jurisprudencia anterior de que la prohibición de la discriminación, en virtud del artículo 26 del Pacto, incluye también la discriminación basada en la orientación sexual” (Caso X Vs. Colombia, 2007).

sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”; y ii) que los Estados partes se comprometen a asegurar a hombres y mujeres “igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto”. El Comité del PIDESC, órgano de seguimiento de este Tratado, no está facultado para conocer de comunicaciones individuales pero si para emitir Observaciones Generales sobre el contenido del mismo. Al respecto, el Comité del PIDESC en la Observación General No. 20 sobre No Discriminación, establece que “la no discriminación y la igualdad son componentes fundamentales de las normas internacionales de derechos humanos y son esenciales a los efectos del goce y el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales”(Observación General No. 20, 2009).

De lo anterior es posible establecer que los pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, pese a no contener disposiciones específicas sobre derechos de las mujeres o discriminación y violencia basada en el género, en la práctica han reconocido y garantizado estos derechos.

c. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw)

La Cedaw adoptada en 1979, es el primer instrumento internacional referido exclusivamente a derechos de las mujeres y “es el resultado del trabajo realizado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, órgano creado en 1946 por la ONU” (C 322 , 2006).

La Cedaw está fundada en los principios de igualdad y dignidad humana promulgados por la Carta de las Naciones Unidas y define la discriminación contra las mujeres como las distinciones, exclusiones o restricciones basadas en el sexo y que se proponen menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979).

Este instrumento insta a los Estados, según su tenor literal, a adoptar las medidas adecuadas para modificar los patrones socioculturales que propician prácticas basadas en la superioridad o inferioridad de cualquiera de los sexos. Reconoce que la discriminación está fundada en construcciones sociales y culturales y que las prácticas de superioridad pueden estar dirigidas contra hombres y mujeres. En estos términos, los contenidos de la Cedaw apuntan a una dimensión de género basada en el prestigio y en la idea de superioridad, que pretende que las mujeres lleguemos a ocupar una suerte de “estatus” masculino. Así, la Cedaw es, en términos generales, una elaboración de la norma de no discriminación, que no es suficiente por sí sola para enfrentar los esquemas de subordinación y exclusión (Charlesworth, 1997: 56). Ahora bien, la Cedaw reconoce la necesidad de superar la discriminación en esferas tan diversas como la política, la social, la económica y la cultural (artículo 3º), para lograr la igualdad, aunque lo haga desde una perspectiva limitada. Lo anterior puede deberse, de acuerdo con Charlesworth (1997:61), a que el enfoque de discriminación de la Cedaw, fue copiado de la “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial” y a que al parecer se le dio poca importancia a su papel respecto de la discriminación de las mujeres.

Ahora bien, pese a su enfoque limitado, una interpretación amplia de su texto permite incluir dentro de su ámbito de competencia aspectos que su tenor literal no menciona, como las discriminaciones basadas en la orientación sexual, por ejemplo, o prácticas basadas en patrones de superioridad masculina, dirigidas contra varones, en palabras de Charlesworth (1997), “el reto es entonces conferirle significados al lenguaje de los derechos que menoscaban la actual distribución distorsionada del poder económico, social y político”.

En todo caso, más allá de las críticas a la Cedaw, su importancia radica, por lo menos, en los siguientes aspectos:

1. Establece que los Estados deben adoptar medidas para eliminar la discriminación, ocurra por acción estatal, de personas, organizaciones o empresas.
2. Invita a la adopción de medidas de acción afirmativa que contribuyan a lograr una igualdad real.

3. Obliga a los Estados a eliminar los estereotipos basados en relaciones de superioridad y reconoce el papel de la cultura y las tradiciones en la discriminación.
4. Define los conceptos de igualdad y no discriminación contra las mujeres.
5. Se refiere a derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, fortaleciendo el concepto de indivisibilidad de los derechos, e
6. Insta a los Estados no sólo a reconocer los derechos de las mujeres y proveer las condiciones para su ejercicio efectivo, sino también a crear los mecanismos necesarios para su denuncia (UNIFEM, 2010).

El contenido de la Cedaw es complementado en lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, por la Recomendación General No. 19.

d. Recomendación General No 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

Debido a que la Cedaw no se refiere a la violencia contra las mujeres explícitamente, la Recomendación General No. 19 adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano de la Cedaw, señala que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que nos impide el goce de derechos en pie de igualdad con los hombres. De esta forma, el Comité de la Cedaw incluye como parte de la Convención la noción de violencia contra la mujer. En este caso el concepto de violencia contra la mujer se deriva del concepto de discriminación³⁸.

De acuerdo con la Recomendación No. 19, cuando el artículo 1º de la Cedaw define la discriminación contra la mujer como las distinciones, exclusiones o restricciones basadas en el sexo, se refiere a “la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada” (Comité para la eliminación de la discriminación

³⁸ “En su recomendación general N° 19 (1992) el Comité estableció con toda claridad la conexión: afirmó inequívocamente que la violencia contra la mujer constituye una forma de discriminación por motivos de género y que la discriminación es una de las causas principales de dicha violencia. Ese análisis ubicó a la violencia contra la mujer dentro de los términos de la Convención y la norma jurídica internacional de no discriminación por motivos de sexo y, de tal modo, directamente en el lenguaje, las instituciones y los procesos de derechos humanos” (Asamblea General de Naciones Unidas, 2006).

contra la mujer, 1992). Así, la violencia contra las mujeres puede contravenir disposiciones de la Cedaw.

La Recomendación No. 19 también resalta en su artículo 6º que “las guerras, los conflictos armados y la ocupación de territorios conducen frecuentemente a un aumento de la prostitución, la trata de mujeres y actos de agresión sexual contra las mujeres, que requiere la adopción de medidas protectoras y punitivas” (Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, 1992).

De lo anterior cabe resaltar la relación estrecha entre violencia y discriminación y la necesidad de estudiar estas categorías conjuntamente, esto, por cuanto “el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha dejado en claro que todas las formas de violencia contra la mujer están comprendidas en la definición de discriminación contra la mujer establecida en la Convención” (Asamblea General de Naciones Unidas, 2006)

e. Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer

La Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer aprobada el 20 de diciembre de 1993, afirma que “la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993). La importancia de esta Declaración radica en que se refiere a la violencia contra las mujeres como una categoría autónoma que constituye además una violación a los derechos humanos.

La Declaración reconoce que la violencia contra las mujeres evidencia las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres e impone a estas últimas una posición subordinada frente a los hombres y, que factores como la raza, la situación migratoria, las discapacidades, el conflicto armado etc., incrementan la vulnerabilidad de las mujeres.

Además de señalar que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, la Declaración entiende por violencia contra las mujeres la violencia basada “en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993). La declaración destaca como causa de la violencia las relaciones subordinadas de poder y reconoce que esta puede ser física, sexual o psicológica y cometida por la familia, la comunidad o agentes estatales (o con su colaboración).

f. Convención Americana sobre Derechos Humanos

La Convención Americana sobre Derechos Humanos es el principal instrumento del sistema interamericano de protección de derechos. Su cláusula de no discriminación está contenida en los artículos 1º, 17, 24 y 27.

De acuerdo con el artículo primero de la Convención, los Estados parte deben respetar y garantizar todos los derechos y libertades reconocidos en la Convención sin ninguna discriminación, el artículo 17 señala que los Estados deben garantizar el igual reconocimiento de los derechos y “la adecuada equivalencia de responsabilidades” de los esposos en el matrimonio, el artículo 24, reconoce el derecho de igual protección ante la ley y el artículo 27, sobre supresión de garantías, establece que en casos excepcionales se podrán suspender las obligaciones contraídas por los Estados en virtud de la Convención, siempre que la suspensión no implique “discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social”, esta disposición se asemeja a la contenida en el artículo 4º del PIDCP³⁹.

³⁹ “12. El artículo 27 de la Convención Americana, al igual que el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, exige que las restricciones impuestas no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de

De lo anterior se sigue que tanto la Convención Americana sobre derechos Humanos como la Convención de Belem do Para (a la que me referiré enseguida) coinciden en rechazar y sancionar la discriminación, en particular la basada en el sexo, a la que se refieren explícitamente, así como otros tipos de discriminación fundadas en los estereotipos de lo masculino y lo femenino. Lo anterior quedó demostrado en el caso 12.502 (Caso Karen Atala e hijas Vs. Chile, 2008), en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una demanda ante la Corte Interamericana por la presunta discriminación contra la señora Atala al momento de definir la custodia de sus hijas, por el sólo hecho de ser homosexual⁴⁰ y en algunos otros casos sobre discriminación contra las mujeres han sido conocidos por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo especialmente relevantes las sentencias de la Corte en los casos del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú (2006), González y otras (“campo algodónero”) Vs. México (2009) y Rosendo Cantú y otra Vs México (2010).

g. Convención de Belem do Pará

En el ámbito regional de protección de derechos, el instrumento relacionado con la violencia contra las mujeres es la llamada Convención de Belem do Pará de 1994. Esta Convención afirma, como la declaración de Naciones Unidas, que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y libertades fundamentales que limita su ejercicio, goce y reconocimiento.

raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Obviamente la palabra “únicamente” tiende a acentuar el móvil discriminatorio de las medidas. El artículo 15 de la Convención Europea omite esta exigencia pero debe interpretarse en relación con el artículo 14 que tiene alcance general y que prohíbe todo tipo de discriminación en el ejercicio de cualquier derecho reconocido en la Convención” (C-136, 2009)

⁴⁰ En la comunicación presentada en el caso Karen Atala e hijas Vs. Chile “Los peticionarios alegan que la Corte Suprema de Justicia de Chile trató de manera diferenciada a la Sra. Atala y su ex cónyuge en el fallo de tuición de sus hijas, siendo la orientación sexual de la Sra. Atala el factor decisivo para otorgar la tuición definitivamente al padre. Aducen que la distinción basada en la homosexualidad de la Sra. Atala careció de objetividad y razonabilidad en el juicio de tuición, y no cumplió con un fin legítimo, en contravención de los parámetros internacionales de derechos humanos. Adicionalmente, sostienen que el fallo de la Corte tiene un impacto desproporcionado y limitante en el ejercicio de los derechos de los padres homosexuales, promoviendo que nunca puedan preservar la custodia de sus hijos, por concepciones estereotipadas de su habilidad para cuidarlos, y de crear un entorno saludable familiar para ellos” (Caso Karen Atala e hijas Vs. Chile, 2008).

La Convención Interamericana define la violencia contra las mujeres como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, 1994). En este caso la Convención se refiere a conductas basadas en el género, no sólo en el sexo y que causen daño a la mujer, lo que permite afirmar, que la violencia basada en la orientación sexual cuando esta asume características femeninas puede ser parte del ámbito de aplicación de la Convención. Para la Convención, como para la Declaración, la violencia contra las mujeres incluye la violencia física, sexual y psicológica cometida en la familia, la comunidad o por agentes estatales (o con su colaboración).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe “Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia” (2006), destaca como los aspectos más importantes de la Convención, los siguientes:

- “1. Define la violencia contra las mujeres como cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual y psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como el privado.
2. Reconoce expresamente la relación que existe entre violencia de género y discriminación, indicando que tal violencia es un reflejo de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación y a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados;
3. Establece que la violencia afecta a las mujeres por múltiples vías, obstaculizando el ejercicio de otros derechos fundamentales de naturaleza civil y política, así como los derechos económicos, sociales y culturales;
4. Dispone que los Estados partes deben actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres que ocurre tanto en espacios públicos como privados, que ocurra dentro del hogar o de la comunidad, y que sea perpetrada por individuos o agentes estatales;

5. Provee que los Estados deben tomar especial cuenta de la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueden sufrir las mujeres en razón, entre otras, de su raza o condición étnica; por su status como migrantes, refugiadas, o desplazadas; por estar embarazadas o discapacitadas; por ser menores de edad o ancianas; por confrontar una situación económica desfavorable; por estar afectadas por un conflicto armado; o por estar privadas de su libertad”.

A los ellos, cabe añadir que la Convención de Belem do Pará reconoce el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia (artículo 3).

1.4.2 De la prohibición de discriminación al concepto de violencia contra las mujeres: relaciones entre categorías

Como he señalado, el concepto de violencia contra las mujeres tiene su raíz en el derecho internacional de los derechos humanos, en la cláusula de no discriminación. Por ello, las primeras normas sobre derechos de las mujeres y obligaciones de los Estados al respecto son las que se refieren a la igualdad entre los sexos y a la prohibición de discriminación contra la mujer. Por ello además, la violencia contra las mujeres constituye una forma de discriminación. El mejor ejemplo es la recomendación general No. 19 que señala que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación, introduciendo el concepto de violencia en la Cedaw, que sólo se refería a la discriminación.

“Obsérvese bien como, a resueltas de esta introducción, se ha cambiado el concepto de discriminación en relación al de la cultura jurídica dominante: ahora es la violencia misma la (forma de) discriminación; la discriminación deja de ser cuestión de status. La violencia se tipifica como discriminación porque constituye la manifestación directa de la ruptura de la regla de justicia que se basa en la igualdad de status de hombres y mujeres. La inaplicabilidad de la lógica comparativa en este (nuevo) concepto de discriminación, hace que su introducción tenga resultados prácticamente performativos o constitutivos (Barrere, 2008:33).

Así, es posible afirmar que los principios de igualdad y no discriminación orientan el sistema de protección de derechos y allanaron el camino para la expedición de la Cedaw y

de la Convención de Belem do Pará, normas que de manera explícita se refieren a los derechos de las mujeres.

Ahora bien, ¿por qué es importante esta aclaración? La importancia de que el concepto de violencia contra las mujeres constituya una forma de discriminación, radica en que este último es una norma del *ius cogens*, que implica además obligaciones *erga omnes* y que no se puede limitar en estados de excepción. Es decir, se trata de una norma de muy alto rango en el derecho internacional.

Que sea una norma de *ius cogens*, quiere decir que es una norma imperativa de derecho internacional, es decir, una norma que tiene un lugar de privilegio dentro de la jerarquía del derecho internacional y que no puede ser desconocida bajo ninguna circunstancia por los Estados⁴¹. De acuerdo con la Corte Constitucional colombiana una forma de identificar una norma de *ius cogens* es si se trata de aquellas garantías que no son derogables en estados de excepción, esto en consonancia con lo explicitado en la observación general No. 29 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas⁴².

La prohibición de discriminación, además de ser una norma de *ius cogens* y una garantía inderogable en estados de excepción es una obligación *erga omnes*. Es, decir, es una de aquellas obligaciones que un Estado tiene para con toda la comunidad internacional y cuyo desconocimiento atenta contra todos demás Estados que la integran⁴³.

⁴¹ “Los criterios para el reconocimiento de una norma de derecho internacional como una norma de *ius cogens* son estrictos. De conformidad con el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969, dichas normas no solamente deben cumplir con las condiciones para ser reconocidas en primer lugar como normas de derecho internacional, sino también con los requisitos adicionales para ser reconocidas como normas de carácter imperativo o perentorio por parte de la comunidad internacional como un todo –proceso denominado de ‘doble reconocimiento’-. Estos requisitos exigen el consenso de la mayoría casi unánime de los Estados, independientemente de sus diferencias culturales e ideológicas, respecto de su carácter perentorio” (C-291, 2007)

⁴² Al respecto, la Observación General No. 5 al artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala: “1. El artículo 4 del Pacto ha planteado varios problemas al Comité cuando examinaba los informes de algunos Estados Partes. Cuando surge una situación excepcional que amenaza la vida de una nación y su existencia se proclama oficialmente, un Estado Parte puede suspender varios derechos en la medida estrictamente requerida por la situación. Sin embargo, el Estado Parte no puede suspender ciertos derechos ni puede adoptar medidas discriminatorias por diversas causas. El Estado Parte tiene la obligación de informar inmediatamente, por conducto del Secretario General, a los demás Estados Partes de los derechos que haya suspendido, inclusive las razones de ello y la fecha en que terminará la suspensión”.

⁴³ “Se debe trazar una distinción esencial entre las obligaciones de un Estado frente a la comunidad internacional como un todo, y aquellas que surgen frente a otro Estado (...). Por su naturaleza misma, las primeras deben ser objeto de la atención de todos los Estados. Dada la importancia de los derechos implicados, puede sostenerse que todos los Estados tienen un interés legal en su protección; son obligaciones *erga omnes*. Tales obligaciones se derivan, por ejemplo, en el

Por ser una norma de *ius cogens*, una obligación *erga omnes* y una garantía inderogable en estados de excepción, la prohibición de discriminación es de especial importancia en el DIDH, lo que implica que su cumplimiento no se sujeta a relaciones de reciprocidad o a la suscripción de tratados internacionales sobre la materia. Por ejemplo, un Estado no puede alegar que otro comete un genocidio o apartheid para cometer uno de estos actos en retaliación, o alegar que no es parte de convenios de derechos humanos que proscriben estas conductas, en justificación.

En Colombia, de acuerdo con la Corte Constitucional, el especial carácter del que goza la cláusula de no discriminación se deriva de “la decisión constitucional de remediar situaciones de inferioridad fincadas en estereotipos o prejuicios sociales de reconocida persistencia y a la prohibición de discriminar se suma la voluntad de erradicar esas conductas o prácticas arraigadas, que han ubicado a personas o a sectores de la población en posiciones desfavorables” (C-952, 2000).

Que la violencia contra las mujeres se entienda como una forma de discriminación permite, en primer lugar, ubicar esta conducta como una de las más graves y condenadas de manera más enérgica por el derecho internacional y, en segundo lugar, reconocer que la violencia contra las mujeres existe y persiste debido a relaciones desiguales de poder basadas en la idea de inferioridad de las mujeres y de las características asociadas a lo femenino y, que la “discriminación contra las mujeres y los estereotipos de género promueven, validan, incrementan y agravan la violencia contra las mujeres” (Comisión Interamericana de derechos Humanos, 2006).

De lo anterior la importancia de que la Cedaw y la Convención de Belem do Pará insten a los Estados a tomar las medidas necesarias para superar las prácticas sociales y culturales que promueven y permiten la discriminación contra las mujeres y su consecuencia, la violencia. Además, del vínculo entre violencia y discriminación se deriva la posibilidad de

derecho internacional contemporáneo, de la proscripción de los actos de agresión, y del genocidio, así como también de los principios y reglas relativos a los derechos básicos de la persona humana, incluyendo la protección frente a la esclavitud y la discriminación racial”. (Caso Barcelona Traction, citado en C-291, 2007)

realizar exigencias a los Estados frente a hechos de violencia contra las mujeres, entendidos estos como muy graves violaciones a los derechos humanos.

Resumiendo: para el feminismo es importante el reconocimiento de la violencia como '(forma de) discriminación', y, a pesar de las muchas dificultades, esta introducción adquiere tintes revolucionarios en la medida en que, a través de la misma, las instancias jurídico-políticas tienen que admitir que existe un fenómeno de violencia que no se puede atajar apelando a un concepto de igualdad referido al mero ejercicio de derechos individuales o apelando a un concepto de discriminación basado en la ruptura de la lógica comparativa (como mera ruptura individualista de la igualdad de trato). El concepto de discriminación entra de este modo en el esquema interpretativo del patriarcado en el que la violencia contra las mujeres resultaría la expresión más evidente de unas relaciones estructurales de poder que no son afrontables con los únicos esquemas de los derechos individuales (Barrere, 2008: 34).

1.4.3 Fortalezas y vacíos de la definición de violencia contra las mujeres en el DIDH

Gracias a las definiciones del DIDH de los conceptos de violencia y discriminación contra las mujeres existen elementos importantes para la exigencia a los Estados, la sociedad y los individuos, de prácticas respetuosas de sus derechos. Sin embargo, su importancia no debe ocultar sus restricciones.

Los conceptos del DIDH de violencia y discriminación hacen referencia exclusiva a “la mujer” y son promulgados en un marco de acción que pretende responder solamente a la violencia basada en las relaciones de poder que ubican lo asociado a lo masculino como superior a lo femenino. Estos preceptos parten de la idea de que existen unas normas de género que definen de manera más o menos estática lo masculino y lo femenino, sin cuestionarlas y le otorgan cierto grado de universalidad a estos conceptos.

Así, atendiendo al tenor literal de las normas internacionales, diferentes formas de violencia de género estarían excluidas de protección internacional, un buen ejemplo son aquellas identificadas por Colombia Diversa contra personas cuya orientación sexual o

identidad de género está fuera de la norma de heterosexualidad dominante, por ejemplo, “las amenazas, los intentos de homicidio y los homicidios consumados contra las personas travestis –en especial las que ejercen la prostitución– y los hombres gay; (...) las expresiones de violencia verbal y física contra las personas LGBT (...) [y] la violencia por prejuicio en los hogares” (Colombia Diversa, s.a:12).

Las definiciones del DIDH también parecieran excluir la violencia con efectos desproporcionados en la vida de las mujeres, cuyo ejemplo más evidente para el caso colombiano es el desplazamiento forzado⁴⁴.

Ahora bien, estas restricciones, ligadas al desarrollo histórico de los tratados sobre derechos humanos, no son óbice para pretender interpretaciones amplias de los instrumentos, posibles en función de sus contenidos, las cuales han dado lugar a decisiones como la adoptada en el caso X Vs. Colombia, del Comité de Derechos Humanos o a la demanda presentada por la Comisión de Derechos Humanos en el caso Karen Atala e hijas Vs. Chile. Sobre este punto cabe anotar que la jurisprudencia internacional ha señalado que las normas internacionales deben ser interpretadas en virtud del principio *pro persona*, de acuerdo con el cual no debe privilegiarse un sentido que permita limitar o excluir el goce y ejercicio de los derechos y libertades de las personas, antes bien, se debe acudir a la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos. En el marco de la aplicación de este principio, las limitaciones que se siguen del tenor literal de los tratados estudiados, pueden ser superadas.

Lo importante es entonces, resaltar el reconocimiento que se hace en estos instrumentos de la existencia de patrones socioculturales que permiten y propician la discriminación contra las mujeres y que se traducen en desigualdades frente a los varones y lo masculino⁴⁵, pero

⁴⁴ Al respecto ver: Auto 092, 2008.

⁴⁵ La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han destacado que los patrones socioculturales y los estereotipos son causa y consecuencia de la violencia contra las mujeres. Al respecto, la Corte señaló en el caso “González y otras Vs. México” que: “teniendo en cuenta las manifestaciones efectuadas por el Estado, es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial, como ocurrió en el

también de acceso a esferas como la política, la económica, la laboral, etc. Esto constituye un importante avance en la lucha por lograr una verdadera igualdad e inclusión social y permite reconocer la persistencia de relaciones desiguales e injustas de poder que han ubicado a ciertas personas en situaciones desventajosas en diferentes ámbitos de la vida.

1.4.4 La violencia contra las mujeres como violación a los derechos humanos

El punto de llegada del anterior análisis puede ser la premisa compartida en el DIDH de que la violencia contra las mujeres y las niñas es una violación autónoma a los derechos humanos, producto de la discriminación histórica de la que hemos sido víctimas, que a su vez propicia y promueve escenarios de discriminación y violencia basados en relaciones desiguales de poder, que reproducen ideas de superioridad y universalidad de lo masculino⁴⁶.

Sobre la anterior premisa no recae ninguna duda en la teoría, pero, en la práctica, prima su desconocimiento en ámbitos tan diversos como la familia, la comunidad y el Estado, debido a que no ha sido posible revertir las relaciones desiguales de poder que la amparan. Sin embargo, el reconocimiento de la violencia y la discriminación contra las mujeres como una violación de los derechos humanos, impone obligaciones a los Estados que pueden ser exigidas de diversas maneras, en aras de lograr justicia efectiva⁴⁷.

presente caso. La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer". (González y otras vs. México "Campo Algodonero", 2009: párr. 401).

⁴⁶ Para efectos del anterior análisis se hizo referencia únicamente a las normas del DIDH, no a las normas del Derecho Internacional Humanitario (en particular a los cuatro Convenios de Ginebra), por cuanto "no existe ninguna indicación clara en las disposiciones de los Convenios de Ginebra de que las dificultades con que tropiezan las mujeres en situaciones de conflicto armado son específicas y plantean cuestiones más amplias que su papel de madres y como víctimas de la violencia sexual" (GTMH, 2011:38). En atención a lo anterior, se hará referencia a este punto en el apartado correspondiente a "La violencia sexual en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario" (Infra pág. 47).

⁴⁷ "El reconocimiento de que la violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos clarifica las normas vinculantes que imponen a los Estados las obligaciones de prevenir, erradicar y castigar esos actos de violencia y los hacen responsables en caso de que no cumplan tales obligaciones. Éstas emanan del deber de los Estados de tomar medidas para respetar, proteger, promover y cumplir los derechos humanos. De tal modo, la exigencia de que el Estado tome todas las medidas adecuadas para responder a la violencia contra la mujer sale del reino de la discrecionalidad y pasa a ser un derecho protegido jurídicamente. El marco de derechos humanos brinda acceso a una serie de instrumentos y mecanismos que se han elaborado para responsabilizar a los Estados en los niveles internacional y regional. Entre ellos figuran los órganos de derechos humanos creados por tratados y los tribunales penales internacionales, así como los sistemas africano, europeo e interamericano de derechos humanos" (Asamblea General de Naciones Unidas, 2006).

Así, del reconocimiento de la violencia y la discriminación como violaciones a los derechos humanos, debe seguirse la firme exigencia de justicia frente a los Estados, de tal suerte que las luchas de mujeres por instrumentos vinculantes que garanticen el ejercicio del derecho a la igualdad, tengan como resultado la investigación y sanción de los responsables de estos delitos y del Estado por permitir su ocurrencia, así como garantías de no repetición. Además, del reconocimiento de esta categoría como derechos humanos, se sigue la posibilidad de supervisar los progresos de los Estados en la materia.

Por otra parte, este enfoque sitúa a las mujeres como sujetas de derechos y no exclusivamente como víctimas o beneficiarias de acciones afirmativas (aunque incluye este tipo de medidas), promueve su participación en ejercicios de exigibilidad de derechos y permite resignificar el contenido original de los tratados sobre derechos humanos, que omiten referencias a los derechos de las mujeres de manera explícita. Así, nombrar los derechos de las mujeres como derechos humanos, reivindica su existencia y potencializa su exigibilidad.

1.5 La Violencia sexual en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario

En el marco de la violencia y la discriminación contra las mujeres, hay una violación a los derechos humanos que ha ocupado la atención de la comunidad internacional: la violencia sexual. Al respecto, cabe destacar que se suele asociar a la violencia contra las mujeres pues tradicionalmente se entiende como un acto de violencia ejercido por un hombre contra una mujer. Sin embargo, la violencia sexual no es un delito cometido exclusivamente por hombres contra mujeres, pero sí es un delito asociado a la opresión de lo femenino por parte de lo masculino⁴⁸, pues se asocia a la idea de que los hombres pueden controlar la sexualidad de las mujeres y tener relaciones sexuales consentidas o no, cuando a bien tengan, de modo que en la violencia sexual, una persona, asume el control de la sexualidad de otra a su antojo, en un ejercicio de dominación del sujeto oprimido.

⁴⁸Ver: Nota al pie No. 30.

De acuerdo con Rhonda Copelon la aparición de la violencia sexual en los debates del DIDH y en especial del derecho penal internacional es reciente y está ligada a su comisión en el marco de conflictos armados, no a su carácter sistemático y generalizado que la ubicaría como delito de lesa humanidad⁴⁹.

Sin embargo, pese a estar asociada a su ocurrencia en el marco de conflictos armados, en el Derecho Internacional Humanitario su regulación ha sido insuficiente. Los cuatro convenios de Ginebra de 1949, que constituyen el marco jurídico en materia de DIH “tienen un alcance limitado en cuanto a la protección a las mujeres, siendo el caso que su objetivo principal fue prestar una protección especial a las mujeres encinta, las madres lactantes y las madres en general, y presentar la cuestión de la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia sexual en tiempos de conflicto armado” (GTMH, 2011). Así, por ejemplo, El artículo 12 del Protocolo I señala que “se tratará a las mujeres con todas las consideraciones debidas a su sexo”, en el marco de una postura que parece ubicar a las mujeres en el rol exclusivo de víctimas sin capacidad de agencia.

En este mismo sentido, en los debates internacionales la violencia sexual en el mejor de los casos fue asociada a delitos contra el honor, como sucedía en el Código Penal colombiano hasta hace relativamente poco. De tal suerte que “la ofensa era en contra de la dignidad y el honor masculino, o el honor nacional o étnico” (Copelon, 2000). Sólo hasta que el Tribunal Especial para la antigua Yugoslavia asumió la investigación de los delitos allí cometidos, comenzó a hablarse de la violación como arma de guerra, aproximación en todo caso limitada⁵⁰.

⁴⁹ “Antes de 1990, la violencia sexual en la guerra era, salvo excepción, largamente invisibilizada. Si no invisibilizada, al menos trivializada; si no trivializada, fue considerada una cuestión privada o justificada como un producto inevitable de la guerra, una recompensa a los combates de los hombres” (Copelon, 2000).

⁵⁰ “La violación atrajo atención, sin embargo, más por ser un ataque genocida o étnico que por el hecho de ser un ataque a las mujeres. Sin duda que esta politización de la violación- y su caracterización como “arma de guerra”-contribuyó a la fuerza a condenar la violación y a cambiar las actitudes públicas hacia ésta. Pero, como todos los debates que desvían la atención de la necesidad esencial de reconocer a las mujeres como sujetos, tuvo un aspecto potencialmente regresivo al sugerir que este uso de la violación era cualitativamente diferente al del uso tradicional de las mujeres como ‘botín’ ” (Copelon, 2000).

Posteriormente, el Tribunal Especial de Rwanda condenó a Jean-Paul Akayesu por genocidio, en la primera sentencia de un Tribunal Internacional sobre este delito. En la sentencia, el Tribunal consideró que los hechos de violencia sexual cometidos y propiciados por Akayesu eran constitutivos de genocidio. Es decir, se le condenó por los actos de violencia sexual en tanto se asociaron a un delito considerado más grave. En todo caso esta sentencia constituyó un avance importante al incluir la violencia sexual y revestirla de especial gravedad.

Además de los Tribunales Especiales para la Ex -Yugoslavia y Rwanda, del delito de violencia sexual en el ámbito internacional se ha ocupado el Estatuto de la Corte Penal Internacional (o Estatuto de Roma) y el documento de los Elementos de los crímenes:

“Gracias a la experiencia de un pequeño grupo de delegados muy comprometidos – de hombres y mujeres- y a la apertura aunque a veces resistente inicialmente, de la mayoría de los delegados, el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional es hoy un hito. Codificó no sólo crímenes de violencia sexual y de género como parte de la jurisdicción de la Corte, sino que también un rango amplio de estructuras y procedimientos que aseguraran que estos crímenes y las victimizadas por estos se mantendrán en la agenda y serán adecuadamente tratados por la justicia” (Copelon, 2000).

El Estatuto de Roma reconoce los crímenes de genocidio, lesa humanidad, de guerra y la agresión, como los más atroces y establece la posibilidad de que sean juzgados por la Corte Penal Internacional cuando los Estados no pueden o no quieren hacerlo. Ahora bien, al referirse a crímenes de lesa humanidad y de guerra el estatuto de Roma hace referencia a algunos delitos que pueden considerarse como constitutivos de violencia de género. Al respecto, el artículo 7º sobre Crímenes de lesa humanidad señala:

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

(...)

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable;

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;

(...)

2. A los efectos del párrafo 1:

(...)

f) Por “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;

(...)

Además el Estatuto define que entiende por género:

(...)

3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término “género” se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término “género” no tendrá más acepción que la que antecede.

Esta definición resulta equivalente a la de sexo y aunque se trata de una restricción importante, pues la persecución condenada en el artículo 7.1.h del Estatuto no incluiría, por ejemplo, la persecución a personas transgeneristas o intersexuales y por extensión de un “odio social” a personas lesbianas, gays o bisexuales, dada la incongruencia entre el género y la dirección del deseo, que se desprende de la obediencia a la heterosexualidad obligatoria, las demás conductas descritas y asociadas a la violencia de género no son limitadas por las definiciones del Estatuto.

La asociación estricta que hace el Estatuto entre sexo y género, no es gratuita. Es producto de las discusiones entre el Vaticano y los países islámicos, de una parte y los países con posturas más liberales e incluyentes en estos temas, de otra. Estas discusiones impidieron además que la cláusula de no discriminación para la interpretación y aplicación del Estatuto, contuviera la palabra género, que hacía más incluyente todas las definiciones:

“El Vaticano y la Liga de países Árabes, que en conjunto denominamos como “la alianza no santa”, rechazaron el término en relación al crimen de persecución, y en respuesta, Estados Unidos sugirió limitar su sentido a hombres (machos) y mujeres (hembras). La Alianza No Santa, perseguía, a veces con éxito, que se sacara la palabra género de las partes estructurales y procedimentales del borrador del Estatuto de Roma -por ejemplo en todas las partes en que se refería a la violencia de género o a la experticia de género.

“Hacia el final de la Conferencia, atacaron, con el liderazgo de la Unión Británica, la inclusión en el art. 21(3) de la frase que fija el género y otras formas de discriminación en la interpretación y aplicación del estatuto. Este ataque sobre el principio de no discriminación, que el Caucus se había empeñado en introducir durante las sesiones preparatorias, pronto se transformó en un ataque contra la inclusión de la discriminación basada en el género, producto de lo cual ayudó a concitar un apoyo mayoritario a favor de la postura que el Caucus había sostenido y a diluir la oposición que inicialmente había encontrado. Incuestionablemente, la codificación de este principio general, modelado a partir del estándar de la cláusula de no discriminación en los tratados de derecho humanitario y de derechos humanos, pero que sustituía la palabra “sexo” por “género”, es una de las protecciones más importantes de la justicia de género” (Copelon 2000).

Pese a que la inclusión del género en el Estatuto de Roma, en el sentido más amplio del término, no fue posible, de acuerdo con Copelon, dicha exclusión no parece tener consecuencias reales en el marco de la protección de los derechos:

“Como un esfuerzo por no legitimar la orientación sexual y la discriminación por identidad de género bajo el estatuto o para eliminar la persecución sobre esta base como crimen, la definición sobre género probará, eso creo, ser un acto fallido. Primero porque las palabras no toleran dicha exclusión: incluso la definición aceptada de género necesariamente incorpora la discriminación basada en la decisión de no comportarse de acuerdo a roles de género prescritos, ya sea en el ámbito del cuidado doméstico, trabajo o en la sexualidad. Segundo, **es altamente dubitativo alegar que cualquier ambigüedad debería ser resuelta a favor de la discriminación, especialmente en un estatuto que establece la más alta institución internacional de justicia universal.** Y finalmente, como comentaba la Jueza Rosalie Abella la otra noche, “el odio que se expresa a sí mismo en la persecución tiene que llevar a una condena y castigo como crimen de lesa humanidad, porque de otra manera el odio ganó la partida” (Copelon 2000).

Así las cosas, más allá de las exclusiones en el lenguaje del Estatuto de Roma, su importancia radica en las posibilidades de acción frente a casos de violencia cometida en razón de las relaciones desiguales de poder que ubican lo masculino y lo femenino en el marco de relaciones de subordinación.

Ahora bien, el principal aporte no está sólo en el Estatuto de Roma sino en el documento “Elementos de los Crímenes” que establece algunas definiciones de estos delitos. De acuerdo con los elementos de los crímenes, además de la generalidad y sistematicidad exigidas para catalogar una conducta como un crimen de lesa humanidad o de haber sido cometida en el marco de un conflicto armado, para ser catalogada como crimen de guerra, la violación sexual ocurre cuando el autor invade el cuerpo de una persona “mediante una conducta que haya ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano sexual o del orificio anal o vaginal de la víctima con un objeto u otra parte del cuerpo” (CPI, 2000), dicha invasión debe ocurrir por la fuerza o bajo la amenaza de ejercer la fuerza o mediante coacción o en una persona incapaz de consentir.

Los elementos de los crímenes diferencian esta conducta de la violencia sexual, la que identifican como “un acto de naturaleza sexual”, (aunque no explicita que quiere decir esta categoría), bien sea perpetrado por el autor o por otro, si el autor lo obliga a realizarlo, por la fuerza o mediante amenaza de fuerza.

Aunque el Estatuto diferencia como delitos la violencia sexual y la violación, pareciera más adecuado para efectos teóricos (no necesariamente para efectos de la práctica penal), señalar que la violación es una forma de violencia sexual, que reviste especial gravedad⁵¹. Otras formas de ejercer la violencia sexual y que son presentadas en el Estatuto de Roma

⁵¹ En este mismo sentido el GTMH señala: “para investigar la ocurrencia de estos delitos, lo primero que es necesario aclarar es que la violación es una de las tantas formas que adopta la violencia sexual, un concepto más amplio, pues comprende, además de la violación, otro tipo de conductas. Por violación sexual, MH [GTMH] entiende “la invasión del cuerpo de una persona mediante una conducta que haya ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano sexual o del orificio anal o vaginal de la víctima con un objeto u otra parte del cuerpo. Esta invasión deberá producirse por la fuerza, o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder, contra ésta u otra persona o aprovechando un entorno de coacción, o que se haya realizado contra una persona incapaz de dar su libre consentimiento” (GTMH, 2011).

son la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado y la esterilización forzada.

Las razones por las cuales estas conductas pueden ser consideradas como violencia de género, tienen que ver con que están basadas en relaciones binarias que oponen lo masculino a lo femenino otorgando a lo primero una posición de superioridad y universalidad, reproduciendo los conceptos normativos de género en términos de Joan Scott, de modo que en estos casos, lo masculino afirma una suerte de dominio de la sexualidad femenina. Así, estas conductas están relacionadas con ejercicios de poder de unas personas sobre los cuerpos y vidas de otras, en las que se asume que un sujeto puede decidir sobre la sexualidad de otro.

1.6 Proponiendo una definición de violencia de género

Del anterior repaso por los instrumentos internacionales de protección de derechos de las mujeres e instrumentos relacionados con delitos que pueden considerarse como violencia de género, cabe destacar que, pese a las restricciones que ofrecen las definiciones del DIDH, en su mayoría los instrumentos jurídicos que lo componen, constituyen importantes avances para los derechos humanos. Sus limitaciones, ligadas a comprensiones históricas de la realidad, pueden ser entendidas e interpretadas de tal suerte que se privilegie la interpretación más amplia de los conceptos, que debe ir además acorde a la realidad histórica y a los cambios en el reconocimiento de las diferencias, tal como ha ocurrido hasta ahora⁵². De modo que es posible, a partir de las definiciones de violencia contra las mujeres y violencia sexual, esbozar una definición de violencia de género, considerando que algunos de sus elementos ya han sido presentados, al menos de manera preliminar.

⁵² “El significado original de violencia contra la mujer, es decir, la violencia de los hombres contra sus parejas que adoptaba la forma de violación, agresiones físicas y asesinato, se ha expandido para incluir la mutilación o ablación genital femenina, la violencia basada en el género ejercida por la policía y las fuerzas militares durante los conflictos armados y también en la vida cotidiana, la violencia contra las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo, el tráfico de mujeres y la prostitución, el acoso sexual, el embarazo y el aborto forzados, la esterilización impuesta, el infanticidio de niñas y la muerte provocada de fetos hembra, el matrimonio infantil y el obligado, los asesinatos de honor y las violaciones motivadas por la viudedad” (Merry, 2010: 55).

En este punto es importante retomar la definición de género propuesta por Joan Scott, de la que parte este escrito y recordar que entiendo el género como “un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos” y que comprende i. Los símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones de lo masculino y lo femenino; ii. Los conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de estos símbolos culturalmente disponibles; iii. Las instituciones políticas y las referencias a las instituciones y organizaciones sociales; y iv. La identidad subjetiva.

Conforme a lo anterior, entiendo la violencia de género, i.) Como aquella construida a partir de los símbolos que representan lo masculino y lo femenino en un plano jerárquico y que otorgan significados superiores y universales a lo asociado a lo masculino; y ii.) Como manifestación de la discriminación de lo que se representa como femenino. Esta forma de violencia se refleja en la falta de reconocimiento, la subvaloración e invisibilización de lo femenino, se manifiesta en ámbitos sociales, políticos, económicos y jurídicos, entre otros y tiene efectos materiales sobre la vida de las mujeres, que se agravan cuando se entrecruzan otras formas de violencia y exclusión.

En este sentido, puedo afirmar que la violencia de género es aquella que se fundamenta en conceptos normativos expresados en instituciones y contruidos sobre los símbolos disponibles de lo masculino y lo femenino (Scott, 2000) en un plano jerárquico y discriminatorio, que se traduce en el mantenimiento de esquemas de opresión y dominación, injusticias sobre el reconocimiento identitario de las personas, la distribución de cargas y beneficios y el control propio de la vida sexual y de otras opciones personales, por el hecho mismo de representarse como hombres o mujeres. Esta violencia incluye, en el caso colombiano, entre otros, los siguientes patrones:

La violencia contra las mujeres que se desempeñan en ámbitos tradicionalmente asociados a lo masculino:

El 10 de diciembre de 2002, en Bogotá, unos 80 hombres, presuntamente miembros de la Policía Metropolitana, vestidos de civil y sin ningún tipo de identificación externa, registraron la vivienda de Mercedes Corredor, integrante del Partido Comunista y militante de la Unión Patriótica (UP). Mercedes Corredor fue víctima de agresiones verbales y físicas y sometida a violencia sexual, todo ello en presencia de su hija, de nueve años de edad, y de su hijo, que sufre retraso mental, los cuales fueron también víctimas de malos tratos verbales y físicos. Los miembros de la familia de Mercedes fueron filmados y sus habitaciones registradas. Sin embargo, lo único que encontraron fueron documentos legales que demostraban su filiación política. (Amnistía Internacional, 2004).

La violencia que pretende imponer pautas y reglas de conducta acordes a los símbolos culturalmente contruidos de lo masculino y lo femenino y los castigos simbólicos y corporales por infringir los conceptos normativos de género:

Las muchachas viven acosadas y amenazadas por milicianos [guerrilleros urbanos] y paramilitares. Las acusan de relacionarse con los del bando contrario. Entre febrero y marzo [de 2004] han aparecido en la zona tres cuerpos de niñas violadas. Marcan su territorio marcando los cuerpos de las mujeres. Es un terror sin ruido. Por un lado, castigan a aquellas que usan descaderados, y otras veces, las obligan a vestirse con escotados y minifaldas para llevárselas a sus fiestas. Testimonio de psicóloga en Medellín recogido por AI el 10 de marzo de 2004. (Amnistía Internacional, 2004)

La violencia cometida contra las mujeres por ser madres, padres, esposas, esposos o novias y novios de los considerados como “enemigos”:

En un municipio del departamento de Huila, a mediados de 2002 una muchacha fue violada por presuntos miembros de las FARC, que habían hecho llegar advertencias a las jóvenes que tenían relaciones o contacto con miembros del ejército. En el municipio de Saravena (departamento de Arauca), el Frente 45 de las FARC distribuyó volantes declarando objetivo militar a las mujeres que visitaran batallones del ejército y comisarías de policía. El texto decía: "Nos dirigimos a las señoras y señoritas que frecuentan las instalaciones militares, llámense ejército o policía, porque serán consideradas objetivo militar". En Cali se recogió en 2002 el siguiente testimonio sobre violación por presuntos miembros de las FARC. (Amnistía Internacional 2004)

La violencia desproporcionada que padecen las mujeres como consecuencia del desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado y voluntario de mujeres y niñas y la violencia en la familia:

Mi padre abusaba [sexualmente] de mí desde los cinco años. Él no quería que estudiara ni que hablara con nadie. Sólo trabajar ordeñando las vacas. Mi mamá no sabía nada. Él era el que mandaba. Mi padre fue a buscarme pero no volví. Las FARC me dieron una K-47 con tres proveedores, ropa y botas. Ya no podría [mi padre] hacerme daño. [...] Ahora que ya no estoy en las armas, quisiera irme fuera para estudiar y trabajar. Porque yo valgo. [...] Nunca he contado a nadie de los abusos. Nadie antes me lo había preguntado. Además, esas cosas se callan. Sólo sabía que yo tenía que irme. Testimonio de niña desmovilizada recogido por AI el 29 de noviembre de 2003. (Amnistía Internacional, 2004)

La anticoncepción, embarazos y abortos forzados, la persecución y homicidios basados en la homofobia, dentro y fuera del conflicto, entre otras.

En Medellín, a finales de 2002, una muchacha de 14 años fue desvestida en una de las calles del barrio y le fue colocado un cartel en donde decía: “Soy lesbiana”. De acuerdo a la versión de pobladores del barrio, fue violada por tres hombres armados, presuntamente paramilitares. Días después fue hallada muerta, con los senos amputados. (...) En el 2002, en el barrio Miraflores de la ciudad de Barrancabermeja, dos lesbianas fueron violadas, presuntamente por paramilitares, según ellos, “para mostrarles a estas chicas qué es sentir un hombre”. (Amnistía Internacional, 2004)

1.7 ¿Cómo clasificar la violencia de género?

Habiendo definido la violencia de género a partir del DIDH, cabe intentar una clasificación de esta categoría. Esta categorización, responde a un interés por ilustrar a partir de elementos conceptuales, que las dinámicas de la violencia de género son diversas no sólo en función de sus manifestaciones, sino también de sus usos y efectos. María Mercedes Gómez distingue la violencia de género en función de sus usos, Margaret Walker la diferencia en virtud de sus efectos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según sus manifestaciones. A continuación presentaré estas tres clasificaciones.

1.7.1 Usos y efectos de la violencia

Gómez (2006) señala que la violencia puede tener usos jerárquicos y/o excluyentes y diferencia para ello la discriminación de la exclusión, la primera da lugar a los usos jerárquicos de la violencia, mientras que la segunda a los usos excluyentes. De acuerdo con la teoría de Gómez al unir los usos jerárquicos y los usos excluyentes, tenemos la violencia de género⁵³.

También podemos categorizar la violencia de género en función de sus efectos, para ello partiré de la distinción de violencia y daños de género propuesta por Margaret Walker y citada por Heidy Rombouts (2010) a propósito de los hechos de violencia de género ocurridos en Ruanda:

“Aquí me voy a servir de la útil distinción esbozada por Margaret Walker para comprender los aspectos específicos de género de los crímenes y daños en el contexto del genocidio en Ruanda. Walker distingue entre varias categorías (que no son excluyentes) de violencia y daño. Primero, **violencia y daños “normativos de género”**, infligidos específicamente sobre mujeres porque son mujeres. Segundo, **violencia y daño indirectamente discriminatorios con respecto al género**, que se refieren a aquellas situaciones en las cuales la carga o los efectos afectan primordial o desproporcionadamente a mujeres u hombres. Finalmente, **la violencia puede desencadenar también pérdidas ulteriores o incrementar la vulnerabilidad de las mujeres o de los hombres, de manera específica**; este aspecto relacionado con las consecuencias de la violencia de género, se denomina “violencia y daño multiplicado por el género”. La categorización anterior nos permite ver de inmediato que la violencia y los daños de género incluyen mucho más que la violencia sexual. Por ejemplo, las cargas añadidas que deben soportar las mujeres cabeza de familia (como consecuencia del genocidio), son igualmente importantes si pensamos en el genocidio y la reparación teniendo en cuenta sólo los aspectos de género” (Rombouts, 2010: 229).

Esta clasificación se puede ejemplarizar con lo sucedido en el caso del El Salado. En este sentido, como violencia y daños normativos de género, es posible entender la violencia basada en la construcción cultural de la víctima como sujeto subordinado, discriminado o

⁵³ “Empírica e históricamente, la distinción analítica entre la discriminación y la exclusión no es radical sino que ha sido dada como un continuo. Desde el comienzo de los años ochenta, los debates feministas, poscoloniales y de teoría queer han luchado por ganar reconocimiento gracias al hecho de que los individuos son miembros de una multiplicidad de categorías (raza, clase, género, identidad de género, orientación sexual, entre otros) que constantemente se interceptan y, en consecuencia, se mueven – o sufren simultáneamente- subordinación y exclusión. Ignorar la interseccionalidad de las categorías es reproducir la subordinación y exclusión de los marginados entre los marginados, es decir, de aquellos que se inscriben en dos o más formas de subordinación o exclusión” (Gómez, 2006: 31).

excluido. En el caso de El Salado, los hechos que pueden identificarse como violencia normativa de género, son entre otros, los siguientes:

- Violencia sexual y asesinatos cometidos contra las mujeres de El Salado en función i) de su relación afectiva, real o presunta con guerrilleros de las Farc, ii) de los liderazgos comunitarios y iii) de la asociación genérica de las mujeres con “el enemigo”.
- Imposición de trabajos forzados y castigos humillantes a las mujeres en virtud de los roles tradicionalmente impuestos a lo femenino.
- División por sexos en la cancha del pueblo y selección, de manera diferenciada en función del sexo, de las víctimas⁵⁴.

En estos casos las mujeres fueron asumidas como territorio y arma de guerra y la violencia ejercida en su contra se utilizó para lanzar un mensaje a su comunidad y al “enemigo” y en función de su rol protagónico en la sociedad, castigando su ejercicio público. De esta forma, se pretende destruir la capacidad de agencia de las mujeres, re- ubicándolas en el ámbito que, conforme a los conceptos normativos, les pertenece. Muestra de ello es la violencia contra las mujeres que tenían roles protagónicos, como la madre comunitaria y la maestra, y la imposición de trabajos forzados especialmente relacionados con roles de cuidado. Esto, sirve además para afirmar alguna potestad sobre las relaciones afectivas de las mujeres, de modo que, además de no poder desempeñarse en roles diferentes a los del cuidado del hogar y de los otros, solo pueden mantener relaciones afectivas con quien el sujeto dominante les impone.

Ahora bien, la utilización de las mujeres como arma y territorio de guerra, es una constante en los conflictos armados. Los hombres que participan en las hostilidades asumen el cuerpo femenino como una extensión del cuerpo de sus contrincantes por medio del cual pueden hacer daño, como una estrategia para sembrar miedo en la población no combatiente y como mecanismo para menguar los liderazgos comunitarios. Esto pretende,

⁵⁴ Esto se evidencia en que, mientras que con los hombres llevaron a cabo un sorteo como mecanismo de presión para obligarlos a delatar a los supuestos guerrilleros, del grupo de las mujeres seleccionaron a sus víctimas después de ser señaladas de tener supuestas relaciones afectivas con la guerrilla.

como señalé en el apartado anterior, negar las posibilidades de agencia de las mujeres y ubicarlas como objetos, negando su subjetividad.

Por otra parte, la violencia sexual ejercida en forma de violaciones en el corregimiento de El Salado, en función de la asociación genérica de las mujeres con “el enemigo”, es también una forma de violencia normativa de género en la cual la violencia se dirige a la feminidad de las mujeres como una forma de “infiltrar” a la comunidad y al contrincante (Rombouts, 2010: 230) y de posicionarse dentro de ellos.

Sobre la violencia y daño indirectamente discriminatorios con respecto al género y la violencia que puede desencadenar daños o pérdidas ulteriores podemos entender la violencia que es ejercida contra mujeres pero tiene efectos diferenciados. Relacionando este supuesto con el caso de El Salado, podemos observar que los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y desplazamientos forzados, fueron cometidos en forma indiscriminada contra hombres y mujeres, pero la manera como cada uno de estos hechos es experimentado objetiva y subjetivamente por hombres y mujeres es diferente. Para el caso de El Salado podemos identificar varias situaciones que ilustran esta descripción:

- El desplazamiento forzado de la población: luego de los hechos de violencia la población de El Salado tuvo que desplazarse de su corregimiento, desplazamiento que hoy en día persiste para muchos de ellos, pues no ha retornado al municipio ni siquiera un ochenta por ciento de su población. Ahora bien, el desplazamiento forzado tiene efectos desproporcionados sobre la vida de las mujeres, es decir, aunque mujeres y hombres del corregimiento fueron desplazados por la violencia, los efectos del desplazamiento son más graves para las mujeres, que para los hombres, como lo reconoció la Corte Constitucional en el Auto 092⁵⁵.

⁵⁵ “Como consecuencia del impacto diferencial y agudizado del conflicto armado colombiano sobre las mujeres, éstas se han visto afectadas en forma manifiestamente desproporcionada por el desplazamiento forzado, en términos cuantitativos y cualitativos –es decir, con relación tanto al elevado número de personas desplazadas que son mujeres, como a la naturaleza diferencial y la profundidad con la que el desplazamiento forzado por el conflicto armado dificulta, obstruye o impide el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres afectadas (Auto 092, 2008).

- Efectos diferenciados de la violencia sobre la salud de las mujeres: La segunda forma como se suele ejercer violencia indirectamente discriminatoria respecto al género, tiene que ver con la manera cómo se asume la violencia ejercida. Por ejemplo, contra las mujeres se cometieron asesinatos, torturas y otras violaciones a los derechos humanos al igual que contra los hombres, pero la forma como han sufrido las consecuencias de estos hechos violentos, marcada por los roles que les han sido asignados en la sociedad ha sido diferente. Este punto es especialmente evidente en el caso de El Salado y fue reconocido por la Corte Constitucional en la sentencia T – 045 de 2010. En esta providencia la Corte Constitucional constató la falta de atención en salud de la población de El Salado, a través de los casos de cuatro mujeres sobrevivientes de la masacre, que han sufrido afectaciones graves en su salud física y mental como consecuencia de los hechos violentos. Al analizar este caso, la Corte verificó que los efectos de la violencia en la salud, desde una perspectiva integral, de las mujeres de El Salado, fueron diferentes que los efectos en la salud de los hombres⁵⁶.
- Pérdida del sustento económico familiar: Entre los riesgos ulteriores a los que se ven sometidas las víctimas sobrevivientes y que son diferentes en función del género, está la pérdida de sustento económico familiar. Esta situación es evidente en el caso de El Salado y se relaciona con la necesidad de que las mujeres asuman roles familiares, económicos y sociales diferentes a los que ejercían antes del hecho violento. Teniendo en cuenta que en Colombia la mayoría de las mujeres están inmersas en relaciones familiares patriarcales en las que dependen material y económicamente de los hombres de las familias, cuando quienes asumían este rol no están, se obliga a las mujeres a convertirse en proveedoras manteniendo a su vez las cargas domésticas. En el marco de esta situación, se ven abocadas a enfrentar

⁵⁶Este impacto desproporcionado, se debe, entre otras razones al hecho de que las mujeres “se ven abocadas a factores de precipitación de afectaciones mentales las cuales no reciben adecuada atención terapéutica ni acompañamiento psicosocial para su superación (...). Además, se han visto expuestas a graves situaciones marcadas por la violencia, la discriminación y la exclusión que en sí mismas constituyen hechos traumáticos que requieren elaboración para así favorecer el proceso de reconstrucción del proyecto de vida. Las mujeres víctimas tienen fuertes necesidades de atención en salud mental debido a las presiones y cargas psicológicas derivadas de esta condición, aunadas a la ruptura de los imaginarios sociales, redes de apoyo sociocultural y a la experiencia de la pobreza y la violencia, cuyo procesamiento debe verse aplazado o evadido ante la necesidad apremiante de responder por sus familias” (T - 045, 2010).

las rupturas familiares derivadas del desplazamiento, el abandono de las redes originarias de apoyo y a las dinámicas de la vida en las ciudades receptoras.

- Relación con la tierra: En Colombia, los modelos de tenencia de la tierra las más de las veces están caracterizados por la existencia de títulos precarios. Esto ha puesto en una especial situación de vulnerabilidad a las mujeres víctimas del conflicto armado cuando pretenden regresar a sus terrenos. Así, los títulos precarios sobre la propiedad de la tierra a nombre de los hombres de las familias hacen que sea difícil para las mujeres acceder a las tierras abandonadas al momento del retorno. Lo anterior permite que las mujeres sean despojadas definitivamente de sus tierras por actores más poderosos por medio de maniobras jurídicas y/ o amenazas⁵⁷.

Ejemplificar la clasificación propuesta por Walker nos lleva a la necesidad de analizar la violencia de género de manera situada, lo que será fundamental para poder llegar a conclusiones respecto de las necesidades en materia de justicia de las mujeres víctimas de El Salado. En ese sentido es necesario revisar la forma como se puede clasificar la violencia de género en Colombia en el marco del conflicto armado, pues las dinámicas propias del conflicto en Colombia presentan particularidades y es en este contexto que ocurrieron los hechos.

En este punto cabe señalar que, si bien existen diferentes formas de violencia de género por fuera del conflicto, es en este que la violencia se agrava, pues las dinámicas sociales asociadas a la guerra reproducen las estructuras de poder y desigualdad vigentes. Por lo anterior, la última clasificación que presento en este capítulo es la realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2006) al analizar la situación de las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivada del conflicto armado colombiano.

⁵⁷ En la visita realizada a El Salado en septiembre de 2010, conversé con varias mujeres que me explicaron que después de la masacre las dinámicas alrededor de la tierra y el cultivo del tabaco cambiaron. Esto, por cuanto compañías tabacaleras habían comprado grandes extensiones de tierra en la región y tenían el control de la cadena productiva del tabaco, de modo que las y los habitantes de El Salado se convirtieron en “empleados” de dichas compañías, a quienes venden el tabaco por pequeñas sumas de dinero.

1.7.2 Manifestaciones de la violencia en el marco del conflicto armado

La relatora sobre derechos de las mujeres identificó luego de su visita a Colombia en 2005 cuatro manifestaciones de la violencia de género en el marco del conflicto armado. La primera, la violencia contra las mujeres como blanco directo o víctimas colaterales y como resultado de sus relaciones afectivas como hijas, madres, esposas, compañeras o hermanas, la segunda, la violencia destinada a causar el desplazamiento forzado y sus efectos, la tercera, el reclutamiento forzado y la violencia sexual que puede acompañarlo, así como la obligación de prestar servicios sexuales a los miembros de grupos armados y la última, la violencia destinada a imponer pautas de control social.

a. Violencia contra mujeres no combatientes como blanco directo o víctimas colaterales

La CIDH constató que en Colombia la violencia contra las mujeres tiene el objeto de “lesionar, aterrorizar y debilitar al enemigo para avanzar en el control de territorios y recursos económicos” (CIDH, 2006). En el marco de ese objetivo, se presenta el primer tipo de violencia: la ejercida contra mujeres no combatientes como blanco directo o como víctimas colaterales de la violencia⁵⁸.

Este tipo de violencia se ejerce contra las mujeres en virtud de sus relaciones reales o presuntas con actores armados y es cada vez más habitual en el marco de la degradación del conflicto. De acuerdo con el informe de la CIDH, cuando se da en forma de violencia sexual es un acto de dominación que pretende poner en duda el papel de protectores de los hombres del bando contrario. En este caso, las mujeres son tratadas como “objetos” en las luchas entre “sujetos” varones.

⁵⁸ “Mediante actos de violencia física, psicológica y sexual, los actores armados pretenden intimidar, castigar y controlar a las mujeres por tener relaciones afectivas con miembros del bando contrario, por desobedecer las normas impuestas por los actores armados, o por participar en organizaciones percibidas como enemigas. Sin embargo, estos actos no sólo tienen como objetivo el deshumanizar a las víctimas como mujeres. Estas agresiones sirven adicionalmente como una táctica para humillar, aterrorizar y lesionar al “enemigo”, ya sea el núcleo familiar o la comunidad a la que pertenece la víctima” (CIDH, 2006).

En el caso de la masacre de El Salado, este tipo de violencia resulta especialmente evidente, pues fue, en términos generales, la ejercida contra las mujeres ejecutadas extrajudicialmente y violentadas sexualmente, a quienes se asoció de manera genérica con el enemigo, para este caso la guerrilla, o a quienes se acusó de mantener relaciones afectivas con este grupo, asumiendo la posibilidad de cuestionar mediante el uso de la violencia, estos vínculos.

b. Violencia destinada a generar desplazamiento forzado

Otra de las formas de violencia de género identificada por la CIDH es la destinada a causar desplazamiento forzado. Esta forma de violencia que es también un ejemplo de la violencia con impactos desproporcionados en función del género, se ejerce contra hombres y mujeres en el marco del conflicto y representa “uno de los aspectos más graves de la situación de derechos humanos en Colombia” (CIDH, 2006) así como una grave crisis humanitaria.

Las razones por las cuales el desplazamiento forzado es una forma de violencia de género, tienen que ver con su impacto desproporcionado sobre la vida de las mujeres, por el hecho de ser mujeres. Así, la mayoría de las personas desplazadas son mujeres y la mayoría de los hogares desplazados cuentan con jefatura femenina, asumida después del desplazamiento⁵⁹. Esto implica que las mujeres son obligadas a asumir roles diferentes a los que tradicionalmente tenían⁶⁰, sumados a los efectos económicos y psicosociales derivados del desplazamiento y a la persistencia de las amenazas. Ahora bien, esta situación, consecuencia de la violación a sus derechos, ha servido también para subvertir

⁵⁹ De acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR, “las personas desplazadas son el mayor grupo de víctimas del conflicto en Colombia, y entre ellas, las mujeres son mayoría. Hasta noviembre de 2009, la Agencia Presidencial para la Acción Social – organismo del gobierno que coordina la política gubernamental frente al desplazamiento -ha registrado más de 3.2 millones de personas desplazadas. De ellas, cerca del 83 % son mujeres, niñas y niños. Según el séptimo informe de la Comisión de Seguimiento a la política pública sobre el desplazamiento forzado, (de octubre 2008), el 43% de las familias desplazadas tienen jefatura femenina, y en 68 de cada 100 casos, esas mujeres desplazadas cabeza de familia están solas (ACNUR, 2009).

⁶⁰ La tradicional restricción de las mujeres al espacio privado y doméstico también tiene implicaciones y costos, pues los hechos violentos les imponen de manera abrupta la necesidad de asumir una serie de acciones en el ámbito público, sin estar preparadas para ello. Por ejemplo, muchas mujeres narran los pesados y dispendiosos días de trámites, averiguaciones y papeleos para acceder a fondos de reparación (GTMH, 2011, pág. 356).

roles de género que habían sido asignados e incrementar la capacidad de agencia de las mujeres, lo que, en algunos casos, ha incrementado su vulnerabilidad, en virtud de su posición en las relaciones de género. Es decir, si bien, esto ha contribuido respecto de las mujeres de El Salado a afianzar su identidad como sujetas de derechos, también ha impuesto cargas y riesgos desproporcionados en sus vidas⁶¹.

En el caso de El Salado, la violencia orientada a generar desplazamientos forzados es evidente y se explica en el hecho de que el corregimiento está ubicado en un corredor estratégico para el tráfico de drogas ilícitas y que fue durante años territorio en disputa por todos los actores armados. Además, en la fertilidad de sus tierras, especialmente aptas para el cultivo de tabaco y en la ubicación estratégica del corregimiento, que impulsó la escalada de violencia, cuya manifestación más grave fue la masacre ocurrida en el año 2000, y que estaba acompañada por intereses sobre el control de los territorios.

Ahora bien, el desplazamiento forzado de la población y el abandono de sus tierras por los pobladores, también tiene impactos desproporcionados sobre las mujeres, quienes con dificultad pueden reclamar la propiedad de sus tierras por cuenta de los títulos precarios de los que gozan.

c. Reclutamiento forzado de mujeres y niñas

En tercer lugar, la CIDH identifica como manifestación de la violencia de género, el reclutamiento forzado y voluntario de mujeres y niñas. Cuando este se presenta implica no sólo el ejercicio de funciones propias de los combatientes, sino también el uso de hombres y mujeres mayores o menores de edad como esclavos sexuales, encargados de tareas

⁶¹ Las mujeres directamente victimizadas o viudas, aunque psicológica y emocionalmente afectadas por los hechos traumáticos, deben seguir con la responsabilidad de cuidar a los hijos y mantener el hogar; por eso, en la mayoría de relatos describen cómo, luego de los acontecimientos, más que sumirse en la parálisis y la depresión, se movieron para sacar adelante a sus familias. A sus múltiples y pesadas labores domésticas se sumaron responsabilidades económicas para garantizar el sustento del hogar; además, tuvieron que hacerse cargo de los impactos emocionales que generaron en las familias los hechos violentos (GTMH, 2011: 356).

domésticas, guías, informantes, mensajeros, escoltas, etc. El abuso sexual en estos casos ha sido un asunto de especial preocupación para la CIDH⁶².

Para el caso de El Salado, si bien la masacre no se relaciona directamente con reclutamiento de mujeres y niñas, es posible identificar algunos arreglos de género alrededor del reclutamiento de jóvenes del corregimiento por parte de la guerrilla de las Farc, con anterioridad a la masacre. Así, de acuerdo con el GTMH El Salado era un territorio estratégico para esta guerrilla que intentó allí el reclutamiento de nuevos jóvenes combatientes, a quienes “se acercaba recurriendo a las mujeres guerrilleras para persuadirlos de su vinculación a la guerrilla” (GTMH, 2009: 177).

d. Imposición de pautas de conducta

Finalmente, la última forma de violencia de género identificada por la CIDH es la imposición de pautas de conducta sobre la vida de las personas, especialmente de las mujeres y las niñas. Esta es una de las formas mediante las cuales los grupos armados ejercen control sobre la vida comunitaria, intervienen en la resolución diaria de los conflictos e imponen sanciones, entre ellas, la violencia sexual como castigo⁶³.

Este control está marcado por el ejercicio de relaciones de poder que reproducen roles tradicionales de género. Así, se castiga a las mujeres que “descuidan” su hogar, que se visten de manera “inapropiada” o las niñas que están fuera de su casa hasta tarde.

⁶² “Tanto entidades estatales, de Naciones Unidas y la sociedad civil han reportado que el reclutamiento de mujeres y niñas puede estar acompañado de violaciones sexuales por miembros del grupo armado, la imposición de abortos forzados y el uso de métodos anticonceptivos, la esclavitud sexual, y acoso por parte de sus superiores y otros miembros. Por ejemplo, la Relatora recibió información sobre la zona de Catatumbo, en el norte de Santander, indicando que uno de los factores que ha obligado a las mujeres a desplazarse, a parte de la muerte de sus esposos o hijos, es la amenaza que recae sobre sus hijas mayores de 14 años, de ser reclutadas para las filas de los paramilitares para convertirse, no sólo en combatientes, sino también para ser explotadas sexualmente por los actores armados” (CIDH, 2006).

⁶³ Sobre la imposición de pautas de conducta ver: GTMH, Mujeres y Guerra. Víctimas y resistentes en el caribe colombiano, 2011, Bogotá, Taurus.

Las formas de control fomentan estereotipos de género arraigados culturalmente y reafirman valores conservadores. Esto se puede ver en la imposición de normas que mantienen la estricta diferenciación entre hombres y mujeres como, por ejemplo, normas sobre la indumentaria y el arreglo personal. A los hombres se les prohíbe usar pendientes, teñirse el cabello o llevarlo largo. A las mujeres se les exige uniformar las prendas de vestir femeninas y prohibir aquellas consideradas provocativas o insinuantes. Como indica Amnistía Internacional “usar prendas que exponen el cuerpo a la mirada de los hombres, sostener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ejercer la prostitución o simplemente expresar autonomía y no tener pareja masculina, puede determinar que una mujer padezca a manos de los grupos armados persecución y los castigos más atroces. Amnistía Internacional ha descrito cómo “tanto los paramilitares como la guerrilla parecen disputarse la condición de guardianes de una moralidad sexual tradicional asociada a la idea de orden” (CIDH, 2006:párr. 99).

Para el caso de El Salado, el “castigo” violento de las mujeres que sostenían relaciones, reales o supuestas con la guerrilla, constituye una forma de imponer pautas de conducta en las mujeres, de tal suerte que las relaciones afectivas y el ejercicio de su sexualidad, están marcados por lo que el bando “dominante” impone o permite.

1.8 A modo de conclusión

Las anteriores reflexiones nos permiten ubicar los hechos ocurridos en el corregimiento de El Salado en el marco de un ejercicio sistemático y generalizado de violencia de género cometida contra las mujeres. Entendida esta, en los términos planteados anteriormente, como aquella construida a partir de los símbolos que representan lo masculino y lo femenino en un plano jerárquico y que otorgan significantes superiores y universales a lo asociado a lo masculino, estas representaciones culturales han tenido efectos materiales sobre la vida de las mujeres, que se traducen, por ejemplo, en oportunidades desiguales y en relaciones de subordinación y explotación de las mujeres.

La violencia cometida contra los pobladores de El Salado, en particular, la violencia cometida contra las mujeres, se puede calificar como violencia de género, en la medida en que se adapta a las clasificaciones presentadas en el apartado anterior. Así, se trató de una

violencia con usos jerárquicos y excluyentes, dirigida contra las mujeres por el hecho de serlo y con efectos desproporcionados sobre sus vidas, que además implicó pérdidas ulteriores e incrementó su vulnerabilidad en función del género.

Dicha violencia, como la generalidad de la cometida contra las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano, se manifestó en forma de violencia contra las mujeres como blanco directo o víctimas colaterales de la guerra, de desplazamiento forzado, de reclutamiento forzado y en la imposición de pautas de conducta.

4. ¿Qué entiendo por justicia de género?

Frente a graves violaciones a los derechos humanos que incluyen violencia de género, en los términos relacionados anteriormente, es necesario establecer qué se requiere desde una perspectiva teórica y práctica para lograr justicia con una perspectiva de género. Esto, porque una justicia sin esta perspectiva, no responde a las implicaciones de la violencia de género sobre la vida de las víctimas y resulta insuficiente si lo que se quiere es garantizar la vigencia de una sociedad democrática marcada por el respeto de los derechos fundamentales de todos y todas.

Por lo anterior, en el presente capítulo pretendo señalar, desde una perspectiva teórica y práctica, qué se requiere para hacer justicia de género, situando dicha propuesta en el contexto colombiano, marcado por la persistencia del conflicto armado interno y por múltiples formas de discriminación y exclusión social, que en la mayoría de los casos han propiciado y permitido la persistencia de la violencia de género en los términos planteados en el capítulo precedente.

Dicha propuesta pretende hablar de justicia de género desde un enfoque retributivo en clave penal, pero también desde un enfoque de redistribución y reconocimiento, que confronte los contextos de discriminación y exclusión y los símbolos que representan lo masculino y lo femenino en un plano jerárquico y que otorgan significantes superiores y universales a lo asociado a lo masculino.

1.9 Proponiendo una definición de justicia de género

Entiendo por justicia de género, un enfoque teórico que tiene la pretensión normativa de remediar en forma cualificada y concreta los efectos perjudiciales de actos de violencia de género -en sus múltiples manifestaciones-, con el fin último de transformar las relaciones desiguales de poder y los símbolos que representan lo masculino y lo femenino en un plano jerárquico y que otorgan significantes superiores y universales a lo asociado a lo

masculino, a través de la articulación de tres tipos de medidas: reconocimiento, corrección y redistribución.

Esta definición parte de una noción jurídica de la justicia, que construyo a partir de la Constitución de 1991 que es nuestro marco normativo, para situar el concepto en el caso colombiano. Asimismo, se sirve de definiciones teóricas clásicas de la justicia correctiva y distributiva y de aporte teóricos contemporáneos relacionados con la justicia basada en el reconocimiento. Posteriormente, señalo cómo esta definición puede hacerse efectiva en la práctica jurídica agenciando las posibilidades de las mujeres de materializar sus derechos, considerando que, aunque no entiendo el sexo y el género como conceptos equivalentes, la violencia de género en el caso de El Salado se expresó de manera especial en contra de las mujeres.

Esta definición pretende articular diferentes enfoques, porque las exigencias en materia de justicia no son unívocas, sino que dependen de la situación particular de las mujeres en el mundo, en un momento dado⁶⁴.

1.9.1 La justicia desde una perspectiva jurídica: el derecho a la justicia en el marco normativo colombiano

Numerosos cuerpos normativos nacionales e internacionales hacen referencia a la justicia, así como diferentes Tribunales han desarrollado su contenido. Para situar el debate en el caso colombiano y para definir desde una perspectiva jurídica el derecho a la justicia me

⁶⁴ En lo que se refiere a justicia, las mujeres reclaman varios elementos: como la mujer en Jordania, que percibe que la injusticia radica en no poder tomar sus propias decisiones con respecto al matrimonio y con respecto a su propia educación y libertad de movimiento. La mayoría de las mujeres anhelan poder conducir su vida de manera autónoma, en igualdad de condiciones que los hombres. Como otra mujer de Escocia, quien rechaza el uso ilegítimo que hacen sus empleadores de la justicia al negarle un salario digno, las mujeres desean obtener una remuneración justa por el trabajo que realizan y que el sistema judicial aplique las leyes que sólo están en el papel. Al igual que la mujer en Uganda, que percibe que los hombres pueden actuar en conjunto a favor de sus intereses colectivos y negarle el acceso a la justicia, las mujeres de todo el mundo desean contar con un sistema judicial accesible y receptivo. Y como la mujer de Rwanda, cuya experiencia de testificar en los tribunales reforzó el estigma y la vergüenza vividos por la violación, las mujeres desean poner fin a la impunidad y que el proceso de acceder a la justicia sea digno y las empodere (ONU Mujeres, 2011: 11).

basaré en la Constitución de 1991 y los desarrollos realizados por la Corte Constitucional colombiana, intérprete autorizada de la Constitución⁶⁵.

La Constitución de 1991 señala en el preámbulo que promulga la Constitución con el fin de “fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social **justo**”. Este propósito se reitera en el artículo segundo que señala que “son fines esenciales del Estado: (...) asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden **justo**”.

De acuerdo con los anteriores preceptos, la Corte Constitucional ha entendido que la justicia es un derecho, un principio y un valor. Que la justicia sea un valor constitucional, implica que se trata de un fin al que se aspira a llegar y por lo tanto determina el sentido de las demás normas del ordenamiento jurídico colombiano; que sea un principio, implica que se trata de una prescripción jurídica que restringe el ámbito de interpretación y aplicación de las demás normas; y que sea un derecho fundamental implica que es exigible por sus titulares.

El derecho a la justicia se materializa en parte, mediante el ejercicio del derecho a la administración de justicia, que se puede hacer efectivo en el ordenamiento jurídico colombiano a través de:

- Mecanismos de protección de derechos como el habeas corpus (art. 34 C.P), la acción de tutela (art. 86 C.P), la acción de cumplimiento (art. 87 C.P), las acciones populares (art. 88 C.P) y las acciones de inconstitucionalidad y nulidad (arts. 40, 237-2, 241 C.P).

⁶⁵ Cabe destacar que algunas autoras consideran la Constitución de 1991 como un pacto masculino y heterosexual, “expresado en la poca representación de las mujeres en la Asamblea Nacional Constituyente, en la desigualdad de intercambio que supone un pacto social y la división sexual del trabajo, en la que el trabajo de muchas mujeres quedó invisible. En ese sentido, el carácter heterosexual, no sólo se basó en una representación cuantitativa, sino social y política” (Curiel, 2010). En consonancia con lo anterior, algunas autoras sostienen que su texto como concepto normativo, reproduce los símbolos disponibles de lo masculino y lo femenino.

- El establecimiento de distintas jurisdicciones especializadas (artículos 116 y 228 C.P).
- La consagración del principio del debido proceso y de las garantías procesales y sustanciales (artículo 29 C.P).
- El establecimiento de la administración de justicia como una función estatal, organizada en forma independiente y autónoma, que da prevalencia al derecho sustancial sobre el procesal (art. 228 C.P).
- El sometimiento de los jueces al imperio de la ley y su aplicación con observancia del principio de igualdad (arts. 13 y 230 C.P)
- La garantía de acceso a la administración de justicia en estricto sentido mediante: i. La posibilidad de iniciar el funcionamiento del aparato jurisdiccional; ii. El derecho a adelantar el proceso con la economía de tiempo y sin dilaciones injustificadas; y iii. El derecho a una decisión que resuelva la situación controvertida (art. 229 C.P). de acuerdo con la Corte Interamericana esto equivaldría al derecho a un recurso judicial efectivo (C – 496, 1994).

En otras palabras, el derecho a la administración de justicia se materializa mediante la denominada “cadena de justicia” (ONU Mujeres, 2011), que son los mecanismos, derechos y acciones que permiten a las y los ciudadanos hacer efectivo el derecho a la justicia. En algunos casos, cuando se constatan fallas en la “cadena de justicia”, es posible que Tribunales Internacionales como la Corte Interamericana de derechos humanos acudan para solucionar las fallas.

Cuando se comete un delito contra una mujer, por ejemplo, la “cadena de justicia” consiste en los procesos que ésta debe seguir y las instituciones a las que debe acudir. La cadena es compleja y varía según cada caso, el contexto de la violencia, los recursos con que se cuenta y el sistema jurídico de cada país.⁶⁶

⁶⁶ Al respecto ver: ONU Mujeres. El progreso de las mujeres en el mundo, capítulo 2 “La cadena de Justicia”. 2011.

1.9.2 La justicia desde una perspectiva teórica

Junto a la posición jurídica, la justicia tiene un importante contenido teórico. Para referirme a este retomaré los conceptos planteados por Aristóteles. Si bien este análisis excluye importantes desarrollos teóricos que durante años se han hecho sobre la justicia, la referencia a Aristóteles pretende diferenciar los componentes fundamentales de este concepto y en este sentido, resulta oportuna.

En este punto, es importante aclarar que el recurso a Aristóteles responde a la idea de que hablar de justicia de género, incluye todos los componentes de la noción de justicia, entre ellos, las nociones clásicas, pero aún vigentes de justicia distributiva y conmutativa, presentadas por Aristóteles. Elementos que complemento haciendo referencia a Nancy Fraser, con la idea de justicia basada en el reconocimiento. La referencia a Fraser se justifica en que articula la noción de distribución planteada originariamente por Aristóteles, con la de reconocimiento. Si bien, estas referencias puede parecer intemporales y/o poco situadas en el caso colombiano, pretenden traer a colación los elementos mínimos necesarios para poder hablar de justicia de género⁶⁷, por ello también, y porque excedería los propósitos de esta tesis, excluyo una referencia a los desarrollos de autores tan importantes como John Rawls, Amartya Sen o Martha Nussbaum, así como las críticas que desde una perspectiva feminista o de género podrían caer a Aristóteles.

Ahora bien, Aristóteles señala que a la noción de justicia se le atribuyen diferentes significados, de tal suerte que se llama injusto tanto a quien trasgrede la ley como a quien es codicioso. En este orden de ideas, la justicia tendría dos significados principales, el primero tiene que ver con lo legal y el segundo, con impedir la generación de desigualdades no justificadas, el primer sentido se denomina justicia universal o general y el segundo, justicia particular (Aristóteles s.a: 126). La justicia universal se refiere al conjunto de las relaciones sociales, mientras que la particular se refiere a las relaciones de

⁶⁷ Rodrigo Uprimny, quien ha propuesto un enfoque de justicia para víctimas que incluye la corrección y la redistribución en contextos desiguales como el colombiano, ha señalado en varios de sus artículos que resulta útil la “vieja” distinción propuesta por Aristóteles en “Ética a Nicomano” en este sentido (Uprimny & Saffón, 2009) y (Uprimny & Sanchez, 2010).

intercambio de los individuos dentro de la comunidad. A continuación me referiré a cada uno de estos tipos de justicia.

Respecto del primer tipo de justicia, *la justicia universal*, Aristóteles señala que se refiere al conjunto de leyes “que representan los muros espirituales de la polis y en las que se condensa el bien común” (Serrano, 2005: 127). En este sentido, de acuerdo con Aristóteles, las leyes piden la justicia en virtud de su autoridad.

Asimilar la justicia a la legalidad, reporta serias dificultades. A lo largo de la historia se han reevaluado las tesis según las cuales una ley injusta no deja de ser ley. Sin embargo, Aristóteles parte de la tesis de que la eficacia de la legalidad se deriva más de la aceptación ciudadana que de la coacción y ese consenso se alcanza cuando hay coherencia entre las costumbres y la legalidad, de modo que las leyes justas son aquellas susceptibles de ser aceptadas por quienes están sometidas a ellas.

Respecto de la justicia particular, es una parte de la justicia universal que pretende regular las desigualdades entre los individuos, Aristóteles la distingue en dos tipos. La justicia distributiva y la justicia conmutativa o correctiva. La primera, se refiere a la distribución de bienes sociales, la segunda, la diferencia a su vez en i) aquella que implica actos voluntarios por parte de los participantes y ii) aquella que implica actos involuntarios por una de las partes y requiere la participación de un juez⁶⁸.

Declaradas las dos especies de la vulgar justicia, la una que consiste en los comunes repartimientos de honras [e] intereses, y la otra en la reformation de los particulares contractos, así voluntarios como forzosos, en lo cual se comprenden los dos géneros de acciones, civiles digo y criminales, y la regla que el recto juez debe guardar en el juzgar rectamente, que es quitar del que hizo el agravio y añadir al que lo recibió hasta reducirlos a igualdad (Aristóteles s.a: 137)

⁶⁸ De acuerdo con Aristóteles, las acciones para que sean injustas o justas deben realizarse voluntariamente por una persona, de modo que nadie puede actuar injustamente contra sí mismo. Si un daño es causado involuntariamente, no deja de ser daño pero no es injusto. Se convierte en injusto cuando, al tomar conciencia del hecho no se busca repararlo. Ahora bien, Aristóteles introduce, al hablar de la justicia universal, el concepto de equidad para hacer frente al hecho de que no todas las leyes son justas y que además su aplicación igualitaria a todos los miembros de la sociedad, sin tomar en cuenta las pluralidades del ser humano, conduce a la injusticia. La equidad, exige entonces el perfeccionamiento de la legalidad, para que haya verdadera justicia.

El primero de estos tipos de justicia, la justicia distributiva, supone la existencia de i.) Una cantidad de bienes a ser repartidos; ii.) Una instancia encargada de repartir los bienes; iii.) Por lo menos dos personas entre las cuales distribuir los bienes; iv.) Un criterio para realizar la distribución; y v.) El mérito, en el que se sustenta la aspiración de cada quien en el proceso distributivo.

La forma más simple de justicia distributiva se realiza mediante la igualdad aritmética, de acuerdo con la cual a cada uno de los participantes en la distribución se les da la misma cantidad de los bienes que deben distribuirse. Sin embargo, esto no es precisamente justo, pues no todos contribuimos de manera igual a la producción de bienes, de modo que una distribución más justa responde a criterios no de igualdad numérica sino a un criterio de proporcionalidad⁶⁹.

Por otra parte, la justicia conmutativa, se refiere a relaciones personales voluntarias o involuntarias. El primer caso se refiere a los intercambios entre individuos y el segundo a las transgresiones de las normas que rigen los intercambios. Esta clase de justicia no se fija en el mérito de los individuos, sino en sí un individuo infringe daño a otro, caso en el cual quebranta la norma de igualdad. La primera acepción de este tipo de justicia (conmutativa) hace referencia al pago que debe darse por las cosas. Este tipo de justicia se relaciona con el derecho civil y en ella, el dinero permite valorar el daño.

La segunda acepción de este tipo de justicia es la justicia correctiva. En este caso, alguien sufre un daño y alguien obtiene una ganancia mediante la trasgresión de las normas, puede haber violencia implícita o explícita, y es preciso reparar el daño, para lo que se acude al juez. Este tipo de justicia se asocia al derecho penal.

⁶⁹ En términos abstractos es fácil definir la igualdad proporcional, la cual presupone una relación de por lo menos cuatro términos: dos personas y dos cantidades de bienes. Si el mérito en relación al criterio distributivo de dos personas es igual, serán tratadas de manera justa cuando la cantidad de bienes que reciben es igual. Si el mérito de esas personas es desigual, serán tratadas de manera justa cuando la diferencia de bienes que reciben es proporcional a la desigualdad de sus méritos (sí, por ejemplo, el mérito de un individuo es el doble del mérito de otro, el primero debe recibir el doble de bienes que el segundo) (Serrano, 2005: 141).

Ahora bien, a estos dos tipos de justicia, se debe sumar el enfoque del reconocimiento, desarrollado por Nancy Fraser⁷⁰, que se construye en oposición a las injusticias culturales, es decir, aquellas construidas socialmente a partir de las relaciones de poder forjadas históricamente y que reivindican la prevalencia o superioridad de determinados grupos sobre la base de la raza, la clase, la etnia, el género, entre otras.

Cada uno de estos enfoques de justicia, responde a diferentes tipos de injusticia. La justicia distributiva responde, en términos de Fraser, a errores de distribución de cargas y beneficios. La justicia correctiva responde a errores de conducta de los individuos, voluntarios o involuntarios, y la justicia basada en el reconocimiento responde a errores relacionados con la igualdad en honor o dignidad. De su intersección depende el logro de la justicia en contextos caracterizados por la confluencia de injusticias.

JUSTICIA		
JUSTICIA PARTICULAR	Justicia Distributiva	
	Justicia Conmutativa	Justicia conmutativa en sentido estricto
		Justicia Correctiva
	Justicia basada en el Reconocimiento	

Considerando que cada uno de estos modelos de justicia, implica reivindicaciones diferentes, más allá de su comprensión en un único tipo de justicia, propongo un enfoque que articule los tres modelos de justicia particular, aplicados estos desde una perspectiva que confronte los símbolos disponibles de lo masculino y lo femenino y los conceptos normativos creados alrededor de estos símbolos, en aras de lograr justicia de género.

Esta propuesta parte de la base de que la justicia de género debe transformar los símbolos y normas que dan lugar y perpetúan la violencia de género; las relaciones injustas de poder, las inequidades materiales y la subordinación basada en dichos símbolos y normas; y actuar sobre la subjetividad de las mujeres víctimas (a través, por ejemplo, de la asistencia

⁷⁰ En este punto complemento la clasificación presentada por Aristóteles con los aportes de Nancy Fraser, por considerarlos apropiados para referirme a una noción de justicia para víctimas de violencia sociopolítica, que enfrente contextos de exclusión e injusticias de reconocimiento.

psicosocial). Esto solo es posible si se corrigen las diferentes injusticias relacionadas con dicho tipo de violencia desde la corrección, la distribución y el reconocimiento.

1.9.3 Articulando la redistribución y el reconocimiento

Al hacer referencia al logro de justicia de género como materialización de la distribución y el reconocimiento utilizo el primero de estos términos, esto es, la distribución, a partir de “la vieja pero aún muy útil distinción propuesta por Aristóteles en el Libro V de su Ética a Nicómaco” (Uprimny & Sanchez, 2010), y lo complemento en el sentido de Nancy Fraser le otorga. Adicionalmente entiendo la distribución y el reconocimiento, en términos de Fraser, desde una perspectiva tanto “filosófica como política. Desde el punto de vista filosófico, se refieren a unos paradigmas normativos elaborados por teóricos y filósofos morales. Desde el punto de vista político, se refieren a familias de reivindicaciones planteadas por actores políticos y movimientos sociales en la esfera pública” (Fraser, 2006: 19).

Con ello, pretendo señalar que el logro de la justicia de género pasa por la justicia correctiva, pero también por la redistribución y el reconocimiento, entendidos estos últimos como categorías teóricas y como reivindicaciones sociales. Entiendo además, siguiendo a Fraser, que no es posible lograr la distribución como corolario del reconocimiento⁷¹ o el reconocimiento como consecuencia de una distribución justa, tanto las reivindicaciones por reconocimiento, como las reivindicaciones de redistribución deben estar de la mano.

Concibo el reconocimiento, en el sentido que Fraser le otorga, como un orden de estatus construido culturalmente mediante los valores sociales y que se mide en el “*respeto, prestigio y estima relativos que disfrutan [las personas] ante los demás*” (Fraser, 2006: 53). Por su parte, la dimensión distributiva la entiendo como parte de la estructura

⁷¹ “En el paradigma del reconocimiento, en cambio, la solución de la injusticia es el cambio cultural o simbólico. Esto podría suponer la revaluación ascendente de las identidades no respetadas y los productos culturales de los grupos difamados; el reconocimiento y valoración positiva de la identidad cultural, o la transformación de la totalidad de los patrones sociales de representación, interpretación y comunicación, de manera que cambiara la identidad social de todos” (Fraser, 2006:22 - 23).

económica de la sociedad y se constituye “*mediante los regímenes de propiedad y los mercados de trabajo*” en un plano económico⁷². Creo también, siguiendo a Fraser que las injusticias de género solo pueden corregirse mediante una justicia que articule estas dos dimensiones entre sí y, sumaría yo, a la justicia correctiva⁷³.

En esta línea de análisis entiendo que para hacer justicia de género se requiere no solo la redistribución en materia de bienes y cargas, sino del reconocimiento. Este último entendido como “un remedio de la injusticia social y no [como] la satisfacción de una necesidad humana genérica” (Fraser, 2006: 49 - 50). Así, en función del género se cometen injusticias de distribución, como las relacionadas con el hecho de que las mujeres deban hacerse cargo de ciertas labores o tengan menores oportunidades de acceder a calificaciones y empleos bien remunerados, entre otros. Pero también, en función del género se configuran relaciones de discriminación y desprecio, como cuando se considera que una mujer es menos inteligente que un hombre, por el solo hecho de ser mujer. Además, porque en función del género estas formas de injusticia se articulan: por ejemplo, las personas con opciones sexuales no normativas pueden ser rechazadas en el empleo o despedidas en virtud del “estatus” que les es asignado, articulándose en este punto un error (una injusticia) de distribución y un error (una injusticia) de reconocimiento.

Ahora bien, Nancy Fraser señala que existen dos formas de corregir las injusticias de género, mediante un enfoque que articule la redistribución y el reconocimiento. Estas son la afirmación y la transformación.

⁷² Es importante señalar que las reflexiones de Fraser se sitúan en las sociedades capitalistas modernas con mayor desarrollo económico que la colombiana. Siguiendo a Rodrigo Uprimny, podría afirmarse que se trata de aproximaciones elaboradas para sociedades “bien ordenadas” en términos de Rawls. Por lo anterior, corresponde situar estos conceptos en sociedades “bien desordenadas” como la colombiana, señalando que este parece ser el enfoque más adecuado, por hacer referencia a un modelo de justicia transformador. Ver infra 1.10.pág. 98.

⁷³ Fraser sostienen que “el género es una diferenciación social bidimensional. El género no es una simple clase ni un mero grupo de estatus, sino una categoría híbrida enraizada al mismo tiempo en la estructura económica y en el orden de status de la sociedad. Por tanto, comprender y reparar la injusticia de género requiere atender tanto a la distribución como al reconocimiento” En este sentido, de acuerdo con Fraser, el género, “es una diferenciación social bidimensional. Combina una dimensión similar a la de clase social, que la sitúa en el ámbito de la redistribución, con una dimensión de estatus, que la incluye simultáneamente en el ámbito del reconocimiento. Queda abierta la cuestión de si las dos dimensiones tienen una ponderación igual. No obstante, en todo caso, la reparación de la injusticia de género exige cambiar tanto la estructura económica como el orden de estatus de la sociedad” (Fraser, 2006: 28 y 30).

Empezaré por distinguir brevemente entre afirmación y transformación. Con soluciones afirmativas a la injusticia, me refiero a aquellas soluciones dirigidas a corregir los resultados inequitativos de los acuerdos sociales, sin afectar el marco general que los origina. Por soluciones transformativas, por el contrario, entiendo aquellas soluciones dirigidas a corregir los resultados inequitativos, precisamente mediante la reestructuración del marco general implícito que los origina. El punto esencial del contraste es resultados finales versus procesos que los generan, no el cambio gradual versus el apocalíptico (Fraser, 1997: 38).

Las soluciones de afirmación y transformación se dan en el terreno de la redistribución y el reconocimiento y podrían *combinarse* para lograr justicia. Para elaborar dicha combinación Fraser propone el siguiente cuadro (Fraser, 1997: 45):

	Afirmación	Transformación
	<i>Estado liberal benefactor</i>	<i>Socialismo</i>
Redistribución	<p>Reasignación superficial de los bienes existentes de entre los grupos existentes</p> <p>Apoya la diferenciación entre los grupos</p> <p>Puede generar irrespeto</p>	<p>Reestructuración profunda de las relaciones de producción</p> <p>Difumina los factores de diferenciación entre los grupos Puede contribuir a reparar algunas formas de irrespeto</p>
	<i>Multiculturalismo central</i>	<i>Deconstrucción</i>
Reconocimiento	<p>Reasignación superficial del respeto entre las identidades existentes de los grupos existentes</p> <p>Apoya la diferenciación entre los grupos</p>	<p>Reestructuración profunda de las relaciones de reconocimiento</p> <p>Desestabiliza la diferenciación entre los grupos</p>

En su propuesta señala que la forma más adecuada de aproximarse al logro de la justicia es combinando la redistribución y el reconocimiento con la fila correspondiente a la transformación, pues una visión afirmativa de la distribución dificulta el reconocimiento y viceversa.

Este enfoque parece ser el más adecuado para aplicar al caso colombiano, marcado por múltiples injusticias de distribución y reconocimiento, pues pretende lograr cambios

sustanciales, transformando la realidad. Ahora bien, por tratarse de un modelo pensado para sociedades “bien ordenadas”, puede enfrentar diferentes retos en su aplicación, pues en un contexto como el colombiano, en el que se deben atender tantos requerimientos, parece difícil pensar en transformaciones a corto plazo.

Lo anterior nos permite evidenciar también que el enfoque exclusivamente correctivo de la justicia no sería suficiente para lograr justicia de género, pues dicho enfoque respondería más a un modelo de administración de justicia afirmativo que mediante acciones afirmativas busca superar los estereotipos de género y la subsunción de unos delitos en otros, por ejemplo. Sin embargo, este enfoque afirmativo puede dejar intactos imaginarios y construcciones culturales relacionadas con la oposición binaria de lo masculino a lo femenino en un plano jerárquico y universalista. Por ello, la justicia correctiva debe articularse a un enfoque de distribución y reconocimiento transformador, que contribuya a cambiar las relaciones de poder, los símbolos disponibles sobre lo masculino y lo femenino, los conceptos normativos y las instituciones.

Este enfoque transformador pasa entonces, en un caso como el de El Salado, por la necesidad de, no solo regresar a las víctimas al estado en que se encontraban antes de los hechos de violencia, en términos económicos, sino a un estado de distribución justa de cargas y beneficios. Dicho estadio justo, pasa por ejemplo, por el impulso a la siembra y procesamiento del tabaco y de otros alimentos por parte de los pobladores del corregimiento, por la conversión del corregimiento en municipio, la promoción de la organización social y comunitaria de la población y en términos de género se traduce en la entrega de títulos de propiedad sobre la tierra a las mujeres y el otorgamiento de herramientas para que se restablezcan sus liderazgos comunitarios, entre otros. En términos de reconocimiento, pasa por la superación de la asociación estigmatizante de los pobladores del municipio con grupos armados, en especial de las mujeres y por la reivindicación de que las relaciones afectivas de las mujeres del corregimiento no justifican ningún tipo de violencia ejercida en su contra y de que, los grupos armados o los sectores dominantes, no pueden atribuirse control alguno sobre la vida afectiva y la sexualidad de las personas.

Finalmente, cabe señalar que para lograr una justicia de género, no basta una justicia correctiva, distributiva y de reconocimiento. Estos tres enfoques deben reconocer la existencia de múltiples intersecciones de discriminación y violencia que afectan a las personas. A continuación desarrollaré los anteriores presupuestos a la luz del caso de El Salado.

1.9.4 Articulando las perspectivas jurídicas y teóricas: materializando la justicia de género

A la luz del análisis del caso de El Salado, la forma en que se pueden articular la justicia como corrección, como reconocimiento y como distribución es, por lo menos: i) superando las barreras de acceso a la administración de justicia que existen en virtud del género; ii) mediante una administración de justicia eficiente⁷⁴; iii) reconociendo las intersecciones de violencia y discriminación en razón del género, la clase, la raza y la etnia; y iv) reparando a las víctimas, desde un enfoque transformador. A continuación me referiré a estos asuntos, relacionándolos con lo ocurrido en el caso de El Salado.

a. Superación de las barreras de acceso a la administración de justicia

Un análisis desde una perspectiva de género evidencia que existen contextos que pueden provocar o facilitar la comisión de determinados crímenes. Esto ocurre porque la construcción cultural de las diferencias sexuales y de género, da lugar a relaciones desiguales de poder entre los individuos que se ejercen algunas veces de manera explícita y violenta y otras, mediante la imposición de obstáculos que parecen ocultarse en la cotidianidad de las relaciones sociales y jurídicas.

⁷⁴ Una administración de justicia eficiente no es requisito exclusivo para lograr justicia de género. En general es un requisito para lograr justicia caso a caso y debería garantizarse para todos y todas. Ahora bien, en un contexto como el colombiano, marcado por la impunidad, las demoras en los procesos y la falta de cobertura nacional, una administración de justicia eficiente se convierte en un requisito indispensable para hablar de justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos marcados por la ocurrencia de hechos constitutivos de violencia de género.

Uno de los principales problemas para lograr justicia desde un enfoque de género, son las innumerables barreras institucionales y sociales a las que se enfrentan las mujeres para acceder a la administración de justicia. Estas barreras tienen una dimensión de género, pues se relacionan con los símbolos culturalmente disponibles de lo masculino y lo femenino y se traducen en relaciones desiguales e injustas con respecto de las mujeres y de lo femenino, que hacen que para ciertas personas sea más difícil acceder a la administración de justicia que para otras. Por ello, la justicia de género requiere superar las barreras de acceso a la administración de justicia, marcadas por los estereotipos y las desigualdades materiales y simbólicas que dificultan el acceso y permanencia en los procesos judiciales.

Entre las barreras de acceso se cuentan:

- La falta de información y consciencia de los derechos y de las conductas que constituyen delitos.
- La estigmatización y las cargas procesales que revictimizan a quienes son víctimas de delitos como la violencia sexual o la tortura y los estereotipos relacionados con las víctimas de determinados delitos⁷⁵.
- La culpabilización de las víctimas de delitos como la violencia sexual⁷⁶.
- La falta de información sobre los mecanismos de exigibilidad de los derechos y las formas como se puede activar la cadena de justicia.
- Las dificultades económicas para participar y mantenerse en un proceso.

⁷⁵ La mesa de seguimiento al auto 092 identificó en su cuarto informe que uno de los patrones discriminatorios y estereotipos de género en los administradores de justicia, consiste en que “los funcionarios culpan a las víctimas de propiciar la violencia [sexual] por haberse vestido de una manera determinada o por ejercer la prostitución”. Al respecto, la mesa de seguimiento presenta el testimonio de una víctima de violencia sexual por parte de grupos paramilitares, que señala: “hay hombres que son muy machistas, lo que dicen es: ‘¿Quién las manda a vestirse así?, así no se visten las mujeres; las mujeres decentes se tienen que vestir no sé cómo’ [...]. Uno cuenta para desahogarse y lo que hacen es señalarlo a uno. [...] La justicia en Colombia no sirve para nada, porque creen más a los que hicieron que a nosotras que fuimos las víctimas. Nunca ponen en tela de juicio lo que ellos dicen, sino lo que nosotras decimos” (Mesa del Auto 092, 2011:45)

⁷⁶ De acuerdo con Amnistía internacional en Colombia persisten actitudes sociales que culpan a las mujeres y a las niñas en lugar de al autor de los abusos. En uno de los testimonios recolectados por AI se señala: “en el caso de mi compañera es la sociedad que está diciéndole a la niña ‘hija de la violada’. Lastiman a nuestros hijos cuando eso lo sabe la sociedad, nos discriminan y prácticamente nos llevan como culpables. La sociedad cree que la culpable fue la mujer” (Amnistía Internacional, 2011).

Estas barreras están marcadas por injusticias de distribución y de reconocimiento, pues la falta de recursos económicos y simbólicos que otorgan respetabilidad, autoridad o prestigio, son las que permiten que estas barreras existan⁷⁷. De modo que, la discriminación basada en el género, especialmente cuando se cruza con la discriminación basada en la clase, constituye una barrera de acceso a la administración de justicia.

En este sentido, para hablar de justicia de género, es necesario que se superen estas barreras y que el Estado proporcione los recursos necesarios, sean simbólicos o materiales, para que no se existan obstáculos de acceso a la justicia.

En el caso del El Salado, esto comprende, por ejemplo, el proporcionar información sobre los derechos de las víctimas, más allá de las medidas asistenciales prestadas por el Estado y las empresas privadas y sobre las conductas constitutivas de delitos, como la servidumbre forzada a la que se vieron sometidas las mujeres; sancionar la estigmatización de las víctimas y sus comunidades, en especial por parte de funcionarios públicos⁷⁸; tomar las medidas del caso para superar los estereotipos relacionados con la comisión de determinados delitos; y garantizar los recursos simbólicos y económicos necesarios para que las víctimas de violencia de género puedan acceder y mantenerse en la cadena de justicia.

⁷⁷ Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia conocida como “Campo Algodonero” señaló que “los comentarios efectuados por funcionarios en el sentido de que las víctimas se habrían ido con su novio o que tendrían una vida reprochable y la utilización de preguntas en torno a la preferencia sexual de las víctimas constituyen estereotipos. De otra parte, tanto las actitudes como las declaraciones de los funcionarios demuestran que existía, por lo menos, indiferencia hacia los familiares de las víctimas y sus denuncias. (...) De otro lado, al momento de investigar dicha violencia, ha quedado establecido que algunas autoridades mencionaron que las víctimas eran “voladas” o que “se fueron con el novio”, lo cual, sumado a la inacción estatal en el comienzo de la investigación, permite concluir que esta indiferencia, por sus consecuencias respecto a la impunidad del caso, reproduce la violencia que se pretende atacar, sin perjuicio de que constituye en sí misma una discriminación en el acceso a la justicia. La impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia (González y otras vs. México “Campo Algodonero”, 2009).

⁷⁸ En un taller con funcionarios y funcionarias del sector salud en el que participé en marzo de 2011, una funcionaria de la secretaría de salud del Carmen de Bolívar, afirmó, en frente de delegados del Ministerio de la Protección Social, que cuando ocurrió la masacre del El Salado, muchas personas en el Carmen de Bolívar, incluida ella, sintieron algo de tranquilidad, pues los guerrilleros que allí vivían habían cometido muchas atrocidades. Resulta sorprendente que más de diez años después de ocurrida la masacre y pese al reconocimiento público de las atrocidades allí cometidas, estas ideas permanezcan en el imaginario colectivo. Pero sorprende aún más que ninguna persona de las participantes en el taller, a diferencia mía, se hubiese pronunciado al respecto, incluyendo a los funcionarios del Ministerio de la Protección Social. Es importante que el Estado, en todos sus niveles, tome las medidas necesarias para que este tipo de conductas no se repitan, como paso fundamental para la justicia.

b. Una administración de justicia eficiente

La justicia como principio jurídico, incluye el derecho al acceso a la administración de justicia, el cual pretende materializar el primero y dotarlo de herramientas para su efectividad. Por esta razón, cuando se habla de lograr justicia, en particular, justicia correctiva, dicha aspiración pasa necesariamente por el ejercicio del derecho a la administración de justicia⁷⁹.

Sobre el derecho a la administración de justicia, Onu Mujeres señala que los principales obstáculos que enfrentan las mujeres al acceder a los sistemas judiciales son “por un lado, [que] deben superar las arraigadas barreras sociales que las disuaden de hablar y denunciar su caso. [Por otro, que] la falta de capacidad de los sistemas judiciales se traduce en tribunales alejados, alto costo de los trámites y personal de servicios carente de sensibilidad con respecto a las necesidades de las mujeres”. Esta situación, que constituye una realidad alrededor del mundo, se agrava en Colombia en razón del conflicto armado interno y de la altísima congestión judicial a la que deben enfrentarse quienes acuden al sistema de administración de justicia.

Esto genera que muchos casos nunca sean denunciados y que otros sean abandonados en algún punto de la cadena de justicia. De tal suerte que “sólo una pequeña fracción del total de denuncias presentadas ante el sistema se traduce en una condena o en algún tipo de desenlace justo para las mujeres. Incluso si el litigio resulta en una condena justa, la falta de fiscalización con frecuencia significa que la sentencia queda sin efecto” (ONU Mujeres, 2011). Respecto de este punto, ONU Mujeres señala que es cierto que la falta de capacidad de los sistemas de administración de justicia afectan a todos los usuarios, pero también lo es que la discriminación de género incrementa las dificultades a las que se ven abocadas las mujeres, lo que hace además que “las mujeres se sientan desalentadas a la hora de

⁷⁹ De acuerdo con la Corte Constitucional, “el acceso a la administración de justicia implica [...] la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Sin embargo, la función en comento no se entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados” (C-037, 1996).

enfrentar esta agobiante cadena de instituciones y procesos cuando deciden acceder al sistema formal de justicia” (ONU Mujeres, 2011).

De acuerdo con la Corte Constitucional colombiana, el derecho a la administración de justicia no implica solamente su consagración legal o constitucional, sino su materialización, lo que implica a su vez que i) contribuya a la prevención de nuevos hechos de violencia; ii) garantice el derecho a un recurso efectivo y a una investigación seria, oportuna y eficaz de los hechos; iii) contribuya al esclarecimiento de los hechos; iv) valore los delitos en función de su gravedad; v) lleve ante la justicia y sancione a los responsables; vi) se realice en plazos razonables; y vii) responde a un enfoque diferencial en razón del género.

Ahora bien, la precaria justicia administrada hasta ahora en el caso de El Salado no ha contribuido a la prevención de nuevos hechos de violencia. Un claro ejemplo son los hechos de violencia cometidos por grupos paramilitares en el caribe colombiano con posterioridad a la masacre de El Salado narrados en los informes del GTMH “Mujeres y Guerra. Víctimas y resistentes en el caribe colombiano” y “La masacre de Bahía Portete. Mujeres Wayuu en la mira”. Tampoco ha contribuido al esclarecimiento de los hechos, a sancionar a los responsables en plazos razonables, ni ha incluido un enfoque diferenciado en función del género, como se presenta a continuación.

i. Prevención

En principio, la administración de justicia se activa cuando se comete un hecho injusto. Sin embargo, uno de sus propósitos es prevenir la ocurrencia de hechos similares. Esto se logra mediante la disuasión, que construye la idea de que cometer un delito resulta costoso en términos de aplicación de justicia en contra del autor, uno de los objetivos de las sanciones penales. Esto implica que el adecuado funcionamiento de la cadena de justicia, es un componente de la prevención de futuros hechos de violencia. Además de lo anterior, la administración de justicia debe estar orientada a eliminar los factores de riesgo que permitieron que los hechos de violencia ocurrieran.

Sin embargo, la administración de justicia en Colombia no cumple una labor de prevención, un claro ejemplo es lo ocurrido en el caso de El Salado, donde la cadena de justicia no avanzó en la respuesta a lo acontecido en la primera masacre, ni se activó ante las advertencias respecto de la segunda.

Un enfoque de justicia comprensivo, debe entonces ser efectivo para la prevención de futuros hechos de violencia, en este orden de ideas, debe castigar efectivamente a los responsables de hechos de violencia de género conocidos por la administración de justicia, en un intento por disuadir a otros, y debe transformar las relaciones que permiten la existencia de factores de riesgo específicos para este tipo de violencia.

Sin embargo, este enfoque no fue efectivo en el caso de El Salado, al punto que los paramilitares continuaron operando en la región de los Montes de María y en general en el caribe colombiano. De acuerdo con el GTMH, en el territorio denominado Montes de María, entre 1996 y 2003, los paramilitares cometieron 42 masacres, dentro de ellas por lo menos cuatro ocurrieron después de la masacre de El Salado, esta son las masacres de Mampuján (2000), Ovejas (2000), Colosó (2000) y Chengue (2001). Además, el GTMH relaciona algunos otros hechos de violencia ocurridos en el caribe colombiano con posterioridad a la masacre de El Salado, estos son, el reinado de belleza en Libertad (2003) en el que el paramilitar conocido como ‘El Oso’ abusó sexualmente de por lo menos tres de las candidatas, la pelea de boxeo de homosexuales y mujeres en Alto de Julio (2003), el caso de las mujeres rapadas en Rincón del Mar (2004) y la masacre de Bahía Portete (2004). Esto evidencia que, al no ser sometidos a la justicia los responsables de los hechos ocurridos en El Salado, no hubo un efecto disuasivo o de prevención de otros hechos de violencia.

Esta situación resulta especialmente relevante en términos de justicia correctiva y su relación con el reconocimiento, pues evidencia que los hechos constitutivos de violencia de género, no fueron atendidos de manera oportuna por el aparato administrador de

justicia, permitiendo en este caso que nuevas conductas constitutivas de violencia de género, ocurriesen.

ii. Acceso a un recurso judicial efectivo e investigación seria, oportuna y eficaz de los hechos

El derecho a la justicia, implica que las personas tengan acceso a un recurso judicial efectivo y a la investigación seria, oportuna y eficaz de los hechos ocurridos. En el caso de El Salado, las personas que han accedido a la administración de justicia lo han hecho a través de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que acompañan y representan judicialmente a las víctimas sobrevivientes. De no ser por dicho acompañamiento tal vez el caso no habría logrado la visibilización y atención que hoy tiene⁸⁰. En todo caso, pese al acompañamiento especializado, las víctimas no han logrado la garantía del derecho al acceso a un recurso efectivo, tal como lo reconoció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al decidir la admisibilidad de este caso:

56. (...) En el presente caso, las perspectivas de efectividad de la investigación judicial no resultan equivalentes a las de un recurso que necesariamente deba ser agotado antes de recurrir a la protección internacional de los derechos humanos. Según ha establecido la Corte Interamericana, para que un recurso pueda ser considerado como efectivo debe ser capaz de producir el resultado para el cual fue concebido.

57. La Comisión nota que habiendo transcurrido más de nueve años de ocurridos los hechos materia del reclamo, sólo se habría establecido la responsabilidad penal de 15 civiles. (Masacre y desplazamiento forzado de los Montes de María - Colombia, 2009).

Así, pese a ser este uno de los casos más documentados judicial y extrajudicialmente, no se ha garantizado el acceso a un recurso efectivo de las víctimas. Antes bien, los hechos continúan en la impunidad y no han sido investigados de manera adecuada. De modo que

⁸⁰ Sobre este punto, cabe anotar que las organizaciones que representan a las víctimas en este caso han dividido su trabajo respecto de la representación judicial de las víctimas, de modo que es una organización de mujeres quien lleva los casos de violencia sexual. Esto ha permitido mayor especialidad de las abogadas a cargo, pero puede lanzar el mensaje equivocado de que la violencia sexual es un asunto de mujeres, que por lo tanto es tramitado por organizaciones de mujeres, sustrayendo este asunto de una estrategia integral de trámite del caso.

el primer paso para hablar de justicia en su ámbito correctivo, esto es, acceder a un recurso efectivo, no se materializa en el caso de El Salado⁸¹.

Además de contar con un recurso efectivo, para materializar la justicia correctiva es necesario que el Estado cumpla con la obligación de investigar las graves violaciones a los derechos humanos. Al respecto, diferentes tribunales internacionales han señalado que “se trata de un deber jurídico propio y no [de] una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa” (González y otras vs. México "Campo Algodonero", 2009).

La obligación de realizar una investigación completa y efectiva, implica que se deben adoptar las acciones necesarias para la determinación y sanción de los responsables y para evitar que los presuntos responsables continúen vinculados con el poder, entre otros. Sin embargo, en este caso no se ha realizado una investigación penal seria, imparcial y efectiva, como se evidencia en las dificultades para iniciar las investigaciones, en el hecho de que las investigaciones no dan cuenta de las fechas en las cuales realmente ocurrieron los hechos, en el número de víctimas de los delitos perpetrados relacionadas en las providencias judiciales, en el número de victimarios identificados y procesados judicialmente y en la falta de reconocimiento de delitos ocurridos que constituyen violencia de género. Así, por ejemplo, no se ha podido establecer con certeza si una de las mujeres ejecutadas en la cancha del pueblo estaba o no embarazada y no se ha establecido con claridad los delitos de los que fueron víctimas las mujeres, así como las situaciones de modo, tiempo y lugar de los mismos.

iii. Esclarecimiento de los hechos investigados

Relacionado con una investigación seria, oportuna y eficaz, se encuentra el derecho de las víctimas a que se esclarezca lo sucedido. Sin embargo, para el caso de El Salado, la investigación no se ocupa de establecer los hechos, las fechas ni los lugares donde ocurrieron, como tampoco los *modus operandi* de los victimarios. La precariedad en este

⁸¹ En este punto cabe destacar que así como no se materializa en el caso de El Salado, tampoco en otros casos de violencia socio política en Colombia. Sin embargo, la amplia documentación de este caso, son una excusa menos para ello.

sentido hace que solamente 10 años después, gracias al informe del GTMH sea más o menos claro lo ocurrido y se puedan relacionar los patrones de violencia con los hechos ocurridos a lo largo de los Montes de María.

Respecto del marco temporal investigado, las decisiones se limitan a lo ocurrido el 18 de febrero, desconociendo que no todos los hechos ocurrieron ese día y negando las relaciones existentes entre los hechos ocurridos ese día en el corregimiento de El Salado y los días que lo antecedieron, así como con el recorrido emprendido por los paramilitares en su llegada y en su huida.

Sobre la identificación de las víctimas existen varias deficiencias. La primera de ellas es que aunque el proceso se limita a investigar los hechos ocurridos el 18 de febrero, se relacionan víctimas de hechos cometidos antes y después de esta fecha, lo que no contribuye a esclarecer la verdad de los hechos y demuestra que la investigación no se ha llevado a cabo de forma seria.

Por otra parte, las providencias judiciales solo se reseñan como víctimas a las personas asesinadas, excluyendo delitos graves como la privación de la libertad, el maltrato, la violencia sexual, y los trabajos forzados a los que fueron sometidas algunas mujeres (GTMH, 2009).

En materia de garantía del derecho a la verdad, se han dado los más grandes pasos. Esto no se debe a la acción decidida de la administración de justicia, sino al trabajo del Grupo de Memoria Histórica de la CNRR, que documentó de manera completa por primera vez el caso de El Salado, haciendo énfasis y reconociendo los hechos constitutivos de violencia de género. La documentación hecha por el GTMH constituye un importante aporte a los procesos judiciales y seguramente contribuirá al logro de la justicia. Sin embargo, resulta contradictorio que el principal avance en materia de garantía de los derechos, reconocimiento de los hechos de violencia de género y de justicia, esté dado por un mecanismo no jurisdiccional.

iv. Valoración igualitaria de los delitos cometidos

Además del derecho a contar con una investigación seria, oportuna y eficaz que dé cuenta de los hechos ocurridos, desde una perspectiva de género es preciso que los fiscales, jueces y magistrados reconozcan la inexistencia de jerarquías de delitos en la tipificación, en función del género de las víctimas.

Una práctica común que impide acceder a una justicia que supere las relaciones desiguales de poder entre los géneros, es negar la existencia de ciertos delitos u ocultarla en otros considerados más graves. En el caso de El Salado, por ejemplo, pese a reconocerse explícitamente la existencia de hechos constitutivos de violencia de género, las decisiones judiciales se han limitado a investigar y judicializar a los pocos responsables relacionados en los procesos por delitos como homicidio y conformación de grupos paramilitares, no así por violencia sexual o esclavitud, pese a que estos hechos son narrados en las mismas sentencias⁸².

Hacer justicia de género implica superar estas aproximaciones a los delitos y reconocer la existencia de crímenes que constituyen violencia de género, cuando estos han ocurrido, en los procesos judiciales. Subsumir los delitos en otros considerados de mayor gravedad, solo contribuye a afianzar los imaginarios de acuerdo con los cuales la violencia de género es menos grave que otros tipos de violencia, razón por la cual aun cuando se pruebe su ocurrencia, no habrá consecuencias jurídicas para ello.

En el caso de El Salado, las providencias judiciales se limitan a referirse a homicidio agravado, concierto para delinquir y conformación de grupos paramilitares, dejando de lado conductas que constituyen crímenes graves que no fueron investigados y que van desde los más evidentes, como el desplazamiento forzado y que pasan por otras tantas

⁸² Esta práctica es tan común en Colombia, que la Corte Constitucional la reconoció como una de las causas de la invisibilidad de la violencia sexual en el marco del conflicto armado: “El eventual homicidio de la víctima y su registro como tal invisibiliza los demás actos criminales de contenido sexual cometidos antes del asesinato – por la omisión por parte de las autoridades médico-legales y judiciales en adelantar los procedimientos necesarios para confirmar que las víctimas de homicidio han sido víctimas, además, de actos de violencia sexual, hace que este tipo de crímenes quedan ampliamente sub-registrados y subsumidos bajo la categoría de “homicidios”, o en algunos pocos casos como “tortura” (Auto 092, 2008).

conductas que fueron narradas por la población sobreviviente como la servidumbre forzada y la violencia sexual:

En el caso de una de las mujeres sobrevivientes de los hechos, su declaración detalla la forma espantosa como fue violada, y aun cuando la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación se hizo eco de su doloroso relato en la decisión del 7 de marzo del 2001, sin embargo no formuló acusación por el hecho de la violación sexual (GTMH, 2009).

Esta situación contribuye a la construcción del género como un concepto binario que opone lo masculino a lo femenino en un plano jerárquico, de tal suerte que los delitos tradicionalmente cometidos contra los hombres o asociados a lo masculino, como las ejecuciones extrajudiciales y las torturas, son los delitos mencionados en las providencias judiciales e investigados, mientras que los delitos asociados a lo femenino son subsumidos en los primeros o sencillamente invisibilizados. Con esto se evidencia la forma como las diferencias binarias entre lo masculino y lo femenino construyen relaciones sociales marcadas por ejercicios de poder desiguales. Siguiendo a Joan Scott, es posible afirmar que esta jerarquización estaría marcada por los símbolos disponibles de lo masculino y lo femenino y las interpretaciones de los significados de estos símbolos.

v. *Llevar ante la justicia y sancionar a los responsables*

Otro elemento fundamental de una adecuada administración de justicia es llevar efectivamente ante el sistema de administración a los presuntos responsables e imponer sanciones proporcionales y adecuadas por los hechos cometidos. Sin embargo, para el caso del El Salado, las decisiones de la justicia relatan hechos ocurridos que constituyen crímenes graves, pero no formulan acusación ni establecen condenas basadas en todos los hechos (como consecuencia por una parte de la jerarquización de delitos y por otra del inadecuado funcionamiento de la administración de justicia):

La decisión del 7 de marzo del 2001 no explica las razones por las cuales no se formuló acusación sobre los delitos aquí indicados, aun cuando, de un lado, en varios apartes de la decisión se hace mención a conductas que podían ser calificadas como tales, y del otro, si se sigue la estructura de

imputación aplicada por la Fiscalía respecto del homicidio múltiple, es razonable considerar que cabía una imputación similar en relación con las demás conductas delictivas (GTMH, 2009).

Lo anterior impide llevar ante la justicia y castigar a los responsables por las conductas ocurridas, pues las acusaciones y condenas se basan en relatos parciales. Así, los obstáculos que implica la precaria investigación de los hechos realizada, se relacionan con los delitos en efecto imputados a los pocos paramilitares condenados por estos hechos y con lo poco que se ha avanzado en materia de establecer los nexos de la Fuerza Pública con lo ocurrido.

De tal suerte que, pese a las diferentes decisiones judiciales, puede afirmarse que estas no han contribuido a hacer justicia, pues no han permitido aclarar la verdad de lo sucedido en términos de modo, tiempo y lugar y menos aún han contribuido a dismantelar las estructuras que posibilitaron la ejecución de la masacre, esto porque no fue asumida una investigación seria tendiente a establecer la participación de agentes del Estado en los hechos ocurridos.

En este punto resulta también fundamental establecer, el papel que desempeño la violencia de género en el marco del “repertorio de terror” que constituyó la masacre. En este orden de ideas, es necesario establecer si la violencia de género fue cometida, en términos del GTMH, como estratégica en si misma, como parte de un acto estratégico o de forma oportunista. Aunque los relatos dan pistas al respecto y la sanción penal no debería ser muy distinta en función de dicha clasificación, establecer esto permitiría entender de mejor manera el papel de la violencia de género en el marco de las estrategias de terror implementadas por estos grupos.

vi. Adelantar las investigaciones en un tiempo razonable

Un elemento importante para una adecuada administración de justicia es que los procesos se adelanten en plazos razonables. Si bien es cierto, que hechos tan graves como la

masacre de El Salado, requieren de una amplia investigación y que Colombia padece de una grave congestión judicial, a simple vista no parece razonable que después de 11 años, los procesos penales no hayan avanzado. Al respecto la Corte Interamericana ha señalado:

216. Este Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite de procesos internos, sino éste debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables.

217. Ciertamente la Corte ha establecido, respecto al principio del plazo razonable contemplado en el artículo 8.1 de la Convención Americana, que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales (Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, 2005).

Estos criterios pueden ser aplicados al caso de El Salado, y nos permiten concluir que en este caso las investigaciones han excedido, a todas luces, un plazo razonable. En principio, que las investigaciones excedan el plazo razonable, es una carga para las víctimas de todo tipo de violencia, sin embargo, es posible señalar que tiene efectos desproporcionados sobre la vida de las mujeres víctimas de violencia de género, pues les implica estar involucradas en la cadena de justicia y enfrentar los estigmas y estereotipos asociados a los delitos de los que son víctimas por periodos excesivamente prolongados de tiempo. Lo que, sumado al hecho de que han debido asumir nuevos roles después de los eventos de violencia, asigna una carga desproporcionada en sus vidas.

vii. Administrar justicia con enfoque diferenciado

Una administración de justicia eficiente, orientada a lograr justicia de género, requiere que se reconozca que la violencia afecta de manera desproporcionada a las personas en virtud del género. Conductas idénticas pueden ser usadas con propósitos diferentes en función del

género o tener consecuencias diferentes en las vidas de las personas. Esto no debe ser obviado por el aparato administrador de justicia.

Hablar de enfoque de género en el ámbito de políticas para generar una transición implica asumir una perspectiva que parte del reconocimiento de que, aun cuando mujeres y hombres son víctimas de violaciones a los derechos humanos, el daño sufrido y la forma como se asume por unos y otras es diferente y puede afectar más a éstas que a aquellos, debido a las condiciones particulares en las que se encontraban antes del periodo de violencia o de represión política. Estas condiciones imponen además obstáculos de acceso a la justicia. Esto se explica por múltiples motivos, entre otros, por las relaciones de subordinación y las estructuras sociales, económicas y culturales que tienden, en nuestras sociedades, a relegar a la mujer en su papel como ciudadanas (Guzmán & Upimny, s.a:16).

Una administración de justicia que reconozca las formas de violencia de género, puede visibilizar las violencias que afectan exclusiva, mayoritaria o desproporcionadamente a las mujeres, así como reconocer que hay situaciones estructurales que propician ciertos tipos de violencia, en este caso, las relaciones desiguales de poder entre los géneros. Este es un paso para lograr justicia de género⁸³.

Una administración de justicia con un enfoque diferencial de género, debe además propender por revertir los símbolos disponibles de lo masculino y lo femenino, que asocian lo primero con ideas de superioridad y universalidad, por ejemplo, que “la participación en el proceso judicial no implique [para la víctima] juicios contra su propio comportamiento, dudas sobre su historia y en general nuevas formas de victimización” (Mesa del Auto 092, 2011). Esto implica la superación de los patrones estereotipados, o conceptos normativos en términos de Scott, que reproducen los funcionarios judiciales.

⁸³ Amnistía Internacional relaciona al respecto algunos avances, así “la Fiscalía General de la Nación ha desarrollado una metodología específica para investigar la violencia contra mujeres a manos de las partes del conflicto armado que supuestamente incluye un enfoque psicosocial (Resolución 0266 de 2008 y Memorando 0117 de 2008). También ha impartido formación especializada sobre género a fiscales y otros funcionarios y, mediante la Resolución 3788 de 2009, creó un comité de género para facilitar la cooperación interinstitucional. La Corte Constitucional también pidió al fiscal general la creación de un subgrupo de tres fiscales que se especializarían en casos de violencia sexual contra mujeres. El Ministerio de Protección Social, así como otras instituciones sociales del Estado, ha adoptado asimismo medidas para combatir el enfoque discriminatorio, condenatorio o estereotipado que adoptan muchos funcionarios en su trato con sobrevivientes de la violencia sexual. Además, el vicepresidente Angelino Garzón ha expresado en varias ocasiones su compromiso de abordar efectivamente el problema, a cuyo fin ha creado varios grupos de trabajo e iniciado una serie de estudios con el fin de mejorar la respuesta del Estado a los casos de violencia sexual” (Amnistía Internacional, 2011).

viii. A modo de conclusión

En oposición al panorama de precariedad de la administración de justicia esbozada, la justicia de género requiere de una administración de justicia eficiente. Esto quiere decir que se requiere una administración de justicia que desde una perspectiva de género, garantice los derechos de las víctimas, que permita mediante el acceso a un recurso efectivo la realización de una investigación seria, orientada a establecer judicialmente la verdad de los hechos, en tiempos razonables, a enjuiciar y castigar penalmente a los responsables directos e indirectos y a reparar a las víctimas. La investigación y las condenas a los responsables, deben estar además basadas en todos los delitos ocurridos y no sólo en aquellos considerados por los funcionarios de turno como más graves.

Lo anterior es un requisito ineludible para la justicia de género. Si quienes han sido víctimas de estos tipos de violencia deben enfrentarse a una administración de justicia como la que han padecido las víctimas de El Salado, no se garantiza la efectividad de la justicia y no es posible emprender el camino hacia una justicia que transforme relaciones desiguales de poder, pues la impunidad contribuye a afianzar la idea de que ciertos tipos de violencia pueden ocurrir sin que el Estado tome medidas al respecto, de modo que reproduce y permite que sigan ocurriendo estos hechos.

Ahora bien, algunos de los requisitos señalados, son necesarios no sólo para el logro de la justicia de género, sin embargo, sin ellos, este tipo de justicia no es posible.

c. Reconocimiento de la intersección de violencia y discriminación en casos de mujeres indígenas, negras y pobres.

Un aspecto necesario para hacer justicia de género, más allá de los procesos de administración de justicia, es considerar la intersección de la violencia y discriminación

que agrava la situación de mujeres en cuyo caso existe alguna causal de discriminación adicional en razón de la raza, la etnia o la clase.

Para la señora Rosendo Cantú denunciar los hechos implicó cruzar todas las barreras que sufre una mujer indígena con el único fin de procurar justicia, pero una vez superadas se encontró con un sistema de justicia discriminatorio y revictimizante, siendo “sometida a diligencias intimidatorias y agresivas que terminaron ocasionándole un daño adicional a su integridad psicológica”. La presencia de militares en la zona tras la denuncia le generó miedo intenso y provocó que su comunidad le retirase el apoyo inicialmente brindado (...).

En cuanto a la obligación específica de sancionar la violencia contra la mujer, la Comisión señaló que recibió “información sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a la justicia, generalmente relacionados con la exclusión social y [l]a discriminación étnica”. Dichos obstáculos pueden ser particularmente críticos, ya que representan formas de “discriminación combinadas”, por ser mujeres, indígenas y pobres. Particularmente, en casos de violación sexual contra mujeres indígenas, los investigadores frecuentemente rebaten las denuncias, hacen recaer la carga de la prueba sobre la víctima, y los mecanismos de investigación son defectuosos, e incluso, amenazadores e irrespetuosos (Rosendo Cantú y otra Vs. México, 2010).

Un enfoque de justicia que articule la corrección, la redistribución y el reconocimiento, debe partir de la base de que la discriminación dada por cuestiones de género se puede entrecruzar con la discriminación basada en la clase, la edad, la etnia o la raza, haciéndola más gravosa. Así, por ejemplo, una mujer indígena, además de enfrentar las mismas barreras que una mujer mestiza, enfrenta algunas otras, como puede ser el no hablar el idioma en que se administra justicia.

d. Reparaciones

Las reparaciones son una obligación del Estado hacia sus habitantes cuando se ha cometido un hecho injusto y constituye la parte de los mecanismos de justicia que más se centra en las víctimas⁸⁴.

La reparación debe comprender la reparación monetaria y simbólica y las garantías de no repetición, y puede traducirse, por ejemplo en compensaciones individuales, pensiones, oportunidades de educación y capacitación, acceso a servicios de salud y rehabilitación psicológica, medidas de reparación colectiva, así como eventos conmemorativos, disculpas oficiales, entre otros. Estos tipos de reparación pueden agruparse bajo las exigencias de:

- *Restitución e indemnización*
- *Rehabilitación y reintegración*
- *El reconocimiento simbólico*
- *Garantías de no repetición*

Ahora bien, las reparaciones deben trascender su concepción jurídica, para hacer efectivamente justicia de género. Al respecto cabe destacar lo establecido por la Corte Interamericana en el caso “Campo Algodonero”, de acuerdo con lo cual las reparaciones “deben orientarse a identificar y eliminar los factores estructurales de la discriminación” y en ese marco, transformar las desigualdades de género que dan lugar a la discriminación y a la violencia.

En ese orden de ideas, las reparaciones deben “incluir no sólo a las víctimas directas, sino también a miembros de la familia y se deben tomar en cuenta los problemas actuales que enfrentan las mujeres, como lidiar con las consecuencias materiales del estigma” (ONU Mujeres, 2011). Además, para que la transformación sea efectiva se debe garantizar que la

⁸⁴“La noción del derecho a la reparación se enmarca dentro de la legislación en materia de interposición de recursos y abarca dos aspectos, de procedimiento y sustantivo. Desde el punto de vista del procedimiento, los recursos son procesos mediante los cuales los órganos competentes, judiciales o administrativos, atienden y evacúan las reclamaciones admisibles de las víctimas. Desde el punto de vista sustantivo, se entienden por recursos el resultado de dichos procedimientos y, más latamente, las reparaciones otorgadas. La legislación en materia de reparaciones puede tener fines individuales y sociales, como la justicia correctiva, la disuasión, la indemnización y la justicia restaurativa” (Manjoo, 2010).

reciban quienes tienen derecho a ello y deben estar orientadas al empoderamiento económico, para que las mujeres puedan romper patrones de discriminación y violencia.

Finalmente, las reparaciones deben estar orientadas a hacer memoria de lo sucedido y a esclarecer la verdad de los hechos, como medida de reparación,

1.10 Transformación: reconocimiento de las víctimas de violencia de género como sujetos de derechos

Conforme a lo anterior, una propuesta que pretenda hacer justicia de género, debe ocuparse no sólo de la justicia en lo relacionado con los procedimientos y en la relación entre víctimas, victimarios y Estado, sino que debe estar encaminada al logro de justicia social y a materializar exigencias de distribución y el reconocimiento. Un enfoque afirmativo o basado exclusivamente en la igualdad, es por el contrario, limitado:

El problema de este enfoque, como lo observó Nicola Lacey [] es que resulta “inadecuado para criticar y transformar un mundo en que la distribución de bienes está estructurada sobre lineamientos de género”. Supone “un mundo de individuos autónomos que compiten en una carrera o que toman decisiones libremente, lo cual se queda corto frente al hecho de que el hombre y la mujer sencillamente están corriendo carreras diferentes”. El lenguaje de la “igualdad de derechos” refuerza tácitamente la organización básica de la sociedad, la promesa de la modernidad de “ser iguales” a los hombres únicamente le brinda a las mujeres acceso a un mundo ya construido (Charlesworth, 1997: 61).

Esta propuesta la desarrollo, partiendo de las elaboraciones conceptuales realizadas por Uprimny y otros, respecto de las reparaciones con enfoque transformador, pero pretendo señalar que no sólo en materia de reparaciones es necesario incluir una perspectiva de la justicia transformadora, sino que en general, en materia de garantía del derecho a la justicia es necesaria esta perspectiva, para lograr justicia de género. En este punto, articulo la propuesta a las consideraciones de Nancy Fraser sobre redistribución y reconocimiento, de acuerdo con las cuales una justicia transformadora sólo se logra articulando estos dos enfoques.

Esta perspectiva es necesaria en sociedades “bien desordenadas” como la colombiana, es decir, en sociedades “que han enfrentado una crisis política y humanitaria profunda y que ya eran desiguales antes de la crisis humanitaria, sobre todo cuando, como es usual, los procesos de victimización han afectado esencialmente a las poblaciones pobres y excluidas”(Uprimny & Saffón, 2009).

La gran mayoría de las víctimas de crímenes atroces perpetrados en el contexto del conflicto armado pertenece a poblaciones tradicionalmente vulnerables y excluidas. Este es el caso de las mujeres que constituyen el grueso de las víctimas sobrevivientes y han sido además víctimas de violencia de género. De hecho, las mujeres enfrentan riesgos específicos en el contexto del conflicto, y cargas extraordinarias que hacen que afronten una afectación diferenciada y desproporcionada (Guzmán & Uprimny, s.a: 11).

Ahora bien, Uprimny, Saffón y Guzmán restringen este enfoque de justicia a las reparaciones, señalando que en contextos como el colombiano, una perspectiva exclusivamente retributiva de las reparaciones, según la cual las víctimas sean devueltas al estado anterior al de las violaciones, no resulta apropiada, teniendo en cuenta que las víctimas no eran consideradas como ciudadanas en ejercicio pleno de sus derechos antes de los hechos de violencia.

Esta perspectiva restitutiva de las reparaciones parece insuficiente en sociedades que antes de las atrocidades eran en sí mismas excluyentes y desiguales, y cuyas víctimas pertenecían en su mayoría a sectores marginados o discriminados, como es el caso de Guatemala, Perú o Colombia. **En este tipo de contextos, las condiciones estructurales de exclusión y las relaciones desiguales de poder se encuentran generalmente a la base del conflicto y en buena medida explican que sean unos y no otros los sectores sociales victimizados.** Como tal, el enfoque puramente restitutivo de las reparaciones resulta limitado, porque pretende devolver a las víctimas a una situación de vulnerabilidad y carencias. De esa manera, no atiende a los factores estructurales del conflicto, cuya transformación es esencial no sólo para garantizar la no repetición de las atrocidades, sino porque es necesaria la superación de una situación estructuralmente injusta en términos de justicia distributiva (Uprimny & Saffón, 2009).

En el mismo sentido, restringen la respuesta a la justicia distributiva, señalando que esta es la respuesta adecuada para superar situaciones de exclusión y desigualdad que seguramente dieron lugar a la victimización de determinados sectores, pues evita perpetuar situaciones injustas que existían con anterioridad al hecho violento y contribuye a una transformación democrática, “se trataría de repensar la distribución justa de los bienes y las

cargas en esas sociedades en transición de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia” (Uprimny & Saffón, 2009).

Esta perspectiva resulta adecuada para lograr justicia de género pues pretende modificar algunas de las relaciones desiguales de poder que dieron lugar a la comisión de las atrocidades y se articula a la necesidad de retribuir penalmente a los responsables de estos hechos y reparar los daños causados. Por ello, parece más adecuada que un enfoque diferenciado, en términos de Fraser, o que uno basado exclusivamente en la superación de estereotipos en el marco de la administración de justicia.

Dado que las relaciones de poder que buscan ser modificadas son múltiples y heterogéneas, las reparaciones deben incluir distintas dimensiones transformativas. Así, como se mencionó anteriormente, es fundamental que las reparaciones tengan una dimensión transformadora de las relaciones sociales, económicas y políticas que han permitido la exclusión o marginación de la generalidad de las víctimas del acceso a sus derechos y a una ciudadanía plena. Sin embargo, igualmente es importante que las reparaciones tengan una dimensión transformadora de las relaciones de poder que han subordinado o excluido a ciertos tipos de víctimas, tales como las mujeres, los grupos étnicos o los sindicatos, de forma tal que las mismas conduzcan a una reformulación de las situaciones de dominación patriarcal, racial y patronal que han alimentado la exclusión y la violencia en Colombia (Uprimny & Saffón, 2009:38).

Sin embargo, aunque este enfoque parece ser el más adecuado para lograr justicia de género, se restringe a las reparaciones y al logro de la justicia por la vía de la redistribución. Al respecto propongo que para transformar verdaderamente relaciones desiguales de poder, debe articularse a un enfoque de reconocimiento, el cual nos permite acercarnos al derecho de acceso a la justicia más allá de la corrección penal y las reparaciones, en términos de justicia social.

Al respecto, cabe traer a colación las propuestas de Nancy Fraser, de acuerdo con las cuales para lograr una verdadera transformación, se requiere: i. Una reestructuración profunda de las relaciones de producción y ii. Una reestructuración profunda de las relaciones de reconocimiento.

En términos prácticos, lo anterior se traduce en⁸⁵ la necesidad de devolver a los habitantes de El Salado, en términos económicos, no solo a la situación en la que se encontraban antes de la masacre, que era buena para el estándar de la población rural colombiana, sino a un estado de bienestar económico, que pase por la reactivación de las actividades productivas de la población, la implementación de una infraestructura de bienes y servicios de calidad, más allá de los donativos que han recibido de diferentes fundaciones, el funcionamiento de escuelas y centros de salud dotados y de calidad y la pavimentación de la carretera, entre otros. En términos de género, implica empoderar económicamente a las mujeres del corregimiento, reconocer su trabajo en el retorno y en la reconstrucción del municipio y del tejido social, en términos simbólicos y económicos y repararlas desde un enfoque diferenciado y transformador. Significa también, superar la pobreza que actualmente aqueja al corregimiento (de acuerdo con la Fundación Semana, el 94% de la población de El Salado es pobre y de estos, el 63% se encuentra por debajo de la línea de indigencia (Fundación Semana, 2009)).

En términos de reconocimiento, se debe traducir en el establecimiento de la verdad sobre lo ocurrido, incluyendo la verdad sobre los autores materiales e intelectuales y los vínculos de quienes detentaban el poder político y económico en la zona, con lo sucedido. Se debe traducir también en el restablecimiento de los espacios comunitarios y de los liderazgos, especialmente de las mujeres, en la reivindicación de las mujeres como sujetas de derecho y no como arma o territorio de guerra, de que las relaciones afectivas son decisiones individuales y que nadie debe ser violentado por ese motivo, y en la reivindicación de la capacidad de agencia de las mujeres. En materia de reconocimiento, hacer justicia también se traduciría en el reconocimiento El Salado como municipio.

En términos de justicia correctiva, como se señaló, implica que este caso, permita prevenir futuros hechos de violencia de género, además, que los procesos penales, disciplinarios y administrativos, se desarrollen de forma seria, oportuna y eficaz y sancionen de manera

⁸⁵ En este apartado articulo los hallazgos derivados de una visita al corregimiento de El Salado, tres talleres con las mujeres representadas por la CCJ en el caso de la tutela T-045 de 2010 y un taller con funcionarios públicos encargados de la atención en salud de las víctimas sobrevivientes de la masacre de El Salado. Dichos hallazgos son producto de mis apreciaciones como abogada de las víctimas.

efectiva a todas las personas involucradas en los hechos violentos y que se establezca una verdad judicial que dé cuenta de todos los hechos en efecto ocurridos.

6. Conclusiones

Este trabajo constituye un esfuerzo por hacer un análisis desde una perspectiva de género y desde las ciencias sociales, de la forma como operó la violencia de género en un caso de graves violaciones a los derechos humanos, con la pretensión de establecer los mínimos requeridos para lograr justicia con enfoque de género. Ello implicó tomar distancia de mi papel como abogada, pero a su vez, aprovechar las potencialidades que me otorgó conocer de primera mano, como abogada, el caso de El Salado, el corregimiento donde ocurrieron los hechos violentos y a un buen número de víctimas sobrevivientes de la masacre. En este sentido, en este documento las voces de las víctimas aparecen sesgadas por mi interpretación.

Pretendo aportar, como conclusión, más allá de aportes concretos relacionados con el caso de El Salado, una definición de violencia de género que la asume como aquella que se fundamenta en conceptos normativos expresados en instituciones y contruidos sobre los símbolos disponibles de lo masculino y lo femenino y una definición de justicia de género, que la entiende como aquella encaminada a remediar los efectos perjudiciales de actos de violencia de género -en sus múltiples manifestaciones-, con el fin último de transformar las relaciones desiguales de poder, las normas y las instituciones contruidas a partir de los símbolos que representan lo masculino y lo femenino en un plano jerárquico y que otorgan significados superiores y universales a lo asociado a lo masculino. En esta medida, la conclusión de este escrito me ubica como una abogada que, desde una perspectiva de género, pretende aportar a los debates por la justicia de las víctimas.

Finalmente, quisiera agregar que, aunque este escrito se enfoca en las mujeres *víctimas* de violencia de género, en un caso de graves violaciones a los derechos humanos, la mayoría de las mujeres sobrevivientes en este caso, así como de muchos otros eventos violentos ocurridos en Colombia, han asumido, junto con las cargas desproporcionadas que les asigna el conflicto armado, el liderazgo de sus comunidades en asuntos diversos y el ejercicio de una ciudadanía plena y participativa. Esto ha contribuido a reconstruir el tejido

social, a mantener los lazos de solidaridad y a evidenciar la capacidad de agencia de las mujeres en contextos de exclusión, discriminación y violencia.

7. Anexos

Anexo A. Caracterización del corregimiento de El Salado

El corregimiento de El Salado fue fundado en 1812 y debe su nombre a las fuentes de agua salada que emanan del subsuelo (Defensoría del Pueblo, 2002), está ubicado en la región de los Montes de María, en el municipio del Carmen de Bolívar a 18 kilómetros de la cabecera municipal. Para 2002, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo “el acceso vehicular al corregimiento del Salado desde El Carmen de Bolívar se [hacía] por una angosta vía de 19 kilómetros de terreno arcilloso, irregular y sin pavimentar, que en época de lluvias se [tornaba] en un camino prácticamente intransitable” (Defensoría del Pueblo, 2002). Hoy en día, después de una visita de campo realizada en septiembre de 2010 puede constatar que, aunque la carretera fue pavimentada a inicios del 2010 cuando se conmemoraron los 10 años de la segunda masacre, su falta de mantenimiento hace que existan unos pocos trayectos de fácil tránsito, de tal suerte que el camino entre el Carmen de Bolívar y el Salado se transita en 35 minutos si no hay lluvia y en el doble, en tiempo de lluvia.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hace ocho años, “la comunidad sólo [contaba] como medio de transporte de servicio público [con] un vehículo campero en regulares condiciones”, que cobraba \$4.000 por el pasaje en un solo sentido y que en promedio realizaba 3 o 4 viajes al día. Hoy en día son varios los camperos privados que transportan a los habitantes del corregimiento y al tabaco que se allí se cultivaba, además de estos camperos, no existe un medio de transporte público provisto por el gobierno municipal.

Antes de las masacres ocurridas en 1997 y 2000 El Salado era reconocido como uno de los corregimientos más prósperos del departamento de Bolívar, como la capital tabacalera del Caribe y como el corregimiento más grande del Carmen de Bolívar. El Salado se caracterizaba por la fertilidad de sus tierras, lo que permitió que se convirtiera en despensa

agrícola de la zona (GTMH, 2009: 20). Allí se cultivaba tabaco, ahuyama, ajonjolí, maíz, yuca y ñame, “los recursos económicos generados por la bonanza del tabaco permitieron un importante desarrollo en infraestructura de servicios públicos e instalaciones de comercio del tabaco. El Salado tenía alrededor de 6.000 habitantes y estaba en proceso para convertirse en municipio” (Fundación Semana, 2009), esto último gracias a que en las elecciones de 1994 habían conseguido elegir a dos representantes al Concejo del Carmen de Bolívar: David Álvarez y Emiro Cohen (GTMH, 2009:23).

La prosperidad del corregimiento era tal que contaba con acueducto, energía eléctrica, alumbrado público, dotación médica, escuela primaria, colegio de bachillerato y bodegas tabacaleras (GTMH, 2009:22). El corregimiento “contaba con la dotación física y de personal requeridos para satisfacer sus necesidades básicas en salud y educación. El puesto de salud tenía la capacidad para atender demandas de servicios de primer nivel, como consulta externa, odontología, partos, laboratorio clínico, medicina general y suministro de medicamentos. Así mismo, el corregimiento contaba con 2 centros de educación, uno para primaria y otro para secundaria, que atendían una demanda promedio de 500 niños y niñas en edad escolar” (Defensoría del Pueblo, 2002). Por lo anterior sus habitantes no reclamaban la ausencia del Estado salvo en lo concerniente al mejoramiento de la carretera.

Actualmente el corregimiento se encuentra al borde del colapso, las casas, abandonadas por años, están a punto de caer. Incluso el centro de salud, reconstruido hace poco, está agrietado. No hay alumbrado público, el centro médico no está dotado de medicinas y el tabaco se procesa en los patios de las casas. Además, la Agencia Presidencial para la Acción Social en conjunto con la Fundación Semana, está adelantando algunos proyectos de reconstrucción de vivienda con materiales viejos y vencidos donados por Cementos Argos y por la Fundación Corona, y que no se adecúan a las necesidades de los habitantes del corregimiento⁸⁶.

⁸⁶ Constatación realizada en visita al corregimiento del 10 y 11 de septiembre de 2010.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo antes de la primera masacre en El Salado habitaban más de 7.000 personas (6.000 personas según otras fuentes). Para la época de la segunda masacre quedaban 4.000 habitantes, y según el censo realizado por la Cruz Roja Colombiana en el 2002 se encontraban en el casco urbano 780 personas. De acuerdo con los pobladores, en la actualidad habitan El Salado aproximadamente 750 personas, la Fundación Semana, estimó esta cifra en 781 personas, de las cuales el 53,3% son hombres y el 46,7% son mujeres. De las personas cabeza de familia el 69% son mujeres y el 31% hombres, los cuales deben responder por entre 1 y 4 personas en el 80% de las familias; el 36% de la población es menor de edad, el 13% pertenece a la tercera edad. El 51% restante se ubica entre los 18 y 59 años. (Fundación Semana 2011).

Actualmente, El Salado no cuenta con representantes en el Concejo municipal y cualquier expectativa de convertirse en municipio se ha esfumado.

Los datos socio demográficos no fue posible contrastarlos con la situación existente antes de las masacres, debido a que no fue posible acceder a información desagregada para esa época. La información proporcionada por el Censo realizado en 1993 reporta los datos por municipio, en este caso, los datos correspondientes al Carmen de Bolívar. De acuerdo con dicha información para 1993 el municipio del Carmen de Bolívar tenía una población de 62.355 personas, de los cuales 32.073 eran hombres y 30.282 eran mujeres. De esta población 38.289 personas habitaban la cabecera municipal y 24.066 el resto del municipio (DANE, 1993):

Municipio	Total			Cabecera			Resto		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Carmen de Bolívar	62.355	32.073	30.282	38.289	18.682	19.607	24.066	13.391	10.675

Anexo B. Caracterización del conflicto armado en el corregimiento de El Salado

En la región de los Montes de María operaban para la época de las masacres ocurridas en el Salado “los frentes 35 y 37 del bloque norte de las FARC, el frente Compañero Ricardo del ELN, algunas guerrillas del ERP y EPL, y los Bloques Golfo de Morrosquillo y Canal del Dique de las autodefensas” (Defensoría del Pueblo, 2002). Respecto de los paramilitares, desde finales de 1995 las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) hacían una fuerte presencia en los Montes de María y para 1999 controlaban los municipios de El Carmen de Bolívar, Maríalabaja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba Tetón, Zambrano y El Guamo, en el departamento de Bolívar y de los municipios de Colosó, Chalán, Ovejas, San Onofre, Morroa, Toluviejo y Los Palmitos, en el departamento de Sucre (Masacre y desplazamiento forzado de los Montes de María – Colombia, 2009). Por su parte, la Fuerza Pública hacía presencia en la región mediante los Batallones de Infantería de Marina número 3 y 33, con sus respectivas brigadas móviles.

Debido a la presencia desde los años 90 de la guerrilla de las FARC en la región, la población civil de la zona fue señalada por los paramilitares de colaborar con ellos (Defensoría del Pueblo, 2002).

El Gobierno nacional también se ha referido a la presunta relación entre los campesinos y las guerrillas, señalando que en los años ochenta estos grupos desarrollaron trabajo político en las poblaciones de los Montes de María (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003: 3), situación que ha contribuido a la estigmatización de los pobladores de El Salado.

Adicionalmente, la población de los municipios vecinos del corregimiento de El Salado, siempre ha señalado a los saladeros de tener relaciones con la guerrilla. Aún hoy, más de diez años después de lo ocurrido y cuando parece haber consciencia de la injusticia y la gravedad, la población de El Salado manifiesta que se siente discriminada y señalada por

los habitantes del Carmen de Bolívar y Cartagena, especialmente. Situación que pude verificar en un taller de formación a los funcionarios y funcionarias encargadas de atender en salud a los saladeros, cuando una funcionaria pública del Carmen de Bolívar afirmó que no entendía la consideración actual del Estado con los saladeros y que ella se había alegrado por la muerte en la masacre de 2000 de algunos guerrilleros.

Ahora bien, el interés de los actores armados sobre esta zona radica en que constituye un “refugio y corredor vital y estratégico para la movilización de estas organizaciones en la Costa Caribe” (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003: 3), en particular para la movilización del comercio de drogas ilícitas.

“La elevada intensidad de la violencia en esta zona responde al propósito de los bandos en competencia de controlar posiciones geográficas, el sistema vial y, en particular, la carretera troncal que atraviesa la zona pasando por los municipios de Sincelejo, Corozal, Los Palmitos, Ovejas, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Calamar, con ramales a San Pedro, Sincé, San Benito Abad, Tolúviejo, Tolú, San Marcos, San Onofre, Zambrano, El Guamo, Mahates y María La Baja. Así mismo, son objeto de disputa armada los corredores naturales, como el arroyo Alférez que atraviesa la región de occidente a oriente desde el municipio de Colosó en Sucre hasta Zambrano en Bolívar pasando por El Carmen. Este último municipio es el objetivo más codiciado en la disputa armada por cuanto es el centro económico más importante y esencial en la logística y obtención de recursos para las organizaciones ilegales” (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003: 8)

Esta importancia geoestratégica del corregimiento motivó los enfrentamientos armados entre diferentes bandos, en los que la población civil fue la principal víctima.

Anexo C. La primera masacre: 1997

La primera masacre que tuvo lugar en el corregimiento de El Salado ocurrió en el 23 de marzo de 1997, cuando paramilitares de las AUCU (Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá) asesinaron a 5 personas, entre ellas una mujer y cuatro hombres, en el lugar conocido como el parque de la Virgen.

La primera persona asesinada en esta masacre fue la profesora y líder comunitaria Doris Mariela Torres, quien veinte días atrás había protestado ante una incursión paramilitar en el corregimiento, en la que habían obligado a los pobladores a cerrar todas las tiendas. Doris Mariela Torres, encabezaba la lista de las personas que los paramilitares buscaron el día de la masacre.

El 23 de marzo de 1997, un grupo paramilitar conformado por 50 hombres fuertemente armados incursionaron en vehículos al casco urbano del corregimiento El Salado por la vía que conduce a la vereda La Sierra; reunieron a una parte de la población en la plaza principal, contigua al parque principal, y allí sacaron una lista con base en la cual seleccionaron a su primera y más importante víctima: la profesora y líder comunitaria Doris Mariela Torres. Entre los victimarios había dos encapuchados. Luego asesinaron a José Esteban Domínguez y su hijo, quienes intentaron interceder por aquella. También mataron a Néstor Arrieta y desaparecieron forzosamente a Álvaro Pérez, entonces Presidente de la Junta de Acción Comunal; arrasaron con la tienda de dicha profesora y quemaron un supermercado ubicado al lado de la plaza. Aún hoy permanecen sus ruinas como lugar de memoria de tales acciones (GTMH, 2009: 103).

Este hecho motivó el desplazamiento de la población hacia el Carmen de Bolívar y su posterior retorno 3 meses después (Defensoría del Pueblo, 2002). Pese al retorno, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, “la acción del Estado en esta oportunidad fue insuficiente y no garantizó la permanencia de la comunidad en el corregimiento. Este retorno no incluyó acciones de prevención y protección que minimizaran los riesgos de nuevas incursiones por parte de los actores armados ilegales y por lo tanto nuevos desplazamientos forzados” (Defensoría del Pueblo, 2002).

Después de la masacre, fueron ejecutadas extrajudicialmente tres personas más entre 1997 y 1998, todos ellos hombres.

Anexo D. La segunda masacre: 2000

En febrero de 2000 tuvo lugar la segunda masacre en El Salado, la cual es tristemente recordada por constituir uno de los más cruentos hechos de violencia de los que se ha tenido noticia en Colombia, de acuerdo con el GTMH “la de El Salado hace parte de la más notoria y sangrienta escalada de eventos de violencia masiva perpetrados por los paramilitares en Colombia entre 1999 y el 2001”. Al punto que este caso fue seleccionado por el GTMH como *caso tipo* porque “su derroche de violencia ilustra[] de forma contundente una estrategia paramilitar sustentada en el uso y propagación del terror como instrumento de control sobre el territorio y la población” (GTMH, 2009).

En estos hechos, 300 paramilitares de las AUC asesinaron a más de 60 personas, “los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Jorge 40 y alias H2 organizaron, en la finca El Avión, municipio de Sabanas de San Ángel (Magdalena), una matanza con el firme propósito de sembrar el pánico entre las víctimas. Argumentando complicidad con la guerrilla de las Farc, estigmatizaron a toda una población y procedieron a una serie de prácticas violentas de difícil enumeración” (El Espectador, 2009). De acuerdo con las investigaciones adelantadas, en la preparación y desarrollo de la masacre participaron 450 paramilitares divididos en tres grupos, al mando de los jefes paramilitares del bloque norte de las AUC, Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo (alias “Jorge 40”), además de John Henao, alias “H2”, delegado de Carlos Castaño.

Los hechos relacionados con esta masacre han sido ampliamente documentados por la Comisión Colombiana de Juristas, el Grupo de Trabajo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el canal Caracol y la Revista Semana.

Gracias al trabajo de recolección de información realizado por estas entidades, se sabe que los hechos duraron por lo menos 5 días y que fueron asesinadas por lo menos 60 personas, sin embargo, existen registros que dan cuenta de una diferente cantidad de víctimas fatales: la Defensoría del pueblo habla de 46 personas, el GTMH de “un total de 60 víctimas

fatales, 52 hombres y 8 mujeres, entre los cuales había tres menores de 18 años, 12 jóvenes entre los 18 y los 25 años, 10 adultos jóvenes entre 26 y 35 años, 23 adultos de 36 a 55 años, y 10 adultos mayores. No se pudo recuperar información sobre la edad de dos de ellas” (GTMH, 2009: 27). Además, se ha establecido que dos víctimas sobrevivientes fueron víctimas de violencia sexual y una cantidad de mujeres sin determinar fue obligada a cocinar para sus victimarios, en hechos que sirven para evidenciar que en la masacre de El Salado, la violencia contra las mujeres fue especialmente relevante.

- El contexto general de violaciones a los derechos humanos ocurridas en la masacre de 2000

Aunque los hechos de mayor recordación ocurridos en El Salado tuvieron lugar el 18 y 19 de febrero muchas personas fueron ejecutadas extrajudicialmente antes y después, durante el ingreso y salida de los paramilitares del corregimiento, al respecto “se puede afirmar que la masacre de El Salado ocurrió entre el 16 y el 21 de febrero de 2000 en los municipios de El Carmen de Bolívar, corregimiento El Salado, sitio Loma de las Vacas, y vereda El Balguero; Ovejas, corregimientos de Canutal y Canutalito, y veredas Pativaca, El Cielito y Bajo Grande; y Córdoba, vereda La Sierra” (GTMH, 2009: 27).

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la CCJ y el GTMH, la masacre de El Salado estaba anunciada. El 18, 19 y 20 diciembre de 1999, dos meses antes de la masacre un helicóptero sobrevoló el pueblo arrojando panfletos que decían: “cómanse las gallinas y los carneros y gocen todo lo que puedan en esta navidad, porque no van a gozar más”. Un mes después, el 19 de enero de 2000, en el sitio conocido como Portón de Esteban en la vía que comunica El Carmen de Bolívar con El Salado, un grupo paramilitar instaló un retén a las seis de la mañana y detuvo varios carros, revisaron a 15 personas y retuvieron a cinco que luego aparecieron degolladas y torturadas. Las víctimas de esta masacre fueron: Amilkar José Berrío Quintero, Emil Anillo Silgado, Miguel Ángel Montes, Carlos Eduardo Martelo y Gilberto Alvis Ponce (Memorial presentado por la Comisión Colombiana de Juristas).

El 15 de febrero de 2000, día que inició la masacre, Miguel Ángel Parra, Director del CTI de Bolívar, se dirigió al comandante de la Primera Brigada de la Infantería de Marina, mediante oficio 087 y le informó que “con base en datos suministrados a [sus] dependencias, se tiene conocimiento que en los días próximos se va a masacrar la población por orden de Carlos Castaño, quien va en un comienzo con más de 100 hombres bien armados y con entrenamiento suficiente”. Los hechos a los que se refería el funcionario de la Fiscalía comenzaron esa misma noche cuando salieron de San Onofre dos camiones que se encontraron cerca del Carmen de Bolívar con dos grupos de paramilitares “todos estrictamente uniformados, con armas automáticas, granadas de fragmentación en las cananas y munición de sobra en las charreteras”. Un grupo venía de Magdalena enviado por Jorge 40 y estaba bajo las órdenes de alias “Amaury”, otro venía de Córdoba y estaba al mando de alias “5-7” (Revista Semana, 2008).

Al otro día, el 16 de febrero, un primer grupo paramilitar estableció un retén en el sitio conocido como la *Loma de las Vacas*, allí detuvo un carro proveniente de El Salado e interrogó a sus pasajeros. En ese momento asesinaron a Edith Cárdenas Ponce a quien acusaron de ser guerrillera. Posteriormente asesinaron a un hombre conocido como Manuel Díaz. Una pareja que viajaba con ellos fue dejada en libertad y pudo avisar en el Carmen de Bolívar lo ocurrido. Según el GTMH “esto desencadenó la huida de los habitantes de El Salado hacia los montes circundantes” (GTMH, 2009: 28). Posteriormente los paramilitares detuvieron otro carro y asesinaron a sus dos ocupantes, en su entrada al corregimiento asesinaron también a Libardo Antonio Cortés Rodríguez, Alberto Garrido, Emiro Castillo Castilla y a Miguel Antonio Avilez Díaz.

“‘Amaury’ había entrado por la vía principal, dejando tras de sí una estela de terror y muerte. En la mañana del 16 de febrero, los paramilitares detuvieron en la carretera a uno de los camperos que cada día hacían el viaje entre El Salado y Carmen de Bolívar. En el carro iban, entre otros, Edith Cárdenas, **una mujer líder y reconocida por todos en El Salado**. Según testimonio dado días después por María Cabrera, promotora de salud que también iba en el carro, los paramilitares miraron los hombros de Edith y los vieron marcados y asumieron que era una señal inequívoca de que la mujer cargaba morral, y que era guerrillera. En realidad, eran las marcas del uso de camisetas escotadas, para lidiar el calor de la zona. “¡Habla Edith, habla. No te quedes callada!”, le gritaba María, pero Edith no pudo hablar del miedo. La mataron. A ella y a los demás. Sólo María y otro

pasajero pudieron escapar por los rastros, corriendo desesperados para salvar sus vidas” (Revista Semana, 2008).

En el casco urbano del corregimiento de Canutalito reunieron a la población en la plaza principal y anunciaron que harían una limpieza de la guerrilla. Allí tenían amarrados a Jorge Asia, Juan González, Marcos Díaz, Jorge Eliécer Mercado, Benjamín José González Anaya y Luis Alfonso Peña Salcedo, las personas del pueblo trataron de intervenir por ellos logrando que no se llevaran a los dos primeros. Los demás fueron asesinados.

Posteriormente, en la vereda Pativava detuvieron al señor Rafael Antonio Núñez y a sus tres hijos, Lever Julio, David Rafael y Jhony Alberto Núñez Sánchez, quienes fueron asesinados. En el entre tanto los paramilitares se apropiaron del ganado de la vereda “aduciendo que había sido robado por la guerrilla. Desde entonces comenzó a circular la versión de que este era de ‘La Gata’, como se apoda a la empresaria del chance Enilse López Romero; y que la misión de los paramilitares era recuperarlo” (GTMH, 2009: 30).

Simultáneamente, en la vía Flor del Monte - Bajo Grande, asesinaron a Dayro de Jesús González Olivera y en las veredas El Cielito y Bajo Grande asesinaron a Amaury de Jesús Martínez y a su padre Miguel Antonio Martínez Rodríguez, así como a Miguel Antonio Martínez Narváez, Moisés Gutiérrez Causado y Félix Pérez Salcedo. Por su parte, los paramilitares que incursionaron desde Ovejas asesinaron a Gilfredo Brochero Bermúdez, Isaac Contreras y Luis Romero.

Durante el camino emprendido por los paramilitares hacia El Salado, fueron asesinadas en el primer día a 24 personas “23 hombres y una mujer: 18 en el municipio de Ovejas, tres en El Carmen de Bolívar y tres en Córdoba, la mayoría asesinados con arma cortopunzante, degollados o apuñalados” (GTMH, 2009: 31). El Batallón N° 5 de la Infantería de Marina (BAFIM N° 5), que tenía competencia territorial en la zona había cedido días antes su competencia al Batallón de Contraguerrilla de Infantería de Marina N° 31 “que a su vez cambió su dispositivo militar el 15 de febrero de 2000, es decir, la víspera del inicio de la masacre” (GTMH, 2009: 31). Sobre el particular, resultan extraños los hechos

relacionados con un supuesto robo de ganado y que originaron el despliegue de los Batallones ubicados en la zona:

“Ese mismo día el ganadero y político Miguel Nule Amín reportó al comando del Bafim N° 5 el robo de 400 cabezas de ganado de las fincas Santa Helena y La Nubia entre los municipios de San Onofre y Toluviejo por parte del Frente 35 de las Farc. Se informó que el ganado estaba en el corregimiento Macayepo. Al mismo tiempo, el gobernador de Sucre, Eric Morris, se contactó con el Comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina para informarle del robo de ganado y la presencia guerrillera, insistiéndole en el despliegue de una acción inmediata. El Comando de dicha Brigada ordenó el movimiento de dos compañías del Bacim N° 31 hacia el sector Los Números y dos más hacia Macayepo, mientras replegó otras cuatro, lo que implicó que el territorio de la masacre quedó sin protección militar. Por último, el 16 de febrero el Comando de la mencionada Brigada reportó informaciones sobre la inminencia de un ataque de las Farc a los cascos urbanos de Córdoba y Zambrano.

“La única operación realizada por la fuerza pública antes de que se iniciara la masacre fue una acción de la Fuerza Aérea en la que se obligó a aterrizar a un helicóptero en jurisdicción del municipio de Córdoba el 16 de febrero. Los tripulantes quemaron el helicóptero en tierra y huyeron. Al parecer uno de ellos era ‘Jorge 40’ ” (GTMH, 2009, págs. 31-32).

Al día siguiente, el 17 de febrero, uno de los grupos paramilitares reinició su recorrido hacia El Salado y se encontró con el frente 37 de las FARC que los atacó con cilindros de gas en combates que duraron aproximadamente una hora. Finalizados los combates acamparon en un cerro y fueron nuevamente atacados por guerrilleros del Frente 27 de las FARC. (GTMH, 2009).

Mientras tanto, buena parte de los habitantes de El Salado que el día anterior habían huido al monte regresó al pueblo pues “no resistían las condiciones extremas de supervivencia en los montes; tenían niños pequeños que necesitaban agua y alimento; percibían que el riesgo había cesado; o tenían la convicción de no haber hecho algo que justificara la huida” (GTMH, 2009)

El tercer día, el 18 de febrero, el grupo que había tenido combates con las FARC continuó siendo atacado por lo que pidió refuerzos de los grupos que venían de Ovejas, así, “la

concentración de fuerzas paramilitares, junto con la presencia de un helicóptero artillado, les permitió superar la capacidad bélica de la guerrilla, a la cual obligaron a replegarse” (GTMH, 2009), cuando la guerrilla se replegó el pueblo quedó a merced de los paramilitares.

Ya en El Salado, el helicóptero que apoyó la incursión impactó una casa en la calle principal del pueblo, allí murió Libardo Trejos Garrido, luego de esto dos grupos de paramilitares entraron al pueblo y recorrieron sus calles “pateando las puertas de las viviendas y obligando a los pobladores a salir y dirigirse hacia el parque principal, acompañando su accionar con insultos y gritos en los que acusaban a los habitantes de ser guerrilleros” (GTMH, 2009). Mientras los paramilitares recorrían el pueblo asesinaron a dos personas que se escondían en una casa y que paralizadas por el miedo no pudieron salir y a una mujer que abrió la puerta de su casa para que entrara su hijo que corría huyendo de los paramilitares. En aquella casa se escondían algunos vecinos que fueron obligados a salir. Allí también fue asesinado Eloy Montes Olivera.

Al mismo tiempo fueron asesinados Rogelio Ramos, Víctor Arias Julio, de 67 años, José Irene Urueta de 55 y Wilfrido Barrios, quienes trataban de huir por el monte y Alejandro Alvis Madrid, quien hirió a un paramilitar que ingresó a su casa.

En el pueblo fueron obligados los habitantes a salir a la cancha de fútbol. Allí, la primera víctima fue Eduardo Novoa Alvis, después de su asesinato los paramilitares, que habían sacado los instrumentos musicales de la Casa de la Cultura, comenzaron a tocar una tambora. Hay quienes dicen que tocaron también gaitas y acordeones “mientras saqueaban las tiendas iban encendiendo los equipos de sonido que encontraban, lo que creó un ambiente “festivo” en el que se combinaba la música de los equipos de sonido con los toques de la tambora” (GTMH, 2009).

Al parecer los paramilitares tenían una lista de presuntos colaboradores de la guerrilla, así que pidieron los documentos de las personas que estaban en el pueblo pero no seleccionaron a ninguna víctima por estar en dicha lista. También pidieron a los

pobladores que se quitaran la camisa y los zapatos para ver si tenían marcas del uso de botas o de cargar equipos de campaña, pero así tampoco seleccionaron a nadie. El principal mecanismo usado para seleccionar a las víctimas fue el señalamiento por “caratapadas”, presuntos ex - guerrilleros que señalaban a los colaboradores de dicho grupo, y el “sorteo”, mediante el cual “diciendo que su objeto era obligar a los hombres a colaborar: Fueron forzados a numerarse y quien tenía el número previamente designado era sacado a la fuerza y asesinado” (GTMH, 2009). Así mataron a Luis Pablo Redondo presidente de la Junta de Acción Comunal, a Pedro Torres, Desiderio Francisco Lambraño y Ermides Cohen Redondo.

Luego del “sorteo” los caratapadas señalaron a Emiro Cohen Torres, comerciante y ex – concejal de El Carmen de Bolívar, quien fue sindicado de ser colaborador de la guerrilla por ser dueño de un carro y a Oscar Antonio Meza Torres, a quienes asesinaron. También asesinaron a Enrique Medina Rico, un hombre de 60 años, por tener carne en su casa, pues los paramilitares afirmaron que esa carne podía provenir de ganado robado, a Justiniano Pedroza, de 59 años, Néstor Tapia, de 58, Víctor Urueta Castaño, quien al parecer tenía problemas mentales y a Jairo Alvis Garrido.

Finalmente los paramilitares recibieron la orden de detener la masacre y “decidieron distribuir entre los sobrevivientes una parte de las mercancías que habían sustraído de las tiendas, ordenándoles que se dirigieran a sus casas y que prepararan comida”. Los paramilitares ordenaron mantener las puertas de las casas abiertas, mientras ellos seguían en el pueblo, además les impidieron llorar o enterrar los cuerpos de sus familiares, vecinos y amigos (GTMH, 2009). Mientras tanto, Manuel Chamorro de 66 años, habitante de la vereda La Sierra, fue asesinado mientras se dirigía a El Salado para establecer lo que estaba sucediendo con sus familiares.

El día termino con 28 víctimas, 23 hombres y 5 mujeres. 17 fueron asesinadas en la cancha, seis en las casas y cinco en los montes (GTMH, 2009).

Ese mismo día, el 18 de febrero, el Comando de la Primera Brigada de Marina ordenó el despliegue de acciones para operar en el territorio de la masacre a través de unidades de los batallones N° 5, 31 y 33. 43. A su vez, a las 8 de la noche, se realizó un consejo de seguridad en la Gobernación de Sucre encabezado por el entonces coronel de la Armada Rodrigo Quiñones y el gobernador encargado, Humberto Vergara, dicho consejo se ocupó de:

“La información del DAS sobre el robo de 500 reses pertenecientes a Miguel Nule Amín y a la esposa del ganadero Joaquín García, en la zona rural de San Onofre. Tanto el gobernador, Eric Morris –hoy condenado por pertenecer a grupos paramilitares–, como el senador Álvaro García Romero –detenido y acusado de paramilitarismo y de haber participado en la masacre de Macayepo– y el propio Nule Amín –aliado de los paramilitares– le habían pedido a la Armada, según testimonios de los oficiales, que movieran tropas para buscar un ganado que nunca se encontró y de cuyo hurto tampoco hubo denuncia formal. Hoy muchos de estos oficiales piensan que el robo nunca existió y que sólo fue una coartada para desviar la atención de los militares y la Policía” (Revista Semana, 2008).

En el acta del Consejo de Seguridad, no aparece segundo punto. El tercer asunto tratado esa noche tiene que ver con que el 16 de febrero la Policía vio un helicóptero Bell azul y blanco artillado que fue inmovilizado por acción de la Armada y la Fuerza Aérea:

El helicóptero llevaba munición, y quienes lo piloteaban nunca fueron capturados. Hoy se sabe por testimonios de los desmovilizados que el piloto era Andrés Angarita, ex oficial de la aviación del Ejército, que llegó a tener un alto rango en las autodefensas, y que ya fue asesinado. El otro, según testimonios, era ‘Jorge 40’. Lo que nunca se ha sabido es por qué no fueron capturados, si es que el aparato fue inmovilizado, ni cómo lograron sobrevivir, si es que fue derribado, como dice la Armada (Revista Semana, 2008).

El 19 de febrero, mientras los paramilitares permanecían en el pueblo, asesinaron a José Manuel Tapias. Durante ese día aprovecharon para escribir grafitis en las casas. “A las cinco de la tarde, los paramilitares informaron que se iban y que la Infantería de Marina venía en camino. Una hora después, la compañía Orca del Bacim N° 31 llegó al casco urbano del corregimiento El Salado” (GTMH, 2009). Así, la Infantería de Marina llegó al corregimiento tres días después de la masacre por tierra, por el mismo camino por el que

los paramilitares salieron una hora antes, mientras que estos últimos, además, contaron con apoyo aéreo.

“Lo que no se puede entender sobre la acción de la Infantería de Marina es cómo 450 paramilitares que se repliegan por rutas distintas (La Sierra, vía a Zambrano y vereda El Balguero) no pudieron ser detectados, ni combatidos, ni capturados. Además, llama la atención que sólo hasta el 23 de febrero se produjera el primer resultado operativo (11 paramilitares capturados y 2 dados de baja), es decir, cuatro días después de que incursionaron en el territorio. Lo paradójico es que lo fueron en otra zona, cuando se transportaban en una canoa por el Río Magdalena. Más sorprendente resulta el hecho de que el segundo resultado operativo se produjo dentro del territorio de la masacre, en la vereda La Sierra, el 28 de febrero. Los cuatro paramilitares capturados permanecieron en el territorio de la masacre nueve días después de que la Infantería de Marina llegó hasta el casco urbano de El Salado.

“La irregularidad de las acciones de la Infantería de María se puso de manifiesto cuando el Infante de Marina Alfonso Enrique Benítez Espitia declaró que la Compañía Orca se había encontrado con los paramilitares, sin que se hubiese dado orden de combatirlos. De hecho, el comandante de dicha Compañía fue interpelado por los comandantes paramilitares por las dificultades de coordinación. Lo anterior fue objeto de investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación, organismo que encontró méritos para sancionar disciplinariamente al Capitán de Corbeta Héctor Pita Vásquez, adscrito al Bacim N° 31, por omisión. Luego este oficial fue vinculado al proceso que se adelanta por la masacre de El Salado, por complicidad en el delito de homicidio agravado” (GTMH, 2009)

Al día siguiente, el 20 de febrero, los sobrevivientes, con el apoyo de la Infantería de Marina, cavaron fosas comunes para enterrar a sus muertos. Aún hoy, muchos de cadáveres enterrados en un lote contiguo a la plaza del pueblo, se encuentran allí y una cruz y una placa abandonada, los recuerdan (Ver anexos, fotos 6 y 7). En el monte, la Infantería encontró a la señora Pura Chamorro y la niña Helen Margarita Arrieta, de siete años de edad, hermana de Neivis Arrieta. La niña fue hallada sin vida.

El 21 de febrero los paramilitares que habían salido de El Salado se encontraron con un joven que venía en bicicleta al que acusaron de ser guerrillero, razón por la cual lo ejecutaron. El muchacho se llamaba Euclides Torres Zabala. También asesinaron a los

jóvenes Edgar y Ornedis Cohen de 16 y 18 años que habían salido en busca de unos animales perdidos durante la masacre. Finalmente en la vereda El Balguero ejecutaron a Eliseo Torres y su hijo Eduardo Torres

El 21 de febrero ingresó el CTI de la Fiscalía e inició la exhumación de las fosas comunes, mientras tanto, los familiares de los habitantes del corregimiento trataban de ingresar por la vía del Carmen de Bolívar. La Infantería de Marina y la Alcaldía del municipio impidieron el paso alegando que la carretera estaba minada.

Finalmente 4.000 personas abandonaron el pueblo dirigiéndose, en primer lugar, al Carmen de Bolívar donde la persecución paramilitar no acabó. Después del desplazamiento fueron asesinados Miguel Ángel Contreras el 27 de julio de 2000 en el casco urbano de El Carmen de Bolívar. Igual sucedió con Elías Prudencio Herrera y Joil Enrique Yepes el 19 de septiembre de 2000.

Anexo E. Fotografías, tablas y mapas

Foto 1.Modelo de viviendas construidas para la población de El Salado en el marco del proceso de reconstrucción del



corregimiento.

Foto 2.Vivienda construida para los pobladores de El Salado.



Foto 3.Contraste entre cules del corregimiento.

Foto 4. Cancha de fútbol e iglesia del corregimiento.



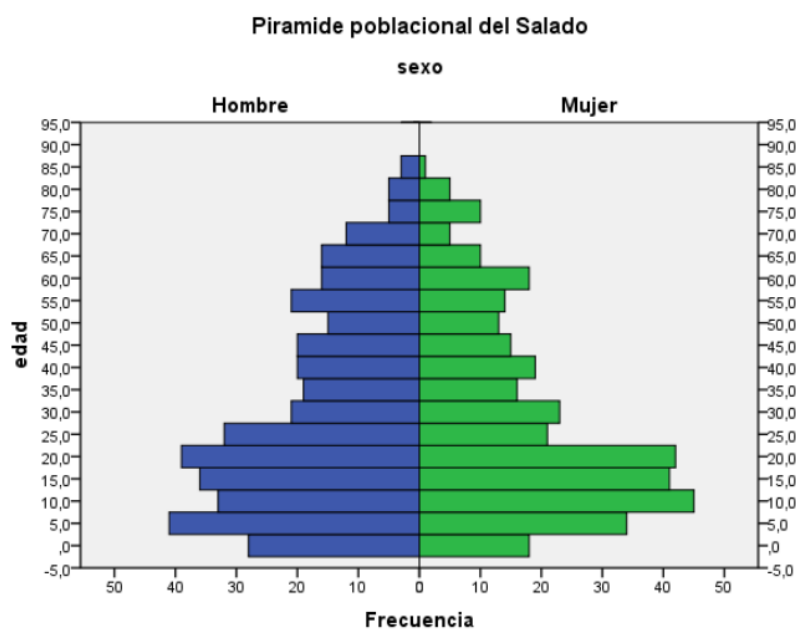
Foto 5. Cancha de fútbol, al fondo casa de Margoth Fernández.



Fotos 6 y 7.Lugar de homenaje a las víctimas de la masacre ocurrida en 2000.

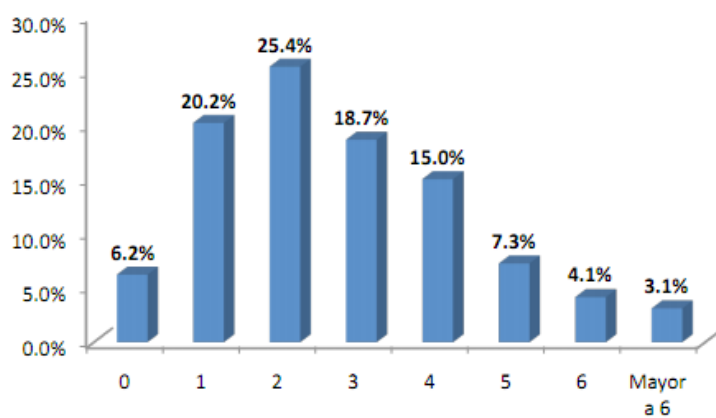


Tabla 1.Pirámide poblacional de El Salado por
2011):

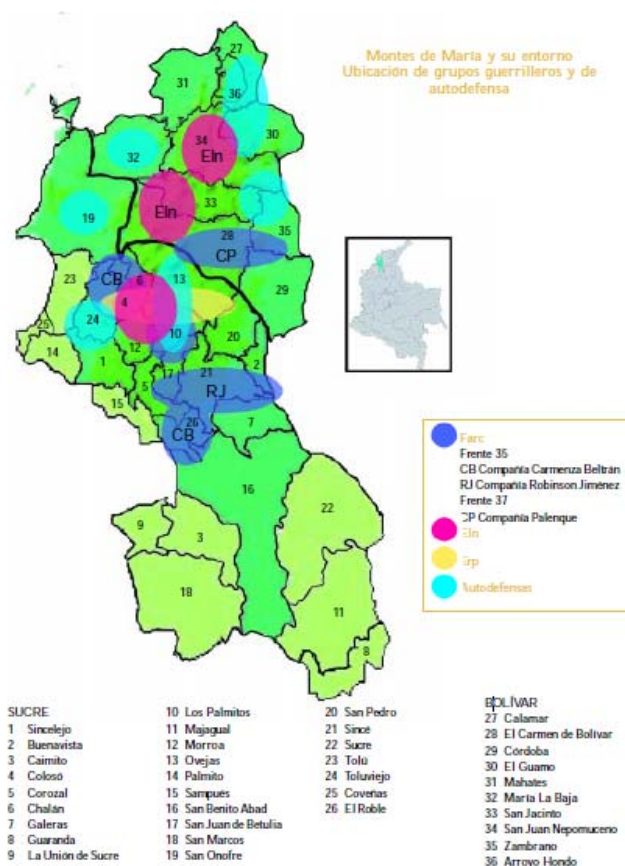


Fuente: Fundación Carvajal

Tabla 1. ... (11).



Mapa 1. Montes de María. Ubicación de grupos guerrilleros y paramilitares, (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003)



* En itálica los municipios que hacen parte de la Zona de Rehabilitación (ZRC).
Cartografía: Ipec - Datos: Proceso de georreferenciación por el Observatorio de Derechos Humanos y DHU, Vicepresidencia de la República

8. Bibliografía

8.1 Jurisprudencia

Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), Informe de admisibilidad Caso Karen Atala e hijas Vs. Chile, 12.502 (23 de julio de 2008).

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Masacre y desplazamiento forzado de los Montes de María - Colombia, Informe no. 15/09 Petición 1-06 Admisibilidad (19 de marzo de 2009).

Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Caso Graciela Alto Vs. Perú, Comunicación No. 202/1986 (28 de octubre de 1988).

Comité de Derechos Humanos, Caso X Vs. Colombia, Comunicación No. 1361 de 2005 (14 de mayo de 2007).

Corte Constitucional colombiana, Auto 092, Seguimiento al estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 (14 de abril de 2008).

Corte Constitucional colombiana, C - 496 (3 de noviembre de 1994).

Corte Constitucional colombiana, C-037 (5 de febrero de 1996).

Corte Constitucional colombiana C-952 (26 de julio de 2000).

Corte Constitucional colombiana C-322 (25 de abril de 2006).

Corte Constitucional colombiana C-291 (25 de abril de 2007).

Corte Constitucional colombiana, C-136 (25 de Febrero de 2009).

Corte Constitucional colombiana, T - 045 (2 de febrero de 2010).

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, Serie C No. 134 (15 de septiembre de 2005).

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), Caso González y otras vs. México "Campo Algodonero", Serie C No. 205 (16 de noviembre de 2009).

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, Serie C No. 216 (31 de agosto de 2010).

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), Caso de la masacre de las dos erres Vs. Guatemala, Serie C No. 211 (24 de noviembre de 2009).

8.2 Instrumentos Internacionales

Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. (1994). Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer . *Convención de Belem do Pará*.

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1979). Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1993). Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. *Resolución de la Asamblea General 48/104*.

Asamblea General de Naciones Unidas. (2006). *Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer*.

Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 20, E/C.12/GC/20 (2 de julio de 2009).

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. (1992). Recomendación general No. 19.

Corte Penal Internacional. (2000). Elementos de los Crímenes. *U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add.2.*

1.1 8.3 Libros, capítulos de libros y documentos

ACNUR. (2009). *Violencia de género y mujeres desplazadas*. Recuperado el 26 de diciembre de 2011, de <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/7269>

Amnistía Internacional. (2004). *Cuerpos marcados, crímenes silenciados*. Recuperado el 4 de octubre de 2010, de <http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR23/040/2004/es/f49b819e-d598-11dd-bb24-1fb85fe8fa05/amr230402004es.pdf>

Amnistía Internacional. (2011). *Esto es lo que nosotras exigimos. Que se haga justicia*. Londres: EDAI.

Amoros, C. (2008). Conceptualizar es politizar. En P. Laurenzo, M. L. Maqueda, & A. Rubio, *Género, violencia y derecho* (págs. 15-25). Valencia: Tirant lo Blanch.

Aristóteles. (s.f.). *Ética a Nicómaco*. Recuperado el 27 de marzo de 2011, de Biblioteca del IRC en la red Undernet - Proyecto Espartaco: <http://www.proyectoespartaco.dm.cl>

Barrere, M. Á. (2008). Género, discriminación y violencia contra las mujeres. En P. Laurenzo, M. L. Maqueda, & A. Rubio, *Género, violencia y derecho* (págs. 27-47). Valencia: Tirant lo Blanch.

Bourdieu, P. (2000). Elementos para una sociología del campo jurídico. En P. Bourdieu, & G. Teubner, *La fuerza del derecho* (págs. 153 - 220). Bogotá: Ediciones Uniandes; Instituto Pensar; Siglo del Hombre Editores.

Butler, J. (2000). Variaciones sobre sexo y género. En M. Lamas, *El Género: La contrucción cultural de la diferencia sexual* (págs. 303 - 326). México D.F.: Miguel Ángel Porrúa.

Charlesworth, H. (1997). ¿Qué son los “derechos humanos internacionales de la mujer”? En R. Cook, *Derechos humanos de la mujer. Perspectivas nacionales e internacionales* (págs. 55 - 80). Bogotá: Profamilia.

Colombia Diversa. (s.a). *Derechos Humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en Colombia 2006 - 2007*. Bogotá: Colombia Diversa.

Comisión Interamericana de derechos Humanos. (2006). *Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia*. Washington: CIDH.

Conway, H., Bourque, S., & Scott, J. (2000). El concepto de género. En M. Lamas, *El género: La construcción cultural de la diferencia sexual* (págs. 21 - 33). México D.F.: Miguel Ángel Porrúa.

Copelon, R. (2000). *Crímenes de género como crímenes de guerra: Integrando los crímenes contra las mujeres en el derecho penal internacional*. Recuperado el 14 de noviembre de 2010, de McGill Law Journal: www.iccwomen.org/publications/.../Gender_Crimes_as_War_Crimes.doc

Curiel, O. (2010). *El régimen heterosexual de la nación*. Recuperado el 28 de septiembre de 2011, de Universidad Nacional. Biblioteca Digital:

<http://www.bdigital.unal.edu.co/2733/1/478294.2010.pdf>

DANE. (1993). *Departamento Administrativo Nacional de Estadística*. Recuperado el 24 de julio de 2011, de Colombia - Censo 1993 - Bolívar: ftp://190.25.231.247/books/LB_792_1993.pdf

Defensoría del Pueblo. (2002). *Resolución Defensorial Regional No. 008 sobre el proceso de retorno de la población desplazada del corregimiento El Salado-Bolívar*. Recuperado el 4 de septiembre de 2010, de:

<http://www.defensoria.org.co/pdf/resoluciones/regional/regional8.pdf>

Díaz Jimenez, R. M. (2008). Evaluación psicológica y psicosocial. *Acción de tutela sobre el derecho a la salud de cuatro mujeres víctimas sobrevivientes de la masacre de El Salado*. Bogotá, Colombia.

El Espectador. (14 de septiembre de 2009). *El Espectador*. Recuperado el 5 de septiembre de 2010, de El informe de la masacre de El Salado:

<http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo161242-el-informe-de-masacre-de-el-salado>

Ewick, P., & Silbey, S. (2001). Conformismo, oposición y resistencia: un estudio sobre conciencia jurídica. En M. García Villegas, *Sociología Jurídica. Teoría y sociología del derecho en Estados Unidos* (págs. 267 - 289). Bogotá: Unibiblos.

Femenias, M. L. (2007). Esbozo de un feminismo latinoamericano. *Revista estudios feministas*, 11-25.

Fraser, N. (1997). ¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas en torno a la justicia en una época "postsocialista". En N. Fraser, *Iustitia Interrupta* (pág. 54). Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

Fraser, N. (2006). La justicia social en la era de la política de la identidad. En N. Fraser, & A. Honnet, *¿Redistribución o reconocimiento?* (págs. 17 - 88). Madrid: Ediciones Morata y Fundación Paideia Galiza.

Fundación Semana. (14 de septiembre de 2009). *Revista Semana*. Recuperado el 5 de septiembre de 2010, de Cómo El Salado perdió la alegría y cómo usted puede ayudarle a recuperarla: <http://www.semana.com/noticias-conflicto-armado/como-salado-perdio-alegria-como-usted-puede-ayudarle-recuperarla/128685.aspx>

Fundación Semana. (Febrero de 2011). *Fundación Semana*. Recuperado el 24 de julio de 2011, de El Salado: Informe de línea de base: <http://fundacionsemana.com/uploads/docs/841bace1f1c7da4d12de800c07db1a73697644d8.pdf>

Galanter, M. (2001). Por qué los "poseedores" salen adelante: especulaciones sobre los límites del cambio jurídico. En M. (. García Villegas, *Sociología Jurídica. Teoría y sociología del derecho en los Estados Unidos* (págs. 69 -103). Bogotá: Unibiblos.

Galindo Pohl, R. (1987). *Report on the human rights situation in the Islamic Republic of Iran*. Economic and social council.

García Villegas, M. (2001). Estudio Preliminar. En M. (. García Villegas, *Sociología Jurídica: Teoría y sociología del derecho en Estados Unidos* (págs. 3 - 34). Bogotá: Unibiblos.

García Villegas, M., Jaramillo Sierra, I. C., & Restrepo Saldarriaga, E. (2006). Estudio Preliminar. En M. García Villegas, I. C. Jaramillo Sierra, & E. (. Restrepo Saldarriaga, *Crítica Jurídica* (págs. 7 - 66). Bogotá: Universidad de los Andes y Universidad Nacional.

Goldblatt, B. (2010). Evaluación del contenido de género en las reparaciones: Lecciones de Sudáfrica. En R. Rubio Marín, *¿Y qué fue de las mujeres? Género y reparaciones de violaciones de derechos humanos* (págs. 52 - 101). Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional.

Gómez, M. M. (2006). Los usos jerarquicos y excluyentes de la violencia. En L. Cabal, & C. Motta, *Más allá del derecho. Justicia y género en América Latina* (págs. 19 - 55). Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

Grupo de Trabajo de Memoria Histórica (GTMH). (2009). *La masacre de El Salado: Esa guerra no era nuestra*. Bogotá.

Grupo de Trabajo de Memoria Histórica (GTMH). (2010). *La masacre de Bahía Portete. Mujeres Wayuu en la mira*. Bogotá: Taurus.

Grupo de Trabajo de Memoria Histórica (GTMH). (2011). *La memoria histórica desde la perspectiva de género*. Bogotá: Pro-Offset Editorial .

Grupo de Trabajo de Memoria Histórica (GTMH). (2011). *Mujeres y Guerra. Víctimas y resistentes en el caribe colombiano*. Bogotá: Taurus.

Guillerot, J. (2010). Vinculando género y reparaciones en el Perú: Una oportunidad fallida. En R. Rubio Marín, *¿Y qué fue de las mujeres? Género y reparaciones de violaciones de derechos humanos* (págs. 148 - 212). Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional.

Guzmán, D. (2009). Reparaciones con enfoque de género: el potencial para transformar la discriminación y la exclusión. En F. d. Unifem, *Justicia Desigual. Género y derechos de las víctimas en Colombia* (págs. 165 - 192). Bogotá: UNIFEM.

Guzmán, D., & Upimny, R. (s.f.). *Justicia transicional desde abajo y con perspectiva de género*. Bogotá: Unifem.

Jaramillo, I. C. (2000). La crítica feminista al derecho. En R. West, *Género y teoría del derecho* (págs. 25 - 66). Bogotá: Ediciones Uniandes.

Jónasdóttir, A. (1993). ¿Le importa el sexo a la democracia? En A. Jónasdóttir, *El Poder del Amor* (págs. 253 -285). Universitat de València.

Kelsen, H. (2006). *Teoría pura del derecho*. Buenos Aires: Eudeba.

MacKinnon, C. (2006). Feminismo, marxismo, método y Estado: Hacia una teoría del derecho feminista. En M. García Villegas, I. C. Jaramillo Sierra, & E. (. Restrepo Saldarriaga, *Crítica Jurídica* (págs. 193 - 221). Bogotá: Universidad de los Andes y Universidad Nacional.

Manjoo, R. (2010). *Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias*. Consejo de Derechos Humanos, Documento A/HRC/14/22.

Memorial presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, No. 08001225200020098007701 (Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz).

Merry, S. (2010). *Derechos Humanos y violencia de género*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores y Universidad de los Andes.

Mesa de seguimiento al Auto 092 de la Corte Constitucional, anexo reservado (Mesa del A092). (2011). *Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual*. Bogotá: Antropos.

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. (2003). *Panorama actual de la región Montes de María y su entorno*.

Olsen, F. (1990). El sexo del derecho. En D. Kairys, *The Politics of Law*. Nueva York: Pantheon.

ONU Mujeres,. (2011). *El progreso de las mujeres en el mundo en busca de la justicia*. Nueva York: ONU Mujeres.

Organización de Naciones Unidas. (2002). *Selección de decisiones del Comité de Derechos Humanos adoptadas con arreglo al Protocolo Facultativo*. Nueva York y Ginebra.

Ortner, S. B., & Whitehead, H. (2000). Indagaciones acerca de los significados sexuales. En M. Lamas, *El Género: La construcción cultural de la diferencia sexual* (págs. 127-179). México D.F.: Miguel Ángel Porrúa.

Revista Semana. (30 de agosto de 2008). *Verdad Abierta*. Recuperado el 5 de septiembre de 2010, de La Masacre de El Salado: <http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/40-masacres/435-la-masacre-de-el-salado->

Ribeiro, M. (2008). Las mujeres negras en la lucha por sus derechos. *Nueva Sociedad*, 131 - 147.

Rombouts, H. (2010). Mujeres y reparaciones en Ruanda: Un largo camino por recorrer. En R. Rubio Marín, *¿Y qué fue de las mujeres? Género y reparaciones de violaciones de*

derechos humanos (págs. 215- 271). Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional.

Rubin, G. (2000). El tráfico de mujeres: notas sobre la "economía política" del sexo. En M. Lamas, *El Género: La construcción cultural de la diferencia sexual* (págs. 35 - 96). México D.F.: Miguel Ángel Porrúa.

Rubio Marín, R. (2010). El género de las reparaciones: La agenda pendiente. En R. (. Rubio Marín, *¿Y qué fue de las mujeres? Género y reparaciones de violaciones de derechos humanos* (págs. 20 - 50). Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional.

Scott, J. W. (2000). El Género: Una categoría útil para el análisis histórico. En M. Lamas, *El Género: La construcción cultural de la diferencia sexual* (págs. 265 - 302). México D.F.: Miguel Ángel Porrúa.

Secretario General de las Naciones Unidas. (2011). *Incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas y los programas del Sistema de las Naciones Unidas*. Documento E/2011/114, Ginebra.

Serrano, E. (2005). *Cervantes Virtual*. Recuperado el 25 de junio de 2011, de La teoría aristotélica de la justicia: www.cervantesvirtual.com/downloadPdf/la-teoria-aristotlica-de-la-justicia-0/

UNIFEM. (2010). *CEDAW en 10 minutos*. Buenos Aires: UNIFEM.

Uprimny, R., & Saffón, M. P. (2009). Reparaciones transformadoras, justicia distributiva y profundización democrática. En C. Díaz, S. Nelson, & R. Uprimny, *Reparar en Colombia: Los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión* (págs. 31 - 70). Bogotá: Dejusticia & ICTJ.

Uprimny, R., & Sanchez, C. (2010). Los dilemas de la restitución de tierras en Colombia. *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, 305 - 342.

Viveros , M. (2009). La sexualización de la raza y la racialización de la sexualidad en el contexto latinoamericano actual. *Revista Latinoamericana de Estudios de Familia* , 63 - 81.

Wills Obregón, M. E. (2007). El marco interpretativo. Por qué incluir no es representar. En M. E. Wills Obregón, *Inclusión sin representación, la irrupción política de las mujeres en Colombia 1970 – 2000*. Bogotá: Norma.